

Autogestion

N° 4- december 2022



Boletín de la red de la Economía de los Trabajadores y las Trabajadoras.

Bulletin du réseau l'Économie des travailleuses et des travailleurs.

Newsletter of the Workers' Economy Network.

Resumen - Table des matières - Summary

Autogestión en Argelia	3
Argentina	
Empresas recuperadas en Argentina en tiempos de Uber	8
Facundo Ortiz Núñez	
La nueva Ley Concursal facilita y prioriza que los trabajadores recuperen una empresa antes de su liquidación	19
Gessamí Forner	
Colombie	
La Reforma Agraria y rural integral, economía solidaria, la superación del hambre y el narcotráfico, y la construcción de la paz territorial	22
Rafael Enciso Patiño	
Argentina	
La Unidad Piquetera definió seguir con el plan de lucha	28
Mario Hernandez	
No dan las cuentas con el FMI	49
Mario Hernandez	
Trabajadoras de La Terre y de Coreme: «Se puede trabajar sin patrones»	75
Las empresas recuperadas lanzan su moneda: comprar y vender con soberanía	76
Mariana Di Mauro	
Tres ejemplos de empresas recuperadas: madygraf, la litoraleña y textiles pigüe	79
¡Viva MadyGraf bajo gestión obrera!	79
Mario Hernandez	
Empresas recuperadas en Argentina en tiempos de Uber	81
Facundo Ortiz Núñez	81
«Textiles Pigüé», del desalojo al desarrollo	89
Francisco Martínez	
Argentina	

¡Viva MadyGraf bajo gestión obrera!	93
Mario Hernandez	
État espagnol : Entreprises récupérées	95
Gessamí Forner	
Argentine	
Vive MadyGraf sous gestion ouvrière !	98
Mario Hernandez	
Ukraine : «La pratique de l'autogestion est généralisée »	100
Patrick Le Tréhondat	
La Coop de masques n'aurait pas dû mourir	103
Colombie : Réforme agraire et rurale globale	106
Rafael Enciso Patiño	
Ukraine: "The practice of self-management is widespread"	112
Patrick Le Trehondat	

Autogestión en Argelia

Publicamos la introducción de Robi Morder e Irène Paillard¹ al libro de Mohammed Harbi, « L'Autogestion en Algérie Une autre révolution ? (1963-1965) », publicado en 2022 por Syllepse. El libro que Mohammed Harbi nos confió para su publicación constituye - como él mismo nos dijo - un material para la historia de la autogestión en Argelia. En efecto, esta historia, que había dado lugar a obras y publicaciones sobre todo a principios de los años 70, como confirma la bibliografía, merece ser revisada a la luz de los archivos, testimonios y documentos recogidos posteriormente².

La autogestión en Argelia ha sido olvidada, fuera de los círculos militantes restringidos, o desfigurada, particularmente en Argelia, porque quienes fueron sus promotores, sus portadores, querían

perseguir una auténtica emancipación más allá de la independencia, lo que les enfrentó a la burocracia, al ejército y a la nueva burguesía, que se apropiaron del poder, de las prebendas y de los privilegios.

Entre estos promotores, que encarnan las tradiciones del movimiento obrero y del internacionalismo, en la práctica al servicio de la independencia de Argelia, se encontraban numerosos cuadros de la Federación Francesa del Frente de Liberación Nacional (FLN)³ con experiencia en el movimiento sindical, y franceses y europeos que aportaron sus conocimientos y su entusiasmo. Para denigrar la autogestión, los estatistas y otros conservadores no dudaron en utilizar insinuaciones calumniosas contra aquellos que, como argelinos en Francia, no habían luchado⁴, o insinuaciones xenófobas contra los «extranjeros».

Mohammed Harbi, al igual que otros, pagó muy caro sus

1. Robi Morder, abogado y politólogo, miembro de la asociación Autogestion e Irène Paillard, conservadora de bibliotecas jubilada, son miembros de Syllepse.

2. Junto con Mohammed Harbi, hemos preparado las notas, las presentaciones, la cronología y la bibliografía. Ambos son los únicos responsables de cualquier error u omisión.

3. Los acrónimos, siglas y algunos términos árabes figuran en un glosario en la página 335.

4. Sin embargo, fueron las contribuciones de estos trabajadores migrantes y de la Federación Francesa del FLN las que constituyeron los principales recursos del FLN.

convicciones y su libertad de expresión al ser encarcelado y luego puesto bajo arresto domiciliario tras el golpe de Estado de 1965⁵, hasta su fuga en 1973, y en el exilio. Sin embargo, su oposición a la política de los dirigentes del FLN no comenzó en 1965. Ya en la independencia, lo expresó al menos en tres puntos⁶: la cuestión de la nacionalidad⁷, la prohibición del Partido Comunista Argelino⁸ y el amaño del congreso sindical⁹. Recién nombrado embajador

en el Líbano en el momento de los «decretos de marzo»¹⁰, aceptó ser asesor de la presidencia únicamente para la aplicación de la autogestión.

Se trata de una obra preciosa, porque si Mohammed Harbi es un militante, un partidario de la democracia y de la autogestión, es con el rigor de un historiador que nos ofrece sus reflexiones. En primer lugar, el texto es el resultado de un trabajo basado en tres conferencias sobre autogestión celebradas en 2011, 2015 y 2018¹¹ que no habían sido publicadas en su momento, seguido de un extracto de un artículo de 1982 en *Les Temps modernes* que da el contexto político y social de los años 1962-1965, y un artículo publicado en *Révolution africaine* después del congreso de Trípoli.

5. Ahmed Ben Bella, Presidente del Consejo en 1962 y luego Presidente de la República en 1963, fue derrocado por un golpe militar el 19 de junio de 1965. El ministro de Defensa, Houari Boumédiène, al tiempo que conservaba este ministerio, se convirtió en presidente hasta su muerte en diciembre de 1978.

6. Conferencia de Mohammed Harbi el 30 de noviembre de 2011 en la Bourse du Travail de París.

7. El proyecto define el significado de la palabra «argelino» en relación con la nacionalidad de origen. Se refería a toda persona con al menos dos ascendientes en la línea paterna nacida en Argelia y que disfrutaba de la condición de musulmán en ese país. Elaborado a partir de una propuesta gubernamental por una comisión de la Asamblea Nacional Constituyente, provocó reacciones que se hicieron públicas tras la apertura de la segunda sesión de la Asamblea, el 28 de febrero de 1963, y hasta la adopción del código - por 85 votos contra 33 - el 12 de marzo de 1963.

8. El Partido Comunista argelino fue prohibido en noviembre de 1962. El anuncio oficial lo hizo el Ministro de Información en una conferencia de prensa el 29 de noviembre, pero la decisión había sido tomada unos días antes por el gobierno.

9. Muchos cargos sindicales fueron sustituidos

por delegados designados. En el primer congreso de la UGTA (enero de 1963), los responsables del FLN expulsaron a los dirigentes regulares manu militari, con el objetivo de subordinar el sindicato al partido. Safi Boudissa se convirtió en secretario general.

10. En marzo de 1963 se promulgan los decretos de autogestión.

11. «Autogestión: mito o realidad, Argelia 1962-1965», organizado por la Asociación autogestión el 30 de noviembre de 2011 en la Bourse du travail de París; debate con motivo de la proyección de «L'Algérie du possible», del Festival des droits de l'homme, 3 de febrero de 2017, MJC de Cahors; «L'autogestion dans les années 1968», 13 de octubre de 2018, en los locales de la Union syndicale Solidaires de París.

Mohammed Harbi se apoya en –y nos da– los materiales en los que se basa. Estos escritos, documentos, artículos y archivos son inéditos o inaccesibles. Cabe recordar que tuvo el mérito de salvar gran cantidad de documentación y archivos, y que ésta fue una de sus principales preocupaciones durante el golpe de Estado¹². Era importante que nadie olvidara, era importante transmitir, y era importante pensar en trabajar y reflexionar sobre los experimentos en curso, y particularmente sobre los fracasos y sus causas. El «informe Favret» desapareció en 1965, pero se conservó una síntesis y las investigaciones, y es una visión de conjunto que constituye – tras los textos de Mohammed Harbi – la primera parte del libro.

La segunda parte consiste en informes y artículos de *Révolution africaine*, de la que Mohammed Harbi fue director desde el verano de 1963 hasta el verano de 1964. Este semanario de calidad acompañó la implementación de la autogestión sin ocultar los problemas y obstáculos. Sólo disponible en algunas bibliotecas, este periódico merece ser digitalizado

12. Memorias filmadas, entrevista n° 17, «El golpe, la resistencia a la detención, los inicios de la oposición», www.syllepse.net/syllepse-images/mohamed-harbi--me--moires-filme--s--sommaire.pdf

y difundido ampliamente. Por último, en la tercera parte, los documentos, en su mayoría también inéditos, en particular el texto completo de la carta de Daniel Guérin a Ben Bella.

Estos informes, artículos y documentos nos acercan al terreno, a cuestiones concretas: salarios, situación de las distintas categorías, condiciones de trabajo, conflictos con la administración, problemas de producción, expresión de los trabajadores.

Hay que recordar la realidad social de Argelia en la época de la autogestión¹³, porque los trabajadores del sector autogestionado son una minoría en la población, 200.000 en las explotaciones agrícolas, 10.000 en la industria, esencialmente la pequeña industria: el proletariado urbano es de 110.000 a 120.000 trabajadores en 7.000 a 8.000 empresas. Fuera de esto, los trabajadores agrícolas¹⁴, estacionales o jornaleros, son unos 450.000. También hay 450.000 propietarios de entre 1 y 10 hectáreas y un millón de agricultores

13. Datos detallados en Gérard Chaliand «Quelle Algérie?», *Partisans*, n° 15, abril-mayo de 1964.

14. En los documentos del Informe Favret y en los artículos de *Révolution africaine*, los trabajadores agrícolas son siempre llamados «ouvriers». Las mujeres están ausentes; no se encuentran como asalariadas, sino en las explotaciones familiares.

desempleados sin tierra y sin trabajo. Por otro lado, 170.000 propietarios poseen entre 10 y 50 hectáreas y 25.000 grandes propietarios poseen más de 50 hectáreas. Un tercio de la población es urbana, con un subproletariado creciente, una pequeña burguesía estimada en unas 170.000 personas (artesanos, pequeños comerciantes), 4.000 profesiones liberales y una burguesía estimada en 50.000 (comerciantes, mercaderes, propietarios de edificios, pequeños industriales del sector artesanal). Se nacionalizan 450 empresas industriales, el 80% de ellas del sector artesanal. Todavía había 130.000 establecimientos, de los cuales entre 2.500 y 3.000 eran industriales, en su mayoría en manos de extranjeros; 120.000 establecimientos comerciales y artesanales estaban en manos de capital privado argelino. El 1 de abril de 1963, el aparato estatal contaba con 70.000 personas (13.500 a 14.000 franceses, principalmente del sector de la cooperación, 22.100 ejecutivos argelinos formados en las escuelas de administración colonial, 34.000 ejecutivos del FLN).

El presente trabajo y los documentos pueden llevar a pensar que la autogestión era una «misión imposible», hasta el punto de que el historiador, con el apoyo

de las pruebas, desengaña al mundo, a riesgo de «desesperar a Billancourt¹, mientras que la autogestión en Argelia había constituido para muchos, al menos en Francia y Europa, si no un mito, al menos una leyenda. En realidad, la visión puede ser más movilizadora de lo que parece, ya que se trata -al describir la realidad tal y como era- de identificar los obstáculos, los mecanismos defectuosos, los defectos y las carencias para extraer algunas lecciones para el futuro.

¿Podemos hablar del fracaso de la autogestión si la experiencia aún no ha tenido la oportunidad de desarrollarse realmente? Resulta paradójico que -incluso después del golpe de Estado de Boumédiène- las referencias al socialismo y al sector autogestionado, especialmente el agrícola, permanezcan durante mucho tiempo. Es bien sabido que las palabras no son vinculantes, pero el hecho de que incluso los estatistas autoritarios se sientan obligados a

1. Referencia a la fábrica de Renault en Billancourt. «Il ne faut pas désespérer Billancourt» es una fórmula que significa que no hay que decir necesariamente la verdad a los trabajadores, por miedo a desmoralizarlos. Cuando Gérard Chaliand, que había sido redactor jefe de *Révolution africaine*, intentó publicar *L'Algérie est-elle socialiste*, se encontró con muchas reticencias e incomprensión en la izquierda francesa. Sin embargo, su libro fue publicado por François Maspero en 1964.

mantener estas palabras en uso es prueba de una cierta adhesión de grandes partes de la población, principalmente la población trabajadora, a lo que se refiere a las aspiraciones de justicia social. No olvidemos que al principio de la autogestión, hubo un movimiento espontáneo en 1962 para ocupar terrenos y propiedades vacías, que vino de abajo, no de arriba.

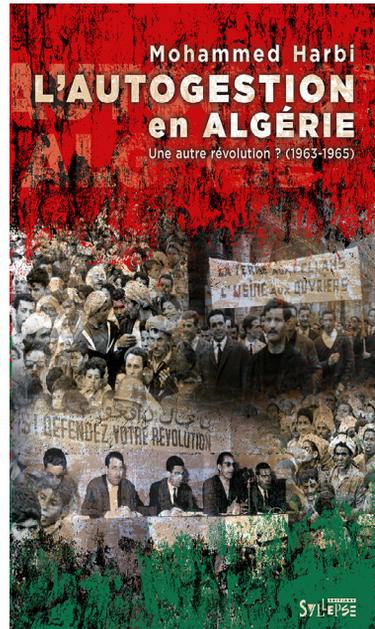
Sin duda, si la comparamos con la Comuna de 1871, que no pudo prosperar más allá de una corta primavera (más corta que los experimentos de autogestión en Argelia, y cuyo fracaso se concretó con una masacre), la utopía movilizadora de la autogestión merece ser desvelada y reavivada.

Mémoires filmés www.syllepse.net/syllepse_images/mohamed-harbi--me--moires-filme--s--somaire.pdf.

Débat après la projection de l'Algérie du possible, de Viviane Candau, présentation : <https://autogestion.asso.fr/lalgerie-du-possible-le-debat-continue/>, video <https://www.dailymotion.com/video/x57cbxe>.

« Le précédent algérien » (2018), colloque « L'autogestion dans les années 1968 », Association Autogestion, 13 octobre, dans les locaux de l'Union syndicale Solidaires,

<https://vimeo.com/320930219>.



Argentina

Empresas recuperadas en Argentina en tiempos de Uber

Facundo Ortiz Núñez

Todo empieza con un vaciamiento. Tras una debacle patronal, el propietario decide llevarse todo lo que puede, empezando a transferir fondos de manera irregular e incurriendo en estafa. Deja de liquidar los impuestos, de pagar los insumos a proveedores, deja de pagar a sus trabajadores. Aldo todavía recuerda ese momento que, en el caso de La Litoraleña, se dio en 2015: “Los primeros días, él no nos dijo nada. El subdelegado nos decía: ‘Mañana se deposita. Mañana, mañana, mañana’. Y en ese tiempo, que nos pagaban 40.000 pesos, te depositaba 2.000. ¿Qué hacés con 2.000 pesos? Nos venía envolviendo, envolviendo. Él estaba bien, los que sufríamos éramos nosotros. Y teníamos familias. Fue muy sufrido”.

La fábrica de tapas de empanadas y pascualinas en la que trabajaba desde

hacia más de dos décadas se dirigía a la quiebra. Para Aldo, y para sus casi cien compañeros, la resignación suponía caer en el desempleo, perder los beneficios por antigüedad, y para los más veteranos, ver imposibilitada su jubilación. Suponía igualmente una derrota más amplia: a la pérdida de los puestos de trabajo se le sumarían la pérdida de la experiencia acumulada, del saber hacer que los trabajadores habían desarrollado con los años, del rol que la fábrica ocupaba en el vecindario. Perdían ellos, sus familias, los vecinos. Perdían todos. “Hasta que decidimos tomarnos la empresa. Fue duro. Pero no quedaba otra”.

El 27 de octubre de 2015, los empleados de esta fábrica del barrio porteño de Chacarita, reunidos en asamblea, tomaron una decisión: ocupar las instalaciones y parar las actividades después de meses de salario caído. Para entonces, la empresa había entrado en concurso de acreedores. El dueño había llegado a emitir 800 cheques sin fondo, la deuda acumulada superaba hasta diez veces el patrimonio de la empresa: le debía plata a todo el mundo. Y cuando supo que los empleados habían ocupado el lugar, puso fin a sus promesas vacías y mandó telegramas a 29 de

ellos para avisarles que estaban despedidos. Pero su Sociedad Anónima estaba desapareciendo, y, en términos efectivos, ya no estaba en sus manos. Ante el abandono y la incapacidad de la patronal, sus trabajadores la estaban convirtiendo en una empresa recuperada.

Ocupar

“Hay tres momentos que son comunes a la mayoría de las empresas recuperadas: el de la ocupación, el de la resistencia o la organización de esa ocupación, que significa abrir las puertas de la fábrica a la comunidad, recibir la solidaridad de otras experiencias, repensarse, buscar financiamiento, fondos de huelga para poder sostener esa ocupación, esa resistencia. Y después hay un tercer momento, que es la producción. Y esa decisión puede durar menos o más, puede ser más traumática o menos traumática. En este caso fue muy rápido”, explica Fabián Pierucci, hoy el presidente de la Cooperativa de Trabajo La Litoraleña, que en la actualidad da empleo a 48 personas.

Él no era parte de la empresa antes de que la ocuparan, sino que se incorporó cuando ya estaba en marcha la formación de la cooperativa. Llegó como representante de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) que surgió en 2006 a partir de distintas agrupaciones de

empresas recuperadas que proliferaron a comienzos de la década. Su objetivo en La Litoraleña era colaborar en las tareas de capacitación, transferencia tecnológica y gestión. Y también algo más: con el Grupo Alavío, estaba rodando una serie llamada “Redes de Trabajo y la Autogestión”. Filmó todo el proceso de ocupación de La Litoraleña y lo que vino después. Y nunca más se marchó.



La situación de partida era crítica. La palabra “cooperativa” hacía saltar las alarmas. Los proveedores no querían vender. Los clientes no querían comprar. El sindicato pastero había dicho que los acompañaría en la lucha, pero, cuando formaron la cooperativa, se fueron también: sin un nuevo patrón al mando, perdían su cuota mensual. Los administrativos, gerentes, capataces, los vendedores, gran parte de los choferes, todos aquellos que estaban más cerca de la patronal siguieron el mismo

camino. De los 115 empleados originales solo quedaron 70, los trabajadores de planta. Se había esfumado la jerarquía al completo, y con ella todo lo que sabían hacer. Los que mantenían la ocupación solo tenían experiencia de fabricación, ninguna de gestión.

El tejido que les permitiera resistir debía ser otro: los vecinos, que los ayudaron y apoyaron desde el primer momento. Otras cooperativas en situación similar, que los bancaron a lo largo de la ocupación trayendo alimentos. Las organizaciones sociales, que colaboraron en los momentos de movilización para hacer frente a las amenazas de desalojo, con la policía presente en la puerta todos los días.

“Empezamos a pensar como en una lógica inversa”, cuenta Pierucci. “A ver qué entraba, cuántas bolsas de harina, qué producción se hacía por día, qué cosas constituían el costo. Hay como que ir armando un rompecabezas”.

Uno se encargaba de recibir la harina, así que sabía cuántas bolsas solían entrar. Otro se encargaba de ser operario, así que sabía cuántas porciones de tapitas y empanadas se hacían al día. Rápidamente, los integrantes de la fábrica tuvieron que aprender a asumir otras responsabilidades, a negociar, pelear precios, a hacerse cargo de la administración del día a día de la empresa con el fin de mantener su fuente de trabajo.

“Estuvimos solamente una semana sin producir. Había en la cámara algo de producto el día del cierre. Y tiene un vencimiento corto. Treinta y pico de días, si no se echa a perder. Eso no lo íbamos a tirar, así que se empezó a vender. Empezamos a recuperar clientes, a explicarles la situación...”. En apenas unos días, el 6 de noviembre, en medio de la ocupación, la producción volvía a arrancar.

Como siguiente paso, pidieron al juzgado que acelerara la quiebra y armaron la cooperativa, que se formó oficialmente en enero de 2016. Pero el mismo juzgado que verbalmente se había mostrado favorable al plan, cuando llegó el momento de decretar la quiebra, y frente al plan de negocio que le propusieron los trabajadores, les negó el permiso de explotación argumentando que la ocupación era ilegal. Comenzaba así un largo proceso judicial que sigue abierto hasta la fecha.

“Sale el (último) fallo en contra en plena pandemia, fin del 2020, que nos tenemos que ir de la fábrica. Otra vez. Y volvimos a apelar. Creo que vamos a ganar la apelación de nuevo, pero es como la historia sin fin. Hace seis años que estamos acá. Hoy estamos legalmente, está la fábrica habilitada como cooperativa. La ocupación, digamos, es un símbolo. Pero apelamos un fallo de

desalojo, así que estamos con mucha inestabilidad”.

Resistir

La lucha contra el cierre de empresas y por la recuperación de fábricas y otras unidades productivas tiende a asociarse a la crisis iniciada en 2001. Sin embargo, aunque de manera menos visible, el proceso había comenzado al menos una década atrás, en pleno proceso de desindustrialización, y creció durante la década neoliberal, hasta llegar a un centenar durante el estallido social. Según los estudios que ha ido realizando el programa de Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en Argentina existen hoy día más de 400 empresas recuperadas, con alrededor de 15.000 trabajadores y trabajadoras. La realidad es que hoy, 20 años después, hay más empresas recuperadas que nunca.

Según Andrés Ruggeri, antropólogo social y coordinador de este programa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA desde 2002, esto indica que, para los trabajadores en situaciones de quiebra, la herramienta de la recuperación “tiene mucha proyección y se sigue usando. Sigue habiendo empresas recuperadas ahora, más de 50 de estas empresas recuperadas de las 400 son de los últimos dos o tres años. Y esto lo que indica es que cuando cierra una fábrica, una empresa, no

necesariamente se va a convertir en una empresa recuperada, pero la opción de recuperarla está presente, aparece en la discusión”.

En esto contribuyen varios factores. Las experiencias pasadas han permitido ir reforzando redes sociales de apoyo que hoy ofrecen recursos a las nuevas empresas recuperadas, asesoramiento, abogados para el proceso judicial, experiencia acerca de lo que vaya o pueda suceder a continuación. “Cada experiencia evita, por asistencia de las redes, tener que empezar todo de cero, tener que descubrir el proceso como si nunca hubiera existido”.

Al mismo tiempo, la relación de este sector con el Estado resulta insoslayable. No es lo mismo tener enfrente un Gobierno que no interviene, que uno que se opone o uno que apoya. Hoy la situación se revela menos conflictiva que en otros momentos, como durante el Gobierno de Mauricio Macri. Se puso en marcha el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y hay referentes históricos de las recuperadas que ocupan puestos en instituciones, lo que facilita el acceso a financiamiento.

“Pero las cuestiones fundamentales, que son cambios de legislación, cambios en lo estructural de la forma en que el Estado trata a las empresas recuperadas, no se ha modificado. Sigue habiendo precariedad, siguen

sin tocarse las cuestiones que tienen que ver con la seguridad social, con los derechos laborales. Con el ver que hay un sujeto trabajador diferente al trabajador asalariado típico, en relación de dependencia, y que tampoco es un empresario ni tampoco un cuentapropista. La empresa recuperada es una entidad distinta, un tipo de organización diferente. Ese tipo de trabajador, que es colectivo, sigue sin ser reconocido”.

En 2011, la reforma a la Ley de Quiebras dio prioridad a los trabajadores, en el papel, para recuperar una empresa en procesos concursales si se constituían como cooperativa. Pero la puesta en práctica dista mucho de cumplir la teoría. En la mayoría de los casos, la formación de la cooperativa no es más que el primer paso hacia un laberinto judicial. Los tribunales suelen fallar en contra de los trabajadores, obligándolos a apelar una y otra vez, a vivir bajo continuas amenazas de desalojo y otorgando a lo sumo prórrogas temporales.

En ocasiones, como sucedió en La Litoraleña, los anteriores dueños dejan grandes deudas que los trabajadores deben asumir y resolver. En su caso, lograron comprar la quiebra a partir de los créditos que quedaron de salario caído e indemnizaciones. Pero en el proceso debieron incluso hacer frente a un intento de remate del inmueble de las instalaciones, dictada arbitrariamente por un juzgado.

La actual legislación sigue teniendo las suficientes lagunas como para estar abierta a la interpretación de un poder judicial que opera bajo lógicas de clase y con una visión patronal. De los jueces depende que se acepten o no los planes que propongan los trabajadores.

Este cruce de factores provoca una situación paradójica para las recuperadas. Por un lado, el diálogo con el Estado lleva a que el Ministerio de Desarrollo Productivo esté a punto de ejecutar el programa de financiamiento REDECO, el primero que se realiza con la finalidad específica de apoyar a las empresas recuperadas conformadas como cooperativas. Hasta 1.200 millones de pesos se invertirán en proyectos para compra de maquinarias y otras operaciones. Pero debido a la falta de compromiso con el reconocimiento del modelo autogestionado en sí, no sería imposible que, una vez se reciba un determinado aporte, los tribunales dicten al día siguiente una orden de desalojo.

La falta de reconocimiento institucional coloca a las empresas recuperadas en una zona gris de la economía. Deben pagar impuestos, pero no pueden acceder a créditos. Tampoco a Aseguradoras de riesgo de trabajo, sino que han de contratar seguros por accidente. Deben aportar a la obra social, pero la jubilación que reciben es mínima. En su camino

por el reconocimiento legal, han de cumplir con toda clase de requisitos administrativos —obtener permisos de explotación, municipales, registrar la fábrica, contratar seguros—, pero tienden a ser en buena medida invisibles para el poder hasta que no se produce una crisis.

Esta situación se agravó durante la pandemia y el aislamiento social preventivo obligatorio, que llevó incluso al cierre de casos emblemáticos del mundo de las recuperadas, como sucedió con el Hotel Bauen. Durante la pandemia, el Estado implementó dos herramientas para sostener los empleos. La Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP), que financiaba la mitad de los salarios de los trabajadores de empresas en relación de dependencia, y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a los trabajadores no registrados, los cuentapropistas o integrantes de la Economía popular. Pero los trabajadores de cooperativas de trabajo autogestionadas no eran ni una cosa ni otra. Algunas lograron entrar dentro de la categoría de los sectores esenciales para mantener sus actividades. El resto, hasta que llegaron parches de emergencia, no pudieron beneficiarse de ninguna de las dos políticas.

“¿Y por qué se quedaron afuera? Porque nadie las veía. (...) Fue muy sintomático de hasta qué punto la autogestión es invisible en ciertos

sectores del poder, incluso, ‘bienintencionados’. A lo sumo, los ven como un problema. ‘Bueno, qué hacemos con estos tipos’. Eso se lo pueden llegar a preguntar. Lo que no se plantean es: ‘Esto es una alternativa. Esto es una forma económica diferente y nos interesa que se potencie’. Eso de ninguna manera”.

En la raíz parece hallarse la falta de voluntad política. Pero hasta la voluntad política necesita una fuerza social que la impulse. Las grandes movilizaciones a comienzos de los 2000 en apoyo de las recuperadas y de lo que representaban en aquel momento, que lograron en ocasiones incluso que se votaran leyes de expropiación, hoy parecen haber quedado atrás. “(En 2001) eran parte de todo un gran proceso de movilización social, de cuestionamiento al sistema político, económico, y las empresas recuperadas eran una caja de resonancia de muchas cosas, mucho más de lo que representaban en números económicos, en la cantidad de gente implicada. Pero ahora están reducidas a lo que son. No les alcanza esa fuerza como para, por ejemplo, provocar que en el Congreso Nacional se vote una ley de trabajo autogestionado. Se ha convertido en un movimiento que, si bien es más grande que antes, es más débil simbólica y políticamente, porque ahora tiene menos capacidad de impactar en las políticas públicas”.

Producir

Hace 20 años, el fenómeno de las empresas recuperadas llegó a ser percibido por el campo popular como la punta de lanza de un proyecto impugnador que aspiraba a cambiar estructuralmente la sociedad, convirtiéndose en un mito para las luchas anticapitalistas dentro y fuera de las fronteras. Para el poder, ya sea con una mirada más o menos benigna, han sido interpretadas a lo sumo como una fórmula de emergencia y contención para sectores vulnerables. Pero a dos décadas de aquel momento, seguir entendiendo la autogestión como una isla al margen de la sociedad en la que transita les hace un flaco favor a las posibilidades reales de desarrollo de este modelo alternativo y a sus trabajadores.

Lo que fundamenta y permite el mantenimiento de una empresa autogestionada sigue siendo su capacidad de salvaguardar las fuentes de trabajo, producir y así asegurarles ingresos a sus trabajadores. Un pequeño emprendimiento puede quizá sostenerse en un mercado paralelo solidario, pero no hay forma de que una fábrica metalúrgica pueda asegurar decenas o centenares de salarios dignos a espaldas del mundo, menos aún ante crisis sistémicas. Se hace necesario realizar un balance crítico de estas experiencias si lo que se quiere es rearmar un proyecto desde abajo que pueda disputar el modelo

económico, la gestión del trabajo y la distribución de la riqueza.

No cabe duda de que las experiencias de autogestión se ven obligadas a vivir remando contra grandes obstáculos. Pero hoy en día, la inestabilidad parece el pan de cada día de los trabajadores de cualquier rubro. Numerosas empresas recuperadas han sobrevivido hasta ahora a cambios de gobierno, aumentos inflacionarios, tarifazos e incluso a una pandemia. Y lo han hecho bajo la dirección de sus propios trabajadores, saltándose intermediarios, manteniendo un funcionamiento interno distinto a las lógicas capitalistas, apostando por un modelo más democrático y horizontal, prestándose ayuda y recursos unas a otras. Todo ello, mientras navegan en medio de un mercado agresivo que de solidario tiene más bien poco.

Para Andrés Ruggeri, las ventajas concretas de las recuperadas se mantienen, y seguramente expliquen por qué este modelo sigue creciendo: “Muchas han logrado reconstruir esos empleos y su actividad económica, y lo más importante no es que lo hayan logrado, sino cómo lo lograron. La cuestión de la autogestión, en muchos casos, es más cualitativa que cuantitativa. Es un trabajo con menos explotación. Implica también ganar mejores condiciones de trabajo, más libertad, más solidaridad, aunque parezca una palabra demasiado repetida, pero que es real,

y en ese sentido, cualitativamente, permite dar otras respuestas. Una empresa autogestionada puede permitirse pensar cosas que a la empresa capitalista no le interesan, que tienen que ver no solamente con el bienestar de sus trabajadores, sino con el bienestar social general. Por ejemplo, plantearse que determinado producto no es bueno para el medio ambiente y buscar una solución. La empresa capitalista va a hacer los números y dice: “Si un producto más ecológico nos da más ganancia, vamos por ahí. Pero si perdemos plata, no nos interesa, que se hundan”.

En una época en la que vivimos una arremetida de renovadas formas de explotación al alero de las nuevas tecnologías, camufladas bajo el eslogan del “emprendimiento personal”, que solo fomentan la disgregación, el individualismo y la competitividad entre trabajadores en un contexto de creciente precariedad, las empresas recuperadas abren la puerta también a volver a tejer lazos entre trabajadores en un momento en que parecen haberse perdido.

En la Cooperativa de Trabajo La Litoralense se asentó desde el inicio la asamblea como órgano de decisión. Tienen un Consejo de administración determinado por la Ley de Cooperativas que, en este caso, se corresponde con la dirección operativa de la fábrica. Sus reuniones responden a un órgano de planificación

ampliado: participan los responsables de cada uno de los sectores del organigrama, y cualquier trabajador de la fábrica puede asistir. Todos los cargos, desde los miembros del Consejo a los responsables de cada sector, se van rotando. Desde el primer al último integrante de la fábrica reciben el mismo salario, independientemente de sus responsabilidades; otra decisión que partió de aquella primera asamblea que llevó a la ocupación y al camino de la autogestión.

“Acá no hay plusvalía”, subraya Fabián Pierucci, que pronto completará sus tres años como presidente de la cooperativa, cediendo paso a un nuevo Consejo. “Porque todos tenemos el mismo ingreso. No hay forma de que haya plusvalía en esta fábrica”.

En paralelo, la cooperativa mantiene una política de “puertas abiertas”. Intenta mantener un estrecho lazo con el barrio, realizando trabajo comunitario, apoyando a otras cooperativas en resistencia y recibiendo regularmente a escuelas para compartir la experiencia entre los más chicos. En mayor o menor medida, todas las empresas recuperadas intentan devolverle algo a la comunidad que las apoyó y alimentar la red que les permitió levantar su proyecto.

“No hay que idealizar estas experiencias. Tampoco infravalorarlas. Pero hay que estar todos los días”, añade.

El trabajo prosigue tras los muros de la fábrica de tapas y empanadas de Chacarita. Ataviados con sus redes para el cabello y uniformes blancos, los compañeros de la fábrica preparan la mezcla de harina y margarina, añaden las capas de hojaldre, se lamina, se reduce el espesor, se corta. La materia prima recorre su ciclo a través de las máquinas, siendo transportada y tratada de una cinta a otra por los trabajadores antes de encarar el envasado, hasta que el producto queda listo para el embalado, atraviesa el montacargas y las tapas ingresan al sector de frío para su posterior distribución.

“Es duro en algún sentido, pero afuera también. Lo que tiene es que la intensidad del trabajo es consensuada. ¿Vieron la película *Tiempos Modernos* de Chaplin? El forzudo que, cada vez que cambia la palanca, anda más rápido la velocidad de la cinta, y Chaplin se enloquece. No puede completar su tarea. Eso no existe acá. No existe. Tenemos nuestro comedor, nos reunimos, hacemos turnos, tenemos tiempos laxos. Nadie le va a molestar a nadie. Eso está buenísimo”.

Hemos reflexionado ya bastante con nuestra comunidad sobre aquel fatídico 12 de agosto de 2004, cuando ocupando la fábrica en resguardo de los puestos de trabajo fuimos desalojados injustamente. Lo pudimos hacer más sobre la práctica

–a veces equivocándonos y sin experiencia, se debe reconocer– que, desde la teoría, pero los resultados, por fortuna, están a la vista: casi ciento setenta puestos de trabajo –por citar solo los directos–, plena producción, alianzas estratégicas con el mercado, crecimiento sostenido. Todo, con el único objetivo de generar y compartir.

Es que, en estos últimos tiempos, y más precisamente luego de haber escriturado nuestras unidades productivas en 2014, venimos diciendo que lo mejor está por llegar. Y esto no terminó, por suerte: ya iremos comunicando más adelante a qué se dedica una organización social y productiva cuando puede estabilizar sus criterios de trabajo e ir en búsqueda del desarrollo de otras actividades.

Fue con visión, con estrategia, mucha decisión y principalmente no especulando, ofreciéndonos generosos siempre ante nuestros vecinos y conciudadanos, a quienes siempre se resalta. Les agradecemos la infinita paciencia que han tenido para con nosotros y nosotras de esperar los tiempos de maduración de estos procesos que son tan lindos como dificultosos por la precariedad existente en cada una de las fábricas y empresas recuperadas –más de quinientas en el país– al no tener la titularidad de los predios.

Pasa que, si se demora en el tiempo lo que valientes mujeres y hombres

quieren convidar, la mayoría de las veces es por la falta de decisión política y, sobre todo, por el poco conocimiento de las leyes que atienden esta problemática.

Hombres y mujeres sí, pero principalmente ellas, nuestras históricas compañeras, las primeras violentadas, las primeras en ver el humo, después los estruendos, luego los insultos y finalmente los palos. La orden judicial, no. Esa papeleta no, ahora que recuerdo. Porque arteros y bien disciplinados se suelen presentar a hacerse los malos con los laburantes, pero nunca con los evasores.

Y ahí están entonces las compañeras y los pibes de Nueva Generación en Wilde, violentamente reprimidas; que luego de eso consiguieron una Ley de Expropiación pero todavía se encuentran afuera de sus puestos de trabajo, cosa que nadie sabe a ciencia cierta explicar.

En este día, lo que queremos expresar a nuestros compañeros y compañeras que están con la angustia de estar afuera o de estar esperando en qué momento llega la arbitrariedad de los jueces, la violencia instalada y lo que eso provoca, es que resistan, que peleen, que acusen, que exijan, que se abracen y estén siempre unidas y unidos. Les queremos expresar que se puede volver, porque nos asisten la verdad y el derecho por más que exista en este país un Poder Judicial

cada vez más corrupto y alejado de pensar en impartir justicia.

Hoy Pedro me preguntó por teléfono si ya había llegado yo a la fábrica. El tipo, como todos los años, se toma el trabajo de ir viendo uno por uno y una por una a las personas que aquel día estuvimos y nos da un apretón de manos y un beso. Me tocó mi abrazo, nada mejor me sucederá este día. Pedro, como todos nosotros, aprendió que es mejor tragar un poco amargo para después poder escupir dulce. Porque actuando así queda bien claro quiénes son los violentos y a qué tipo de intereses les gusta responder.

Pero que nadie confunda toalla con mondongo. Exigimos la inmediata restitución en manos de los y las trabajadoras de todos los espacios de los que fueron despojados, porque ya quedó demostrado -y vale más en estos tiempos del "sálvese quien pueda"-, lo que son capaces de hacer las obreras y obreros de la autogestión cuando se organizan y pelean.

Lo que pasó, y sigue pasando lamentablemente, tiene que servir para algo. Y para lograr nuestras metas, tenemos que seguir formándonos, escuchar a nuestros sobrevivientes, lograr pensamiento crítico para así poder identificar a los mismos de siempre, que se quieren quedar con el trabajo, ni más ni menos, de millones de argentinas y argentinos.

(*) Francisco Martínez es director de la Cooperativa de Trabajadores “Textiles Pigüé”, empresa recuperada que presidió e integra desde su fundación, y uno de los referentes del campo de la autogestión en el país.

Los trabajadores de Cresta Roja proponen soluciones para un prolongado conflicto

A consecuencia de un conflicto que ya lleva varios años sin resolver, otra vez los trabajadores de la empresa Cresta Roja, volvieron a manifestar su protesta. Esta vez, cortando la autopista Cañuelas-Ezeiza durante varias horas y contando con el apoyo del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER).

Desde el 2014 que los trabajadores suspendidos y despedidos de Cresta Roja continúan la lucha por la recuperación de una empresa que en los 4 años de macrismo se desguazó, perdiéndose más de 2.000 puestos de trabajo. Ahora esperan que los reciban autoridades nacionales y de la Provincia de Buenos Aires para buscar una salida que incluya a todos los trabajadores, con la propuesta de continuidad a través de la Cooperativa La Cresta.

Fuentes: [El Salto](#), [APU](#), [La Izquierda Diario](#), [Resumen Latinoamericano](#)

La nueva Ley Concursal facilita y prioriza que los trabajadores recuperen una empresa antes de su liquidación

Gessamí Forner

El proyecto de ley se aprobó ayer en el Pleno del Congreso y enfila su tramitación en el Senado. El derecho a la información y consulta del estado financiero previsiblemente será abordado desde el nuevo Estatuto del Trabajo que redactará el ministerio que gestiona Yolanda Díaz.

“Son dos pasos de gigante”, resume el parlamentario de Unidas Podemos Roberto Uriarte sobre las dos enmiendas introducidas por su formación en el proyecto de la nueva Ley Concursal, votada ayer en el Pleno del Congreso y que enfila su tramitación en el Senado. Facilitan que los trabajadores recuperen una empresa que entra en concurso de acreedores mediante la capitalización del paro —sin necesidad de llegar a estar

desempleado— y prioriza la candidatura de los trabajadores en la subasta de liquidación para que la plantilla forme una sociedad cooperativa, laboral o participada.

La modificación de la Ley Concursal es un requerimiento europeo para trasponer una directiva comunitaria “que intenta hacer justicia: proponer mecanismos eficientes para salvar el máximo número posible de empresas que están pasando por una situación de insolvencia”, explica el diputado. La Unión Europea impulsó a España a reformar lo que se conoce como “ley de segunda oportunidad”, empresas en apuros económicos pero con viabilidad a largo plazo.

La actualización de la Ley Concursal depende del Ministerio de Justicia, cartera que gestiona el partido socialista. El nudo de las negociaciones entre las formaciones parlamentarias se ha situado en el nivel de deuda pública que los organismos públicos — Seguridad Social y Hacienda— pueden condonar. El acuerdo final ha multiplicado por diez las cifras actuales: de 1.000 a 10.000 euros cada organismo. Además, Justicia ha añadido un relevante paquete

de medidas que pretende agilizar los trámites para que la ley actúe de forma preventiva y las empresas con dificultades no lleguen a un punto de no retorno, con una elevada deuda e intereses imposibles de asumir para los trabajadores interesados en hacerse cargo de la empresa.

Para facilitar que los trabajadores recuperen una empresa, la nueva normativa incluye la enmienda que prioriza la propuesta de los trabajadores frente a candidatos externos para hacerse con la gestión de la empresa. El mantenimiento de los empleos es el objetivo de esta enmienda de la coalición de izquierdas, así como favorecer la economía social. Para poder ejecutar el rescate de la empresa, los trabajadores podrán capitalizar el tiempo que acumulaban de cotización al desempleo, sin esperar a que un juez liquide la empresa, los trabajadores se den de alta en el paro y, finalmente, puedan capitalizar el desempleo. Acelerar este proceso evitará que las empresas sigan generando deuda.

El diputado, y jurista, Roberto Uriarte considera que estas dos enmiendas atienden el mandato del artículo 129.2 de la Constitución, “que encomienda a los poderes públicos promover las diversas formas de participación

en la empresa y sociedades cooperativas, como el acceso de los trabajadores a la propiedad”. Pero para ello, resalta Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva del sindicato vasco ELA, es necesario que se refuerce el derecho a la información y consulta de los trabajadores: “Nos hubiera gustado que se tomaran también medidas para facilitar una transparencia real para que las trabajadoras tengan elementos de juicio para abordar una negociación”, añade.

Uriarte resalta la labor de este sindicato, señalando que la última sentencia conseguida este mes en el conflicto que actualmente se considera la huelga más larga de Europa —los trabajadores en huelga indefinida de la empresa Novaltia cumplen hoy 1.073 días consecutivos sin acudir a sus puestos de trabajo— construye jurisprudencia. Y Uriarte alerta de que si bien la Ley Concursal depende de Justicia, la redacción del futuro Estatuto del Trabajo corresponde al ministerio de Yolanda Díaz, la cual lleva meses defendiendo públicamente la necesidad de desarrollar legalmente el fomento de la participación de los trabajadores en la gestión de empresas. Por ello, no es descabellado esperar que el próximo estatuto recoja

sentencias como las de Novaltia, que exigen que las empresas compartan con los empleados la situación económica real cuando estos realizan una consulta.

Igeregi valora positivamente los avances del proyecto de la futura Ley Concursal, pero indica que su aplicación se limitará a empresas de servicios y, como mucho, a alguna industrial, “con poca maquinaria y de escaso valor”. Echa en falta una ley más atrevida que facilite la transformación ecológica y haga partícipe al Estado de la empresa a través de acciones o participaciones, en el caso de que los trabajadores no tengan músculo financiero suficiente con la capitalización del paro.

El sindicato ELA llevaba meses a la espera del borrador de esta ley. A lo largo de los últimos 40 años han participado en decenas de recuperaciones, pero son auto-críticos con los procesos llevados a cabo: “Hemos recuperado empresas sin conseguir que funcionen de una manera diferente a la lógica capitalista, por eso estamos valorando qué medidas adoptar con Talaios Kooperatiba, para ver qué somos capaces de hacer en un futuro próximo”. Talaios es una cooperativa que asesora desde la economía social a otros proyectos.

El diario Diagonal, precursor de El Salto, entrevistó en 2014 a

trabajadores de la navarra Muebles Salcedo. Tras la crisis financiera de 2008, la empresa atravesó problemas económicos. Reduciendo el volumen de la plantilla, siguiendo las directrices de una auditoría externa, 50 trabajadores recuperaron la empresa en quiebra en 2012. Juan Antonio Pascual era uno de ellos, tenía entonces 58 años y pocas perspectivas de encontrar otro empleo antes de su jubilación, al igual que muchos de sus compañeros, volvió a explicar ayer a El Salto. Consiguieron capitalizar 1,1 millón de euros y cooperativizar la empresa. Hoy sigue fabricando muebles. Pascual se jubiló a los 61 años de edad. “Por cada salida de un compañero, sigue entrando otro”, añade.

1 jul 2022

<https://www.elsaltodiario.com/empresas-recuperadas/nueva-ley-concursal-facilita-prioriza-trabajadores-recuperen-antes-liquidacion>

Colombie

La Reforma Agraria y rural integral, economía solidaria, la superación del hambre y el narcotráfico, y la construcción de la paz territorial

Rafael Enciso Patiño

El gobierno de Gustavo Petro y el Pacto Histórico, tendrán que enfrentar enormes desafíos y problemas de la sociedad colombiana, acumulados y agravados durante siglos. Entre ellos aparecen como prioritarios: 1. La implementación de los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno nacional y la construcción de una paz completa, estable y duradera, con reparación a las víctimas; 2. La superación del hambre y la miseria, para lo cual es necesario realizar la Reforma Agraria y la Reforma Rural Integral, contemplada en el primer punto del Acuerdo de Paz y 3: la superación del narcotráfico,

que implica la sustitución de cultivos de uso ilícito, por cultivos para producir alimentos agrícolas y materias primas para la industria.

En los tres casos, las políticas públicas que realizó el gobierno de Duque, han sido nefastas y los acuerdos de paz no se han implementado o se han implementado de manera errática, en proyectos desarticulados e insuficientemente financiados, que no han sido sostenibles por muchas razones, incluida la imposibilidad de competir con éxito en una economía neoliberal monopolizada y que no tienen la capacidad de superar las dinámicas económicas y sociales, hasta ahora existentes en Colombia, generadoras de conflicto y violencia en los territorios.

Con la ejecución de la propuesta que se presenta a continuación, que es complemento necesario del acceso a tierras productivas (aspecto esencial de la Reforma Agraria que no trataremos aquí), es posible empezar a solucionar de manera conjunta, aunque parcial, estos tres problemas, utilizando de la mejor manera los recursos disponibles de todo tipo, para producir buenos resultados

en relativamente corto tiempo, y crear un ambiente social favorable y de apoyo al cambio histórico y al nuevo gobierno.

En cumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, para su tránsito colectivo e incorporación a la vida civil y legal, éstas crearon la entidad cooperativa Economías Solidarias del Común - ECOMÚN, para dar respuesta y solución a sus necesidades vitales: económicas, sociales y culturales, individuales, colectivas y familiares.

El primer punto de los acuerdos de paz contiene el compromiso del Estado de fomentar y financiar las formas asociativas y de economía solidaria entre la población rural y campesina, en primer lugar en los territorios donde el conflicto armado ha sido más intenso.

Planificación estratégica en los territorios para reorganizar y/o, construir las cadenas y redes socio económicas integrales en las que se articulen los productores del campo

Por conveniencia general de la sociedad, para contribuir a generar trabajo productivo e ingresos entre la población de los sectores rurales, y para aumentar la producción y la productividad del trabajo, en primer término, para producir alimentos saludables que

contribuyan a combatir y superar el hambre en Colombia, es necesario y pertinente que las instituciones públicas y los movimientos sociales, promuevan la organización de la población en cooperativas y otras formas asociativas de la economía solidaria, impulsando y planificando su articulación en redes y cadenas socio – económicas que incluyen: el financiamiento, la producción agrícola y agroindustrial, la distribución/comercialización, el intercambio y el consumo. En ellas podrán participar, con inteligentes y novedosos esquemas de asociación, las más diversas formas de producción y de propiedad: privada, pública y comunal; familiar, comunitaria y solidaria; pequeña, mediana y gran empresa privada; así como empresas públicas y mixtas que incluyan a todas las anteriores. Será conveniente promover las alianzas Público-Comunitarias, además de las alianzas Público-Privadas que ya existen. Las orientaciones estratégicas serán determinadas por el propósito de alcanzar los mayores beneficios sociales posibles.

Es fundamental impulsar nuevas formas de relación verdaderamente democráticas, equitativas y complementarias, entre productores y consumidores urbanos y rurales.

En estas redes y cadenas socio económicas, podrán integrarse también las cooperativas o empresas asociativas solidarias creadas por los ex combatientes de las FARC, que hacen parte de ECOMÚN, y posteriormente por las constituidas por las formas económicas que puedan escoger otros movimientos insurgentes como el ELN, para su tránsito a la vida civil y legal.

Esto permitirá formular y ejecutar programas y proyectos concurrentes, que vinculen de manera simultánea a diferentes grupos poblacionales: 1. Sociedad civil organizada (campesinos, indígenas y afro descendientes), 2. Víctimas del conflicto armado, 3. Excombatientes de las FARC (y luego, de las organizaciones armadas ilegales que se vinculen a nuevos procesos de paz); 4. Cultivadores de coca y de otras plantas de uso ilícito, 5. Instituciones públicas, 6: La Academia e instituciones técnicas.

Para construir las cadenas y redes socio económicas territoriales, es fundamental aprovechar de manera correcta la capacidad de planificación y financiación del Estado en todos sus niveles: nacional, regional, departamental y municipal, y las potencialidades y capacidades de trabajo regionales y locales, aprovechando

los perfiles productivos municipales creados en años anteriores por el Ministerio del Trabajo, para producir bienes, servicios y conocimientos, que permitan superar el hambre y la pobreza, satisfacer necesidades básicas y prioritarias, promoviendo y respetando los Derechos Humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población; y mejorar de manera progresiva su calidad de vida, así como en un futuro próximo, producir excedentes para otros territorios y para la exportación, generando divisas al país.

Participación de los productores rurales en la propiedad de las agroindustrias por medio de la economía solidaria

Es indispensable que los productores del campo, puedan participar en la propiedad de las agroindustrias y eslabones estructurantes de las cadenas productivas y en la comercialización de los productos, porque son ellos los que permiten el procesamiento de los productos para satisfacer varias necesidades, hacerlos duraderos y llevarlos a los consumidores.

Y porque es en estos procesos en donde se genera el mayor valor agregado, que hasta ahora ha sido apropiado por los dueños de las agroindustrias en las que no tienen participación los productores

primarios, que jamás saldrán de la pobreza mientras no puedan participar en las condiciones de compra y definición de los precios de sus productos y recibir una parte justa del valor agregado en la transformación agroindustrial y en la comercialización.

Ningún campesino, indígena o afro descendiente promedio de nuestro país, tiene actualmente, las posibilidades de construir y gestionar de manera individual, una planta moderna, eficiente y sostenible de procesamiento de productos agrícolas, frutas y verduras; ni un matadero industrial o planta de sacrificio de animales; ni una fábrica de abonos orgánicos; ni una fábrica de alimentos concentrados para animales. Tampoco puede construir solo un centro de acopio y menos aún comercializar sus productos llevándolos a los centros importantes de consumo. Por lo tanto, están obligados a venderlos a los intermediarios y a los dueños de las agroindustrias.

Pero sí podría hacerlo de manera colectiva, con apoyo del Estado, por medio de la economía solidaria y uniendo los recursos que el Estado asigna o ha asignado hasta ahora a diferentes grupos sociales - para pequeños proyectos productivos, en general desarticulados e insostenibles -, como estímulos a la producción, como reparación a

las víctimas del conflicto armado o como aporte a la paz y para el combate al narcotráfico, entre otros.

Es importante señalar que, el Estado tampoco tiene la posibilidad de financiar en un mismo territorio, una planta de procesamiento de frutas y verduras para los campesinos, otra para los indígenas, otra para las víctimas del conflicto armado, otra para los ex combatientes de las FARC en proceso de reincorporación a la vida legal y otra para los pequeños productores de coca que se vinculen a programas de sustitución de cultivos. Y esto aplica para todos los eslabones estructurantes de una cadena productiva).

La paz estable y duradera se construye en los territorios con la participación conjunta de los sujetos sociales en la propiedad colectiva de las agroindustrias y las cadenas de producción

Desde el gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación y de los ministerios de agricultura e industria y comercio, se debe construir y aplicar, una metodología de planificación estratégica con participación de los sujetos sociales antes mencionados y algunos otros, para diseñar y construir las cadenas y redes socio productivas integrales en las cuales todos puedan

participar de manera organizada y colectiva en su gestión estratégica y como co-propietarios.

Esto puede y debe hacerse por medio de la economía solidaria y cooperativa, uniendo los recursos que hasta ahora el Estado ha destinado a grupos poblacionales separados, para destinarlos a la planificación y creación de las cadenas productivas y todos sus eslabones estructurantes (agroindustrias, centros de acopio y comercialización), que hagan posible que todos ellos puedan – de manera conjunta – producir y vivir dignamente de su trabajo junto con sus familias.

Los productores agrarios podrían recibir los recursos del Estado (estímulos, reparaciones y créditos), para destinarlos: una parte para la producción en sus fincas o parcelas, y otra parte para dar sus aportes como fundadores y copropietarios de las agroindustrias que necesiten como complemento para mejorar su producción.

A modo de ejemplo: en una localidad o región, donde se produce o se puede producir frutas y a su vez cerdos, pollos o peces, una parte de los recursos que se designen para ellos, servirá para incentivar la producción agrícola y pecuaria en sus parcelas familiares; y otra parte, se destinará a que puedan dar sus aportes de

capital en una planta agroindustrial de procesamiento de frutas, para producir jugos, pulpa de fruta, y frutas cortadas y envasadas, entre muchos otros productos derivados; o para construir una fábrica de abonos orgánicos para sus cultivos, que los libere de los agroquímicos destructores del medio ambiente y de sus altos precios, aprovechando todos los residuos de la fábrica de jugos.

También se podría destinar una parte de los recursos para fomentar la producción pecuaria (cerdos, pollos, peces, etc.) en sus parcelas; y otra parte para dar sus aportes de capital para construir una planta de producción de alimentos balanceados para animales (ABA), - participando en ella como propietarios cooperativos-, que compraría una parte de los insumos requeridos, a los productores agrícolas de la región (mercado asegurado), y que les vendería a precios justos, los alimentos balanceados de buena calidad que necesitan.

En la creación de estas agroindustrias deberán participar las universidades e instituciones técnicas, dando sus aportes en conocimientos y experticias técnicas. Los estudiantes y/o profesores que participen, estarán creando posibilidades de trabajo digno y justamente remunerado para ellos.

Todo esto contribuirá a generar alimentos para superar el hambre en Colombia, fuentes de trabajo e ingresos para una vida digna, próspera y gratificante, para superar en parte el fenómeno del narcotráfico (sustitución sostenible de cultivos de uso ilícito) y para construir la paz territorial.

Cumaral, Meta, julio 13 de 2022

Argentina

La Unidad Piquetera definió seguir con el plan de lucha

Mario Hernandez

El jueves 11 de agosto por la mañana, los manifestantes plegaron las carpas en las que habían pasado la noche, en asamblea decidieron levantar el acampe en Plaza de Mayo.

Eduardo Belliboni defendió la organización de los comedores que lleva adelante el Polo Obrero, y las distintas organizaciones de la Unidad Piquetera, frente a la persecución por parte del gobierno que tuvo su última expresión en el anuncio de las auditorías de los planes sociales con el fin de dar de baja miles y volcar otro tanto al control de los intendentes y sus punteros.

El dirigente del Polo Obrero declaró que “a los comedores, en el país de la leche y el aceite, no les llega la leche, ni el aceite. Ahora, al gobierno que le agarró

las ganas de auditar, le vamos a hacer algunas sugerencias, ¿Por qué el ministerio de Economía no audita los talleres clandestinos de trabajo en negro y superexplotación que hay en los barrios y en las fábricas? El trabajo bajo un sistema de monotributo, que existe sobre todo en el Estado y fuera de convenio, auditen, por supuesto. ¡Auditen la deuda externa, que es una estafa, que la contrajo Macri y este gobierno sigue pagando!”

A su vez, las organizaciones que integran la Unidad Piquetera denunciaron que el gobierno ha postergado la convocatoria al Consejo del Salario, para subordinarlo al supuesto acuerdo con las patronales, mientras la inflación sigue devorando los ingresos de los trabajadores. En ese sentido también desarrollaron una fuerte crítica a la pasividad y complicidad de las Centrales obreras ante el ajuste, señalando que el camino para derrotar la ofensiva patronal y fondomonetarista es la ruptura con el gobierno que aplica esta política, la movilización y acción directa, con el paro nacional y el plan de lucha como primera instancia. La Unidad Piquetera sigue en las calles organizando a los

desocupados por todos sus reclamos y exigiendo una respuesta por parte del gobierno ante la situación que padecen millones de trabajadores.

El secretario de Articulación de Política Social del ministerio de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, afirmó que el Gobierno «ve con preocupación» la realización de estas protestas «con gente que está pasando frío cuando debe estar en la casa, con la familia».

«Se trata de gente que está a expensas de una dirigencia que hace medidas de fuerza desmesuradas; parece más un capricho político que una protesta concreta. Este Gobierno conoce lo que está pasando. Hace cinco días que el Gobierno nacional otorgó un bono de 11.000 pesos a los titulares del Potenciar Trabajo», aseveró el funcionario. «En junio y julio pasó algo similar, con 9.000 pesos», señaló Aguilera.

Además, recordó que el 24 de agosto las organizaciones mantendrán una nueva reunión con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

«Pedimos un bono de emergencia, un IFE para todo ese universo de 20.000 pesos. Estamos pidiendo ahora que sea de \$20.000. El Gobierno lo implementó en mayo y junio y ahora no lo tiene en carpeta a pesar del agravamiento

de la situación social», remarcó Belliboni.

Al ser consultado sobre cómo pasaron la noche, Belliboni contó que fue «muy fría», pero que tratan de que «no haya ningún chico» en el acampe.

Los manifestantes montaron algunas carpas sobre la superficie la histórica plaza ubicada frente a la Casa Rosada y prendieron pequeñas fogatas para mitigar la baja temperatura.

Fuentes oficiales indicaron que una delegación piquetera fue recibida ayer por funcionarios de Economía y autoridades de la Subsecretaría de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social que se trasladó hasta la cartera que conduce Sergio Massa.

Entre varias demandas del sector figura el pago de un Salario Mínimo Vital y Móvil de «105.000 pesos» y un bono para jubilados y monotributistas.

Los anuncios económicos de Sergio Massa tuvieron sabor a poco y nada para los movimientos sociales

Tras los anuncios económicos de Sergio Massa, el Frente Patria Grande, que tiene como referente a Juan Grabois, anunció que podría retirar sus diputados, concejales y legisladores del bloque oficialista. “El sentimiento general de nuestra fuerza es de que nuestro

gobierno no está defendiendo los intereses populares”, planteó en un comunicado.

En los movimientos sociales, las medidas tomadas por el nuevo ministro de Economía recibieron muchas críticas y pocos apoyos. Desde la Unidad Piquetera también hicieron fuertes cuestionamientos a que Massa haya omitido tomar acciones para recomponer los ingresos para los trabajadores formales e informales -la excepción fueron los jubilados.

Por su parte, **en los movimientos albertistas, como el Evita y Somos Barrios de Pie, hubo silencios y algunos respaldos,** centrados en el hecho de que Massa rechazó devaluar, una medida que ocasionaría una nueva suba de los precios y de la pobreza.

La Unidad Piquetera realizó una conferencia de prensa ante el ministerio de Economía, donde presentó una nota dirigida al nuevo “superministro”, Sergio Massa, en concordancia con el planteo realizado a su antecesora, Silvina Batakis, quien en su corto paso por el ministerio llegó a reunirse con el FMI, pero se negó a atender a los desocupados. Los grupos piqueteros rechazan la profundización del programa de ajuste, que tiene a los beneficiarios de los programas sociales entre sus

principales víctimas, y reclaman por medidas urgentes para paliar el hambre y la pobreza.

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, advirtió que la Unidad Piquetera se va a reunir y va a discutir un planteo para todas las organizaciones sociales y piqueteras, las que están en la calle y las que no, para salir a luchar contra esta “declaración de guerra contra los trabajadores”, de no tener ninguna respuesta del gobierno.

Los anuncios de Sergio Massa no solo no traen ningún alivio al pueblo trabajador, sino que implican reafirmar la senda de ajuste fiscal, recorte del gasto público, tarifazos y beneficios patronales emprendidas por las gestiones anteriores.

Massa difundió la convocatoria a los sindicatos y patronales para discutir la “situación salarial” de los trabajadores del sector privado, y se acaba de dar a conocer la convocatoria al Consejo del Salario, que deberá determinar un aumento del salario mínimo tras el 45% de ajuste que ha quedado rebasado ampliamente por la inflación, empujando a millones de trabajadores y jubilados a la indigencia, con un salario mínimo en \$47.850.

En lo respectivo a los programas sociales volvió a repetir el libretto del tan mentado “empalme” de

los mismos con supuesto trabajo genuino, algo que no ha ocurrido bajo ninguna de las numerosas gestiones que lo han anunciado y que ha sido el pretexto para hacer pasar mayor precarización laboral en las intendencias y municipios, de la mano de la superexplotación de los beneficiarios de programas sociales y el fraude laboral.

Massa también hizo alusión a la auditoría de los programas sociales que el gobierno prepara para el 15 de agosto con las universidades nacionales, cuyo propósito es ir por la baja de miles de programas, para avanzar en el recorte del gasto público, y profundizar el ataque contra las organizaciones sociales y piqueteras independientes del Estado, las que se encuentran en la calle movilizadas contra el ajuste.

Al respecto, las organizaciones piqueteras señalaron que no tienen ningún inconveniente en ser auditadas, y que la auditoría es una práctica permanente del Estado sobre las organizaciones. Sin embargo, denunciaron que no se trata con el mismo rigor a la gestión de los programas que hacen las intendencias, ni mucho menos de lo que ocurre en las dependencias públicas, con contratos basura e infinidad de irregularidades legales y laborales.

La propuesta de transformar planes en empleo privado no

genera expectativas en ninguno de los movimientos. Incluso en los más cercanos al presidente Alberto Fernández, como el Evita, señalan que es **una idea para la tribuna**, que da pocos resultados.

“El problema es que no hay patrones que te contraten. No se entiende que hay un proceso de concentración económica que nos dejó sin patrones a 12 millones de personas. ¿Van a inventar los patrones?”, se preguntó el titular de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro.

Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie, dio su apoyo a algunas de las medidas anunciadas por Massa. “El momento previo a la llegada de Massa está cruzado por un proceso de desestabilización y de extorsión de los sectores concentrados, sobre todo de los exportadores, para maximizar ganancias con una devaluación. Me parece que el pre requisito para enfrentar esa agenda es fortalecer el poder político, la cohesión del Frente de Todos resuelve esa ecuación”. Sobre las medidas, Menéndez **valoró que el ministro haya descartado una devaluación.**

“**Esperaba anuncios sobre el ingreso;** me parece que hay algunas medidas, como el salario familiar, los nuevos topes, y el llamado al Consejo del Salario para definir

el nuevo salario mínimo, que se traslada al Potenciar. **Hay que seguir reclamando un IFE** para los sectores que están debajo de la línea de indigencia, que son cuatro millones de personas”.

Auditoría a los movimientos sociales

Fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 475/2022 que oficializa la decisión, anunciada por el superministro Massa la semana pasada, de auditar a los beneficiarios de planes sociales. «Quién no cumpla, recibirá la suspensión del plan», había dicho en ese momento Massa. Mientras la crisis social se profundiza, la lógica gubernamental es el castigo a los sectores más pobres.

La resolución tiene fecha del martes 9 de agosto y las firmas del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Entre los fundamentos, en el texto se plantea que el objetivo es “evaluar el desempeño de los programas sociales ejecutados por las jurisdicciones nacionales con fondos del Gobierno Nacional, por el Convenio N° 27 del 28 de febrero de 2002 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL”.

Por este motivo, se estipula “la creación de un sistema de control que integrara y complementara a las estructuras estatales nacionales de fiscalización y auditoría”.

Esta medida, que busca atacar a las organizaciones sociales sobre las que pesa en estos últimos tiempos una campaña de criminalización, y profundizar el ajuste ya había sido anunciada por Sergio Massa cuando asumió su nuevo cargo.

“El 15 de agosto empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quién no cumpla, recibirá la suspensión del plan. En paralelo, la liquidación se cruzará con las bases de datos de la Anses. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia, y el trabajo lo permanente”, había dicho Massa en ese momento.

Ni en los anuncios de Massa, ni en el texto del decreto quedan establecidos cuáles deben ser los requisitos que las y los beneficiarios de los planes sociales deben cumplir para no perderlos. La oficialización se da el mismo día en que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anuncia una medida con una lógica similar: les quitarán los planes a las familias cuyos hijos en edad escolar no cumplan con el 85 % de asistencia escolar.

En ambos casos, **lo que se busca es castigar y ajustar a los sectores más afectados por la pobreza**, en vez de incentivar la creación de puestos de trabajo con salarios dignos (no empleo precario con salarios de hambre), aumentar la escolarización y buscar resolver los problemas más acuciantes de las familias trabajadoras y sectores populares en el marco de una crisis social muy profunda.

San Cayetano

Ni en los anuncios de Massa, ni en el texto del decreto quedan establecidos cuáles deben ser los requisitos que las y los beneficiarios de los planes sociales deben cumplir para no perderlos. La oficialización se da el mismo día en que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anuncia una medida con una lógica similar: les quitarán los planes a las familias cuyos hijos en edad escolar no cumplan con el 85 % de asistencia escolar.

Julio, en el centro porteño.

Bajo el lema **«Pan, paz, tierra, techo y trabajo»**, una larga columna con banderas de la UTEP, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Somos Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otras, se concentró a partir

de las 8:00 en Cuzco y Rivadavia y minutos después inició la movilización hacia el centro de la ciudad.

Durante el acto principal, el secretario gremial de la UTEP, Gildo Onorato, sostuvo que **«lo que falta no es trabajo sino derechos laborales de la mayoría»**.

«Si nos movilizamos es porque hay problemas», dijo, pero recordó que los movimientos sociales de la UTEP son «garantes de la paz social» y recordó que **las crisis las sufren los sectores más humildes que «se hacen más pobres»**.

En un mensaje al Congreso, Onorato le recordó a los diputados y senadores que «votaron una ley que establece un salario social complementario», en referencia a emergencia social que rige desde 2016.

«De qué planes hablan, esto es trabajo. Y salario, porque reconoce un trabajo social y da cuenta de una tarea comunitaria en los barrios más humildes, y complementarios porque complementa los ingresos. Es **lo que ustedes llaman planeros y nosotros decimos trabajadores y trabajadores»**, enfatizó Onorato.

También reclamó: «No estigmaticen, porque cuando ustedes hablan los medios amplifican y la Justicia persigue a los más débiles».

Por su parte, el diputado del Frente de Todos (FdT) y referente de la CCC, **Juan Carlos Alderete**, exclamó: **«Salimos a la calle una vez más por pan, tierra, techo, trabajo, salud, educación y soberanía nacional para todos los que habitan nuestro suelo.**

Otros sectores quieren sacarnos de la calle. No vamos a aceptar mansamente las injusticias y los sufrimientos que padecemos», dijo y denunció «persecución judicial y mediática» con allanamientos y persecuciones en diferentes provincias, procedimientos que asoció a la «mesa judicial macrista».

En esa línea, Alderete aseguró que hay sectores que se preparan para avanzar con sus planes de ajuste brutal y entrega nacional, y sobre los derechos» de jubilados y trabajadores.

Y cargó contra los especuladores que «remarcan los precios» y contra «los terratenientes y agroexportadores que no liquidan la cosecha» porque ellos sí «ganan fortunas».

«**El pueblo no puede seguir pagando una fiesta de pocos**», remarcó y pidió «medidas que frenen la inflación», como «congelamiento de precios» y la aplicación de la Ley de Góndolas, además de considerar «urgente» la implementación del salario universal.

Del acto participaron también el referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y los dirigentes de la CTA-Autónoma, Ricardo Peidró y Hugo «Cachorro» Godoy, que estuvieron en el escenario, además del dirigente Juan Grabois.

Barrios de Pie movilizó frente al Congreso y dijo que el campo “busca desestabilizar”

La organización social Somos Barrios de Pie hizo una protesta el 30 de julio frente al Congreso para repudiar a los grandes empresarios agropecuarios por negarse a vender su cosecha en un momento en que el Banco Central requiere más dólares para afrontar la crisis económica: “Cuando hay un sector que busca desestabilizar, generar un proceso devaluatorio, es válido poder alzar la voz”, manifestó su referente, Daniel Menéndez.

Aquella protesta contó con la participación de cientos de personas, varias de ellas pertenecientes a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Así, bajo el lema “primero la patria, basta de especulación”, instalaron una olla popular sobre la Avenida Entre Ríos.

“Esta es una impugnación contra el sector concentrado, minoritario y privilegiado del campo que, en vez de tender la mano, especula, no solo con maximizar ganancias,

sino también con empobrecer al conjunto de la sociedad”, expresó Menéndez.

Esta movilización se había pautado inicialmente para desarrollarse frente al predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el barrio de Palermo, mientras se llevaba a cabo su tradicional muestra. Sin embargo, decidieron trasladarla para evitar posibles incidentes.

Entrevista a Carlos Ghioldi, referente de La Toma de Rosario y miembro del Consejo Directivo de la CTA de los Trabajadores de esa ciudad

Es hora de que los trabajadores y el pueblo ganemos las calles por las demandas que respondan a nuestros intereses

Organizaciones sindicales, sociales y políticas, con el respaldo de escritores, intelectuales y personalidades de la cultura, **iniciaron el jueves 23 de junio una «gran caravana federal»** que unió La Plata con Rosario en «defensa del Río Paraná y del Canal Magdalena» y por la «soberanía y el trabajo argentino».

La principal demanda que plantean las organizaciones es la derogación del decreto 949/2020, con el que «se pretende volver a concesionar el Río Paraná para mantenerlo en manos extranjeras».

«Argentina tiene todo para ejercer su soberanía. Tenemos las dragas y la mano de obra, tenemos los recursos humanos de la Dirección Nacional de Vías Navegables y tenemos potencial nacional para desarrollar lo que falta para hacer el correcto dragado de nuestros ríos», argumentaron desde la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional sobre el Río Paraná y el Canal Magdalena.

-Carlos te quería consultar porque mañana va a haber en Rosario una movilización hacia la Bolsa de Comercio, ¿cuáles son los motivos por los cuales está convocada esta actividad?

-Bueno, esta es una confluencia de varios sectores sindicales, están la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal dentro de la CGT, el Movimiento por un Modelo Nacional que es el sector de Moyano con los camioneros junto con el Foro de Defensa del Río Paraná.

El acuerdo en general tiene que ver con la defensa de la presencia estatal en el río Paraná, lo que se llama la Hidrovía que es la privatización del río Paraná para que una empresa, en este caso Consorcio Vega, se encargue de cobrarle peaje a las embarcaciones que se llevan las exportaciones agrícolas y ganaderas del complejo portuario del Gran Rosario que representan

el 75% de exportaciones de este país, es decir, casi todo el tránsito fluvial está en manos de una empresa privada que cobra peaje y el Estado nacional resignó, a partir de la época del menemismo cualquier control, así como otras medidas más.

Uno de los aspectos que más se destaca es que se resignó el control sobre el comercio exterior, el control del Estado y el control soberano. Entonces ese decreto que está vencido y que hay una prórroga de un año, y toda una discusión, hay un fuerte movimiento de lobby de parte de los sectores que manejan este negocio para que se conceda otra vez a esta empresa este control. Hay una pelea, una disputa, donde se plantea esta discusión para plantear el problema del control Estatal en el comercio exterior.

Es muy interesante conocer toda esta cuestión, a los trabajadores nos debe interesar, aunque parezca que es un tema ajeno porque para las exportaciones del país cada empresa presenta una declaración jurada de lo que ha exportado y no hay ningún control eficiente para saber si lo que estas personas declaran es verdad o es mentira.

Se factura como una operación interna de Cargill Argentina con Cargill de otra ciudad, es decir, que no se declara el valor de lo

que se está exportando ni se pagan las mínimas retenciones aduaneras sobre lo declarado en esas DD JJ sobre el volumen y al precio que declaran en sus remitos internos, porque son operaciones internas las mayorías de las veces. Es una evasión consagrada que hay que ponerla en discusión.

Los trabajadores no podemos permanecer ajenos a esto. Además, en la Bolsa de Comercio de Rosario se fijan precios que después inciden en el costo de los alimentos. Aunque parezca mentira muchas cosas podemos discutir hoy, como una paritaria o un bono, pero si un Excel de las 2 o 3 empresas que manejan los precios bajan un aumento del 10% se terminó lo que con esfuerzo se consiguió en la paritaria.

A los trabajadores nos debe importar, y mucho, que se realice esta movilización y que la misma señale a los poderes fácticos, no a los circunstanciales gobernantes o funcionarios que pueden ser malos, horribles o no tanto. La discusión acá está en quiénes son los que tienen el control y el poder económico para robarnos de los bolsillos el salario a través de las remarcaciones de precios, por ejemplo.

Es un primer paso muy importante, a nuestro entender, en una idea de acción con varios sectores

que tienen opiniones diversas, para poner en la agenda y en la movilización de los sectores populares la preocupación por estos temas. No es un tema ajeno, es un tema que nos perjudica, que los trabajadores debemos asumir y debemos tomar en nuestras manos. Por eso esta movilización se hace con una caravana que reclama la soberanía sobre el río, el control con el comercio exterior sirve para poner estos temas en discusión y los trabajadores entendemos que debe preocuparnos y que debemos también pronunciarnos y movilizarnos sobre estas cuestiones.

-Si, yo precisamente te iba a preguntar, y creo que me has respondido, por la movilización a la Bolsa de Comercio de Rosario, pero se han producido también novedades respecto de la empresa Vicentín.

-Que es una de las integrantes de la Cámara de Exportadores que ha fijado cuestiones en esa Bolsa de Comercio de Rosario, que fueron parte de las autoridades. Más allá del saqueo contra el Banco Nación, la maniobra de vaciamiento, etc., Vicentín no hizo ni más ni menos de lo que hacen todas las empresas en relación a la evasión en las exportaciones, o la triangulación. Lo que ha sido un contrabando legal, ya ni siquiera se le pude decir contrabando, porque

cuando se habla de contrabando se piensa en dos o tres que van en una barcaza por ahí y esto se hace legalmente, con papelería.

El haber desmantelado desde la dictadura en adelante todo lo que es el control estatal sobre el comercio exterior, porque es una política sistemática llevada adelante desde la dictadura en adelante, en realidad desde 'La Libertadora', si uno se va más atrás, o 'La Fusiladora' como creo que corresponde llamarla, es un desmantelamiento paulatino de cualquier control sobre lo que se exporta. Eso son divisas que luego nos las cobran a nosotros, los trabajadores, por eso nos debe importar muchísimo.

La dictadura aflojó los controles del comercio exterior y paralelamente incorporo el IVA que es el impuesto que pagamos todos por consumir hasta un litro de leche. La Bolsa de Comercio de Rosario es uno de los poderes fácticos que está centralizando estas cuestiones. Tenemos entendido que hay una fuerte presión de la Bolsa de Comercio hasta a empresas que alquilan los escenarios para no alquilárselos para el acto de mañana. Te lo digo para que veas cómo es la situación. Es tanto el poder que intenta mantenerse en el anonimato y ha terminado haciendo estas cuestiones.

Por eso creemos que es muy importante esta movilización y tomar estos temas para que sea el primer paso para que los trabajadores y el pueblo ganemos la calle. Ese es el gran punto que también hay que poner en discusión. Es hora de que los trabajadores y el pueblo ganemos las calles por las demandas que respondan a nuestros intereses, a los inmediatos y a los colectivos. Eso solamente se puede hacer con una amplia y generosa unidad de acción, y la unidad de acción estimados compañeros, estimados oyentes, se hace exclusivamente con los que piensan distinto. No hay unidad de acción con los que pensamos igual, con los que pensamos igual hay comunidades de intereses. Pero la unidad de acción acá se tiene que hacer con todos los que pensamos distinto, es decir, los que votan a uno, los que votan a otro, los que opinan que los sindicatos deben ser así y los que opinan que los sindicatos deben ser así.

Ese es un valor importante que tiene esto porque ha permitido confluír a algunos sectores. Ojalá se sume la gente del FIT, ojalá se sumen los partidos de izquierda, ojalá se sumen otros sectores populares. Por supuesto no va a haber acuerdo, pero sí debemos estar de acuerdo en que los poderes fácticos no se la sigan llevando de

arriba. Ese es un elemento muy importante que a nosotros nos ha definido, nos tenemos que poner a trabajar y a impulsar esta movilización con todo nuestro esfuerzo.

-Carlos, ¿Cuáles son los sectores convocantes? Y recordanos la hora en la que se va a producir este acto.

-Los sectores convocantes son: CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal de la CGT, el Movimiento por un Modelo Nacional y Popular (que sería Camioneros) y el Foro en Defensa del Río Paraná que es una confluencia de organizaciones y algunas particularidades que está articulado en torno al Partido Comunista Revolucionario fundamentalmente, más algunos que otros grupos que estarán adhiriendo, hay algunas organizaciones sociales como el MSR de Rosario que también va a estar presente, es decir, que se están sumando más y más sectores para este movimiento.

La actividad empieza con una caravana de vehículos que vienen desde la zona sur de Rosario y llega al Monumento a la Bandera, nos concentramos en el Monumento a las 14:00 y marchamos hasta el edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario y ahí se realizará el acto a las a las 15:30. Han comprometido presencia de figuras

nacionales, el compañero Hugo Yasky, Pablo Moyano, que será uno de los oradores. Para nosotros es indistinto quién habla y quién deja de hablar, lo importante es la movilización por un tema que es justo y que los trabajadores no podemos permanecer indiferentes.

**Jornada Nacional de lucha:
¡Políticas Públicas con Perspectiva
de Género YA!**

Las organizaciones que integran la Coordinadora por el Cambio Social concentraron el pasado 4 de agosto en el Obelisco para luego movilizar hacia el ministerio de Economía y el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. La jornada se desarrolló también a nivel nacional a las dependencias estatales correspondientes. En este contexto de grave crisis social y económica, que siempre golpea con más fuerza a las mujeres, personas del colectivo LGTTBIQ+ y niñas, se plantaron en las calles para exigir la inmediata implementación de políticas públicas integrales y con perspectiva de género.

Compartimos comunicado: Lo hecho hasta el momento claramente es insuficiente para combatir la violencia de género y en lo que va del año se han registrado (en los medios, ya que ni siquiera

existe un registro oficial) 147 femicidios, la mayoría a manos de parejas o ex-parejas y 4 transfemicidios/travesticidios, mientras que sigue parada la investigación de la desaparición de Tehuel de La Torre. También queremos exigir al Estado y en particular al ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que accione a dos años del infanticidio en manos del estado paraguayo de Lilian y María Carmen Villalba y la desaparición forzada de Lichita, crímenes que continúan impunes y con las mujeres cuidadoras de las niñas criminalizadas. Esta no es una realidad nueva, los movimientos sociales y los feminismos venimos denunciando hace años que la violencia por razones de género se conforma como una problemática estructural contra la cual el Estado no toma medidas efectivas y que se verá agravada por la profundización del ajuste que el FMI impone y el Frente de Todos acata sin chistar, con fórmulas que históricamente no han hecho más que aumentar la crisis económica, y con esto la vulnerabilidad y precariedad de nuestras vidas. La falta de trabajo afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes y a las disidencias sexuales, con una tasa de desocupación que para nosotres ronda el 8,3% mientras que en el caso de los varones

es de 5,9%. La imposibilidad de ser independientes económica-mente nos impide acceder a una vivienda y nos condena a permanecer en situaciones de violencia. ¿Qué podemos hacer ante esto cobrando únicamente un salario mínimo por apenas 6 meses bajo el programa «Acompañar»? A esto se le suma que el 70% de las tareas domésticas no remuneradas son realizadas por mujeres y éstas se ven intensificadas cuando el bolsillo aprieta, porque para satisfacer necesidades básicas como la alimentación hay que hacer mayores esfuerzos. La posibilidad de algunos sectores de pagar niñas o empleadas domésticas (que también siempre son mujeres) se reduce y eso, por un lado, redundando en una sobrecarga de tareas y, por otro, en menos puestos de empleo. En el caso de les travestis, trans o personas no binarias la situación es dramática. La discriminación estructural que impregna nuestra sociedad las lleva a vivir situaciones de extrema violencia desde la niñez, como son las expulsiones tempranas del hogar y el consecuente abandono escolar; el maltrato y el no respeto a su identidad en el área de salud; la violencia y persecución por parte de la policía; y la discriminación para acceder a un trabajo formal con todos los derechos. Para este

sector las políticas públicas por parte del Estado son prácticamente inexistentes, y la Ley de Cupo Laboral Trans/Travesti, que tanto nos costó conseguir, se aplica de forma muy parcial e irregular. Por otro lado, el recorte en áreas centrales como salud y educación nos afecta directamente, ya sea porque son nuestros ámbitos de trabajo o porque somos usuarias frecuentes de las mismas, por estar a cargo de las tareas de cuidado de niñas y adultes mayores. Ante esta realidad las mujeres y disidencias sexuales de los movimientos sociales nos seguimos organizando para dar respuestas colectivas a nuestros problemas más urgentes. En este marco es que también nos organizamos para participar del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias, porque consideramos que ante la indiferencia de los sucesivos gobiernos, este es un espacio que nos empodera, nos da herramientas, nos abre nuevas puertas y nos contiene. Queremos que esta instancia se contemple también dentro de las políticas públicas que exigimos. Durante la pandemia fuimos las que garantizamos la supervivencia de nuestras familias y de la mayor parte de nuestros vecines. En aquel momento fuimos un eslabón

fundamental, fuimos esenciales, pero nunca logramos el reconocimiento salarial que nos corresponde y que merecemos y muchas veces terminamos supliendo responsabilidades que deberían estar en manos del Estado. Es por esto que salimos a la calle a exigir políticas públicas de forma inmediata. No podemos seguir esperando porque están en juego nuestras vidas. Sin trabajo y con ajuste no existe Ni Una Menos. No podemos esperar más, necesitamos respuesta ya. ¡Políticas Públicas con Perspectiva de Género YA! Aparición con vida YA de Tehuel Implementación real y efectiva del cupo laboral travesti-trans Implementación real de la ESI, IVE e ILE Reconocimiento económico acorde a la tarea para las promotoras territoriales contra la violencia de género y de salud integral. ¡EL AJUSTE ES VIOLENCIA PATRIARCAL! COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL: FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA

UNIDADLATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR.

Coser para salir de la crisis: trabajo y diseño diverso en la cooperativa textil Claudia Pía Baudracco

Por Vanina Pasik

La cooperativa Claudia Pía Baudracco funciona en Moreno. Brinda talleres de capacitación y trabajo a un grupo de personas trans.

La textil Claudia Pía Baudracco busca resolver dos problemas a la vez: crear una fuente de trabajo estable -cooperativo y comunitario- y confeccionar prendas que el mercado no ofrece: ropa sin género, talles grandes con diseños para jóvenes conurbanes, binders para moldear torsos masculinizados, por ejemplo. Además, la textil autopercibe su propia existencia y visibilidad como un hecho político.

Sobre una callecita recién asfaltada hay una piecita separada, adelante del chalet donde viven Bruno y Seba, en Trujui, partido de Moreno. Está en el fondo del segundo anillo gris que rodea la Capital, donde la trama urbana se

desgrana. Se casaron a principios de 2022, aunque, aclaran, “están juntos hace años”.

En un jardín pequeño, un árbol ofrece mandarinas dulces. Para llegar hay que atravesarlo, allí se abre la puerta y lo primero que ve en la pared opuesta a las dos máquinas, es un mural que pintó Eideen (20) con su hermana.

– ¡Y yo también di algunas pin-celadas! – grita alguien desde el fondo.

El mural de Claudia Pía Baudracco sintetiza la identidad colectiva. “Se caminó todo el país”, subrayan, “para construir la Ley de identidad de género (que no llegó a gozar), la Ley de matrimonio igualitario, fundó ATTTA (en 1995), lideró el movimiento por la derogación de códigos de faltas discriminatorios en 15 provincias (lo logró en 14). Y en 2005 fue miembro fundadora de la creación de la FALGTB”, enumeran casi sin respirar.

Generar trabajo luego de la crisis “Es muy complicado para las masculinidades trans, y mismo para las mujeres trans, conseguir un trabajo estable”, lamenta Eideen, con la crisis post pandemia como escenografía. “Y más difícil es que te respeten como uno es”, agrega. Afirma que está dispuesto a trabajar muchas más

horas cuando el negocio empiece a rendir frutos.

El rubro textil tiene mala fama: explotación, malos tratos, trabajo no registrado, mal pago, cuerpos uniformes. La Claudia Pía se propone encarar este oficio con otra perspectiva, con otro trato y de forma autogestiva.

El espacio primero es escuela, y reconoce económicamente el tiempo que se requiere para la capacitación en el oficio. El grupo está conformado por 14 personas, que por ahora se encuentran aprendiendo a usar las primeras dos máquinas -una recta y una Overlock-. Dos veces por semana y durante cuatro horas se dedican a coser carteritas y riñoneras, con retazos reciclados, para sí mismos. El objetivo es aprender los gajes del oficio. Ahora que concluyeron una primera etapa de formación, empezarán a producir para vender, y lo recaudado será para fortalecer el emprendimiento.

Las clases están a cargo de Seba, que ostenta 25 años en el rubro textil; y Lidia, dueña de @bychabelita (en IGM), emprendimiento que (la) sostiene desde hace 10 años.

Un lugar para trabajar con amor Mientras Eideen fuma en el jardincito se presenta: “Soy un varón trans bisexual. Nunca tuve la aceptación de mis padres, no

saben que soy una masculinidad trans, tampoco lo aceptarían si se enteraran. Encontré este espacio en el cual me siento cómodo”. Agrega que siempre vivió en Las Catonas, un complejo habitacional de 1.600 unidades construido por el FoNaVi entre 1978 y 1989.

A los 16 años, en 2018, Eideen estaba pasando un momento difícil, en situación de calle, y pidió ayuda llamando a un 0800 del INADI. Leandro, un empleado sensible, con su mamá, Zulma, le acercó un bolsón de alimentos, y se hicieron amigos. En 2020, cuando ingresó como directora nacional Ornella Infante, la pusieron en contacto con Vale Roxy, militante del peronismo diverso de la zona noroeste de conurbano, que se acababa de mudar a Moreno. Andaba buscando encender el motor de la textil trans, muy cerca de su casa. “Vine a una primera reunión y me sentí bien por las buenas vibras de la gente”, recuerda.

Cada vez que busca trabajo, la conversación se repite:

-No, acá están buscando hombres.

-Pero yo soy un hombre.

-No, pero...

Diseñar y producir para todes

Eideen sigue buscando otro trabajo. Pero, sobre todo, desea hacer

binders al por mayor, para que a nadie le falte. “Me he vendado con faja postquirúrgica, con retazos de tela, y eso te llega a lastimar. Las vendas te cortan y te queman. Tengo todas las cicatrices y con el tiempo te puede llegar a agarrar cáncer”, explica.

“Yo a los 13 años no sabía, y lo primero que agarraba eran vendas. Y es un problema de salud a futuro que estaría bueno evitar, y que estuviera como contenido de ESI (Educación Sexual Integral) en todas las escuelas”, completa.

Su novio también es una masculinidad trans, que está teniendo problemas de discriminación en la escuela secundaria (tiene 17 años). Tanto Eideen como su grupo lo están acompañando en el diálogo con las autoridades. Lo mínimo que necesita una masculinidad trans en su adolescencia es poder cubrir su cuerpo como se le antoje, construir su imagen.

“Un binder sale 6.000 pesos, y nosotros lo podemos fabricar por mucho menos”, dice ahora Gaby. “Y para nosotres poder darles una mano a las diversidades es un montón. Es algo que nos atraviesa, que nos interpela, porque somos todes personas que venimos de espacios dónde hemos sido iscriminado/a/es. Desde muy jóvenes”, saca cuentas Gaby, que tiene 35 años y una migración de por medio. “Yo

vengo de Córdoba, una provincia que es bastante conservadora”, y para colmo de Alto Verde, un barrio “cheto”. Como lesbiana no binarie, se asentó en Moreno, el segundo distrito más pobre del Conurbano bonaerense, donde vive de una manera “mucho más fluida”, trabajando mientras toma mates compañeros, con una vida “comunitaria”.

“Y este espíritu también se refleja en los productos, pensando en causar un impacto social”, advierte.

Espíritu de lucha

“Acá nos organizamos con compañeres de todas las diversidades, y para poder tener una base, un ingreso, les compañeres son parte del Programa Potenciar Trabajo. Tal vez a las personas travestis y trans les cuesta mucho más el acceso a la educación y a la salud. Pero a las lesbianas, no binaries, y maricas del conurbano también nos cuesta conseguir trabajo por nuestra expresión de género”, aclara Vale Roxy (38). Ella es lesbiana no binarie, respecto de la amplia composición de la colectiva, que articula con el Estado en sus distintos niveles.

Antes de recibir las máquinas ya habían hecho una primera capacitación con el IMDEL (Instituto Municipal de Desarrollo

Económico Local de Moreno). “En el armado de la unidad productiva algunos nos estamos encargando de la gestión del entramado institucional, el armado de la cooperativa, para poder hacer convenios con el municipio y demás áreas institucionales”, cuenta Vale, que también trabaja en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.

En Moreno la relación con el municipio está allanada, porque desde diciembre de 2019 gobierna Mariel Fernández, la primera intendenta mujer, feminista, y de una organización social (el Movimiento Evita).

La textil también cuenta con el apoyo del INADI, y con una estrecha relación con Onella Infante, a quien Claudia Pía despertó a la vida política en su Santiago del Estero natal. El próximo paso es la máquina que sirve para el armado de las prendas y tapa costuras, la collareta, y la inclusión en ferias de todo tipo, para vender la producción, además de las ventas online y la difusión por redes sociales.

La Claudia Pía produce prendas para que abracen cuerpos rebeldes, pero tal vez su producto más valioso sea el espacio de conversación, visibilidad y lucha. Como remarca Gaby: “Nosotres somos del conurbano, somos pobres, somos travas, tortas, putos”, y “esa

identidad es una fortaleza para llegar a más lugares, para competir con el mercado, un mercado para el que somos invisibles”.

Hey Latam deberá pagar más de 10 millones de sueldo adeudado a sus trabajadores

A continuación reproducimos el comunicado

LA JUSTICIA VUELVE A DARLE LA RAZÓN A LOS TRABAJADORES DE HEY LATAM: LA EMPRESA DEBERÁ PAGAR MAS DE 10 MILLONES POR SUELDOS ADEUDADOS

La Cámara de Apelaciones en lo Laboral confirmó la sentencia en primera instancia que obligaba al empresario Martín Stauffer, que anteriormente había realizado una quiebra fraudulenta de la empresa Contac Center & Recovery, a que le pague los salarios que corresponden al periodo que el empresario debería haberlos reincorporado a la empresa paralela Key Market, del mismo dueño. Una vez más la justicia vuelve a darle la razón a las y los trabajadores, que hace más de un año y medio vienen peleando por sus puestos laborales. Tomás, trabajador despedido comentó: «frente a la crisis que sufrimos día a día, las y los trabajadores demostramos la fuerza que tenemos si nos unimos y

nos organizamos, como son los fallos históricos que venimos consiguiendo y como lo estamos demostrando poniendo en pie una cooperativa bajo control de los trabajadores, junto al apoyo de estudiantes, trabajadores, jóvenes precarizados, docentes...» Celina Tidoní, abogada de las y los trabajadores, perteneciente al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos dijo: «es un precedente muy importante para todas y todos los trabajadores, ya que no solo venimos demostrando las maniobras de los empresarios como Stauffer que dejan familias en la calle, mientras se llevan millones con maniobras y quiebras fraudulentas, sino que la justicia le sigue dando la razón a los y las trabajadoras. En el medio de la crisis y donde vivir es cada día ms difícil, vamos a seguir peleando el cobro de los salarios y porque el empresario cumpla la ley, y apoyando a los trabajadores. Es un punto de apoyo para todas las luchas de trabajadores.»

Denuncian infiltración policial en las organizaciones sociales y la izquierda en Jujuy

Reproducimos aquí la conferencia de prensa realizada por referentes de las organizaciones sociales junto a organizaciones solidarias y de Derechos Humanos

por la persecución y criminalización de las que vienen siendo objeto por parte del gobierno de Gerardo Morales:

Denunciamos que en la causa armada por la justicia de Morales contra más de 16 organizaciones y dirigentes sociales en la Provincia de Jujuy, acusándolas de “asociaciones ilícitas” fue iniciada por el poder judicial ordenando a las Fuerzas de Seguridad infiltrarse en movilizaciones e identificar a referentes de organizaciones sociales y políticas realizando tareas de inteligencia desde comienzos del mes de abril.

Este gravísimo accionar ilegal y persecutorio realizado por el Estado Provincial vulnera de forma flagrante Derechos Humanos y democráticos básicos, habiendo realizado la policía provincial una tarea detallada sobre el funcionamiento de partidos políticos, organizaciones sociales y sus referentes infiltrándose en marchas, lo que luego concluyó con los allanamientos efectuados el pasado 6 de julio.

Las tareas de inteligencia solicitadas por el poder judicial ocurrieron inmediatamente después que Gerardo Morales –en el inicio de las sesiones ordinarias 2022- haya tildado a referentes de organizaciones sociales como “delincuentes” y anunciando que

iba a avanzar con su política represiva y persecutoria a todos aquellos que se opongan a sus políticas de hambre. ¿Está es la paz social que pregona Morales?

Denunciamos esta metodología escandalosa, donde las fuerzas de seguridad fueron llamadas a Infiltrar a las organizaciones sociales, para acusarlas de asociación ilícita. El fiscal no cuidó ni las formas usando palabras que hacen recordar épocas oscuras. El juez en vez de rechazar in limine semejante pretensión le dio curso.

Por ello es necesario responder con la mayor unidad. **¡SI TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS!**

Exigimos:

¡CIERRE INMEDIATO DE LA CAUSA!

¡BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA!

**¡ D E R O G A C I O N
DEL CODIGO
CONTRAVENCIONAL!**

¡BASTA DE PERSECUCIONES!

La conferencia fue impulsada por las organizaciones sociales y sectores políticos de Jujuy integradas por los Bloques UTEP, CTA, FITU, Coordinadora de organizaciones populares, UTEP Tosco, UP, FNT y CTA de Trabajadores y Autónoma. En la misma también participaron los referentes del

PTS-FIT Natalia Morales, diputada provincial (MC) y el concejal de San Salvador de Jujuy, Gastón Remy.

La Justicia y la Policía, cómplices del ataque a Tiempo Argentino
Por Cooperativa Por Más Tiempo

El aparato judicial y policial y los funcionarios macristas son responsables por la falta de castigos contra quienes cometieron un delito de grave contra la libertad de expresión.

Sin siquiera atender los argumentos de las trabajadoras y los trabajadores de la cooperativa, la Sala I de la Cámara Federal integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmó la complicidad entre la familia judicial, la Policía y los responsables políticos del ataque a la redacción de Tiempo Argentino y Radio América ocurrido el 4 de julio de 2016.

En un escrito de menos de cuatro páginas, los jueces, Lorens, Bruglia y Bertuzzi ratificaron el sobreseimiento sobre el comisario Jorge Azzolina, a cargo de la comisaría 31 cuyos uniformados cumplían tareas durante la madrugada del ataque. De este modo, confirmaron la decisión dictada por el juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Repudiada por diversos organismos de DD HH y gremios, la medida había sido también apelada por la cooperativa en una audiencia en la que María del Carmen Verdú, representante de las trabajadoras y los trabajadores como querellantes en la causa, sostuvo que está documentado que Azzolina fue quien puso en contacto al falso comprador de Tiempo, Mariano Martínez Rojas, con Juan Carlos Blander, quien a la vez contrató al cerrajero que abrió la redacción y permitió el ingreso de la patota.

Bertuzzi y Bruglia fueron trasladados a la Cámara Federal a dedo y sin concurso durante el gobierno de Mauricio Macri, quien a la vez trató de “usurpadores” a los y los trabajadores de Tiempo que habían sido víctimas de uno de los ataques más graves a la tarea periodística desde la vuelta de la democracia.

Junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), desde la cooperativa repudiamos el sobreseimiento a Azzolina. Volvemos a denunciar la complicidad entre el aparato judicial, policial y los funcionarios macristas que usaron el paso del tiempo para evitar encontrar evidencias, datos y documentos que

den cuenta del violento accionar durante esa madrugada.

Todos ellos son responsables de que no haya castigo contra quienes cometieron delitos de “usurpación, daño, interrupción de un medio de comunicación” en el ataque a Tiempo Argentino, medio recuperado después del vaciamiento llevado adelante por los empresarios Sergio Bartolomé Szpolski y Matías Garfunkel.

Fuentes: [Tiempo Argentino](#), Resumen Latinoamericano, Anred, Red Eco Alternativo, www.ambito.com, Agencia Presentes, La Izquierda Diario

No dan las cuentas con el FMI

Mario Hernandez

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, confirmó el jueves 7 que no se avanzará en el Proyecto del salario básico universal por el momento porque no dan las cuentas de Argentina. También añadió que “todo es motivo de estudio y de conversación, pero no está la posibilidad en este momento por las cuentas de la Argentina”. Las cuentas “no dan” porque se prioriza cumplir con las metas de ajuste del acuerdo con el FMI.

Unidad Piquetera marchó a Plaza de Mayo contra el ajuste y la crisis social: exigen ruptura con el FMI

Organizaciones agrupadas en el bloque Unidad Piquetera realizaron este jueves una nueva manifestación multitudinaria que tuvo su punto central en la Plaza de Mayo para reclamar aumento de los montos y cupos de los planes sociales, bolsones de alimentos y asistencia económica para familias

de desocupados y jubilados, entre otras demandas.

Pese a las versiones que durante toda la jornada circularon acerca de un posible acampe de manifestantes, finalmente esa posibilidad quedó descartada. En votación a mano alzada, miembros de las organizaciones presentes acordaron «levantar la permanencia en la Plaza, pero continuar con el plan de lucha”.

El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni aseguró en el cierre de la movilización que «nosotros no somos parte de ninguna interna» y enfatizó que «hay que romper con este gobierno ajustador que sigue las consignas del Fondo Monetario Internacional». Remarcó la importancia de que al reclamo se hayan sumado grupos que «están teniendo una posición de acercamiento», refiriéndose al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Como primer paso anticiparon que acordarán una fecha para una nueva jornada de protesta en los próximos días, aunque otros movimientos sociales y organizaciones, como CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, anunciaron una marcha con cortes en todo

el país para el miércoles 20, en el marco de un plan en demanda del Salario Básico Universal y un «aumento de emergencia para los trabajadores».

Ante el pedido de reunión con la ministra de Economía, Silvina Batakis, Belliboni contestó que no fueron recibidos y que les dijeron que «la semana que viene» los recibiría «alguien de la Secretaría de Relaciones Institucionales, como si esto fuera un problema menor».

También estuvo en la plaza el dirigente del Movimiento Evita y Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Nación, Fernando «Chino» Navarro, quien manifestó que «creo que es un momento complicado de la economía argentina y los reclamos son legítimos». Expresó que puede «compartir o no todas las consignas, pero hay necesidades y eso hay que reconocerlo. Nosotros seguimos reivindicando al trabajo como el gran ordenador de la crisis socioeconómica argentina y hay muchas organizaciones que se expresan de distintas maneras», consideró Navarro.

En la Plaza de Mayo se realizaron diversas actividades, como la actuación de artistas en vivo y la instalación de puestos con muestras del trabajo de las organizaciones en los barrios populares,

por ejemplo, las tareas de costura y confección textil.

La manifestación se inició después de las 10:30 para exigir a las autoridades «un bono y la reapertura del programa Potenciar Trabajo», así como demandar un aumento de los montos y cupos de los planes sociales, bolsones de alimentos y asistencia económica para familias de desocupados y jubilados.

«Pedimos un bono de ayuda similar al que se realizó en los últimos dos meses, que sea para jubilados, trabajadores precarizados y desocupados y también solicitamos la reapertura del Potenciar Trabajo y la universalización del mismo», declaró Silvia Saravia, dirigente de Barrios de Pie.

«¡Derrotemos el ajuste! ¡Fuera el FMI! Por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza; basta de criminalizar a los que luchamos», fueron las consignas de UP, integrada por el Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional, la Coordinadora por el Cambio Social, la Agrupación Armando Conciencia, la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde), entre otros.

Las organizaciones piqueteras también denuncian que la

designación de la ministra de Economía, Silvina Batakis, responde a una tregua de la crisis interna en el gobierno que profundizará la línea de ajuste emprendida por su predecesor Martín Guzmán.

La Unidad Piquetera que copó la Plaza de Mayo votó realizar un plan de lucha con la UTEP

«Hemos logrado consensuar algunos puntos en común, somos muchos más sectores hoy los que estamos dispuestos y dispuestas a repudiar el ajuste», fueron las palabras de Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, uno de los movimientos sociales que componen la Unidad Piquetera que movilizó el jueves hasta Plaza de Mayo reclamando una audiencia con la nueva ministra de Economía.

Las demandas al gobierno nacional son principalmente un «aumento del salario mínimo igual a la canasta básica y el bono de 20.000 pesos» así como el cese de la criminalización a las organizaciones piqueteras que están siendo allanadas en distintos puntos del país, con el agravante de la deportación que realizó el gobierno de Zamora en Santiago del Estero donde no solo impidieron una movilización sino que «demoraron» a Sebastián Godoy, referente

del Polo Obrero, quien denunció que fue deportado a la provincia de Tucumán.

Si bien la Unidad Piquetera no logró ser recibidos por Silvina Batakis, la nueva ministra nacional de economía, delegados y delegadas de la Unidad pudieron ingresar y conversar con otras autoridades en el ministerio de Hacienda.

Luego realizaron un acto en Plaza de Mayo donde exclamaron “nos quieren sacar de la calle, pero no de la pobreza” y votaron un plan de lucha.

Desde la Mesa Nacional de la Unidad Piquetera se propuso levantar la permanencia en Casa Rosada y votar «la continuidad del plan de lucha a partir de la propuesta de compañeros de la UTEP para coordinar una jornada de lucha contra la criminalización de la protesta social, y un bono de \$20.000 para los monotributistas de la categoría más baja y jubilados».

Unidad de acción para «derrotar el ajuste»

«Tenemos que dejar un poco las diferencias políticas y sí ponernos de acuerdo en que este ajuste y este enfrentamiento con esta política del gobierno donde la vicepresidenta parece que no es la vicepresidenta porque no se hace cargo de la gestión y no hace nada

más que decirnos que vuelvan todos los intendentes, los mismos punteros que nos precarizan, que pagan miserias en los municipios; mientras toda la derecha dice, grande Cristina, pero no se lo vamos a permitir. Por eso mañana vamos a discutir cómo enfrenamos la criminalización de la protesta y cómo salimos a luchar por lo que de verdad merecemos una vida digna, distinta donde los trabajadores podamos gobernar y decirle basta a todos estos ladrones que nos cagan el futuro», expresó Mónica Sulle, dirigente nacional del MST.

De esta manera, el viernes se reunirán la Unidad Piquetera y los movimientos sociales oficialistas nucleados en la UTEP para ir en unidad a las calles “contra el ajuste”.

En este sentido, también «llamaron a la intervención de la CGT», que anunció que llamará para el 17 de agosto (dentro de 1 mes y 13 días) con la consigna «Por la unidad, contra la inflación», a una marcha desde el Obelisco al Congreso.

Santiago del Estero: reprimen a trabajadores desocupados que se manifestaron contra el ajuste

En el marco de la jornada de lucha piquetera nacional, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, montó

un operativo represivo contra los manifestantes de la Unidad Piquetera, con un saldo de heridos y la detención del dirigente del Polo Obrero, Sebastián Godoy, quien continuó siendo golpeado en el camión policial y fue liberado gracias a la movilización popular.

La respuesta represiva de Zamora es parte de una escalada de provocaciones de un gobierno provincial incapaz de atender los reclamos y necesidades urgentes de los y las trabajadoras desocupadas. Como en Jujuy, con Gerardo Morales, los gobernadores apelan a la represión contra un movimiento de lucha en ascenso, que sale a la calle a enfrentar el ajuste y a reclamar por trabajo genuino y asistencia social inmediata.

Desde la Coordinadora por el Cambio Social expresamos nuestra profunda preocupación por el rumbo económico, político y social que está tomando el gobierno condicionado por la decisión, desde el día mismo de su asunción, de acordar con el FMI el pago de la deuda ilegítima y fraudulenta que contrajo (y fugó prácticamente en su totalidad) el gobierno de Mauricio Macri y sus aliadxs de los sectores concentrados de poder. El cambio de ministrxs no planteó un cambio de rumbo, sino que

las medidas de Batakis apuntan a profundizar el ajuste y a “calmar” los mercados descargando todo el costo de la crisis en quienes menos tienen. Pagar al FMI es incompatible con las promesas de campaña de mejorar las condiciones de vida de miles de trabajadores y trabajadoras; es incompatible con políticas públicas contra la violencia por razones de género, que sigue matando una mujer, lesbiana, travesti, persona trans o no binarie cada 30 horas; es incompatible con la implementación real del cupo laboral trans y mejoras en la situación laboral de miles de trabajadoras precarizadas; es incompatible con una educación y una salud pública de calidad; es incompatible con el acceso a la vivienda digna y la soberanía alimentaria. Durante estos años de gestión, el Frente de Todos lo único que hizo fue profundizar el rumbo de la gestión macrista, con una caída a pique de los salarios –especialmente de las personas de más bajos ingresos– y una escalada inflacionaria que cada vez está más fuera de control y que para fin de año ya se calcula que ronde en el 90%. A su vez, las medidas orientadas a captar dólares impulsan el agronegocio y la explotación extractivista de nuestros bienes comunes y una nueva “teoría del derrame” que supuestamente

favorece a los sectores populares e históricamente no ha hecho más que engordar las arcas de los ricos. La salida de Martín Guzmán y la entrada de Silvina Batakis al ministerio de Economía (ex ministra de la gestión de Daniel Scioli y quien llevó adelante un ajustazo en la provincia de Buenos Aires) no hace más que confirmar este rumbo, con el anuncio de un paquete de medidas que muestran que el principal interés de este gobierno es cumplir las “metas” que plantea el acuerdo con el Fondo y por esto repite viejas fórmulas que no han llevado más que a profundizar las crisis y empeorar las condiciones de vida del pueblo: un fuerte ajuste sobre el gasto público que anuncia mayor flexibilización y precarización laboral, hospitales sin insumos y escuelas-bomba que matan a compañeres docentes, aumento de tarifas, más devaluación, menos presupuesto para jubilados, menos acceso a la vivienda, menos políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de las mujeres, personas del colectivo LGTB+, niñeces y juventudes. A pesar de la escalada represiva, las persecuciones judiciales, las olas de allanamientos a nuestros espacios comunitarios y las falsas acusaciones mediáticas que hemos tenido que sufrir en estas últimas

semanas, los sectores populares en lucha seguiremos movilizadxs en las calles, porque es la forma en la cual históricamente hemos conquistado nuestros derechos. Los movimientos sociales somos parte de la solución y no el problema, somos quienes estuvimos en la primera línea enfrentando la pandemia en los barrios. Además, el trabajo que desarrollamos de forma cotidiana es el que garantiza necesidades tan básicas como la de que cada familia pueda tener un plato de comida en su mesa. La disputa interna del Frente de Todos por el control territorial es una política mezquina y vergonzosa que ataca nuestro legítimo derecho a organizarnos y erosiona las redes comunitarias construidas con años de esfuerzo y trabajo colectivo. Por eso, llamamos también a salir en la mayor unidad, junto a trabajadores formales, informales, precarizadxs, y todas aquellas personas que realizan trabajos de cuidado, sin remuneración y no reconocidos, a pesar de ser quienes sostienen la trama social ante la crisis. ¡En estos tiempos en los que las condiciones de vida se hacen cada vez más difíciles, es fundamental como pueblo salir juntxs a luchar! ¡Fuera FMI! ¡Suspensión ya de los pagos e investigación de la deuda! ¡Nos quieren sacar de la calle, pero no de la pobreza!

Trabajadoras y trabajadores de la recuperada Madygraf marcharon para exigir la expropiación

Este jueves trabajadores y trabajadoras de la empresa recuperada MadyGraf se movilizaron hasta la ciudad de La Plata. Los y las integrantes de la gráfica recuperada llegaron a la capital de la provincia de Buenos Aires para exigir que se apruebe el Proyecto de expropiación de la empresa. El mismo sería en beneficio de los mismos trabajadores. Su pelea es por la expropiación definitiva, pero vienen peleando en este momento para que se dé un primer paso con una expropiación por 5 años.

Eduardo “Chavo” Ayala, referente de la gráfica recuperada dijo que la movilización era parte de una jornada de lucha que se había iniciado en la Ciudad de Buenos Aires, acompañando a los movimientos sociales que marcharon a Plaza de Mayo.

“Estamos reclamando la Ley de expropiación. Los distintos bloques que conforman la Legislatura han mandado o han pasado por la fábrica. Pudieron constatar que es una fábrica que está funcionando, que tiene una actividad productiva muy interesante”, señaló.

Agregó, además, que «en estos 8 años que llevamos de gestión obrera, hemos incorporado nueva tecnología e impulsamos

una producción para un producto nuevo amigable con el medio ambiente. También creemos que somos vanguardia en la implementación de eficiencia energética, implementando un sistema 4.0 para el ahorro de energía y reducir la contaminación del medio ambiente”.

Sin embargo, a pesar de eso, el proyecto de expropiación no ha avanzado. Los distintos bloques de la Legislatura no han avanzado en dar una resolución a este reclamo. Es por eso que los trabajadores y trabajadoras seguirán movilizándose y peleando por su reclamo.

Allanamientos en Jujuy

A una semana de los operativos simultáneos en locales, merenderos y casas particulares los y las militantes de organizaciones sociales fueron notificados de que debían presentarse ante la Justicia. Las acusaciones incluyen delitos no excarcelables: extorsión y asociación ilícita.

El martes a la noche, seis días después de los 16 allanamientos simultáneos en locales, comedores, merenderos y casas particulares de quienes son estigmatizados y criminalizados por administrar los planes Potenciar Trabajo, las y los allanados –que pese a la brutalidad de los operativos y a la supuesta investigación previa no están imputados por ningún delito– fueron notificados de que debían presentarse el miércoles

13 por la mañana junto con peritos informáticos para proceder a abrir los pendrives, celulares y computadoras que les secuestró la policía provincial.

El Ministerio Público de la Acusación, que Morales controla desde 2016, rechazó los planteos de sus abogados por las irregularidades en los procedimientos (en la mayoría de los casos les impidieron estar presentes) y también el pedido para que suspendieran las audiencias convocadas con pocas horas de anticipación. «Al cumplir cinco horas de audiencia pedí un cuarto intermedio, todos estamos cansados, incluso los propios funcionarios. Me rechazaron el pedido. Ya no podemos ver ni leer las actas”, apuntó el abogado Luis Paz el miércoles por la tarde, cuando ya llevaba ocho horas de audiencias.

“Acá no entiende el que no quiere. Intervención federal al Poder Judicial ya”, reclamó, en línea con el pedido de las organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos que conforman el Frente Milagro Sala.

“Ante los 16 allanamientos que entendemos fundados en motivaciones absolutamente políticas contra dirigentes de organizaciones sociales, sus locales, merenderos y comedores, entendimos que había una urgencia que ameritaba adelantar el viaje, y aquí estamos”, apunta Job de la Comisión de Solidaridad.

El objetivo más urgente que se plantea la Comisión de Solidaridad es impedir que las y los militantes que padecieron los allanamientos sean detenidos antes de la feria judicial. “Por las carátulas en principio pareciera que están orientando la investigación hacia los delitos de extorsión y asociación ilícita, lo que implica que, por el monto de las penas y por la arbitrariedad con la que actúa el Poder Judicial jujeño, podrían dictarles la prisión preventiva. En ese marco nos parece fundamental venir al territorio, mostrar solidaridad y evitar el agravamiento de una situación de por sí muy preocupante”, explica.

El segundo objetivo es continuar con la recolección de denuncias de quienes son perseguidos por el aparato paraestatal jujeño. “Recién comenzamos la asamblea y ya se acercaron varias comunidades originarias que están siendo violentadas o desalojadas o que les matan los animales en alianza entre policías, grupos paraestatales, Poder judicial y empresas que quieren quedarse con sus tierras. Ya estamos empezando a escuchar situaciones que exceden por mucho a los allanamientos, inclusive de compañeros y compañeras de movimientos sociales que fueron torturados durante sus detenciones”, apunta.

La Comisión está integrada por militantes de organizaciones

sociales, políticas y de Derechos Humanos. Para este jueves esperaban la llegada de Pablo Pimentel, de la ADPH Matanza, y de la diputada Natalia Zaracho. Entre los presentes, Job apuntó a “compañeros del Encuentro de Organizaciones de Córdoba, del MTE de La Plata, de la CTA-A” y destacó que “por primera vez (la Comisión) cuenta con el acompañamiento de la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia”, no sólo por su presencia (es coordinador de la regional zona centro) sino también de los coordinadores del NEA y el NOA. “Estamos acompañando y tratando de aportar herramientas porque entendemos que nuestra función en el Estado es defender las instituciones democráticas y los principios que tienen que ver con el acceso a la justicia”. “Jujuy atraviesa una situación sumamente preocupante en términos de democracia, de respeto a la institucionalidad y los principios republicanos, de garantías constitucionales y penales. Todo eso en Jujuy está en suspenso a partir de la decisión de un Poder Ejecutivo que utiliza al Judicial como grupo de choque y persecución”, destacó.

Marchan en Jujuy contra el ajuste, la criminalización de la protesta y los ataques a las organizaciones sociales

El jueves 14 organizaciones sociales agrupadas en la «Unidad Piquetera»

marcharon por las calles del centro jujeño en el marco de una «jornada nacional de lucha contra el hambre y la pobreza».

Además de rechazar la criminalización de la protesta y expresar repudio a los allanamientos en la provincia, levantaron el reclamo por bonos de emergencia para precarizados y desocupados, trabajo genuino, asistencia a comedores y merenderos populares. También expresaron el rechazo al ajuste pactado con el FMI.

Allanamientos, multas, detenciones y causas armadas: El manual de la persecución a las organizaciones sociales en Jujuy

Después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala, y aprovechando el debate sobre la administración de los planes sociales, la estructura judicial que responde a Morales profundizó su asedio a las organizaciones populares. Página/12 recorrió distintos barrios de la provincia y recogió la palabra de dirigentes y militantes sociales, quienes relataron las modalidades con que son perseguidos por movilizarse para conseguir comida para merenderos o reclamar por derechos básicos. «Parece que luchar es un crimen», dicen.

Por Irina Hauser

Desde la semana pasada, el Ministerio Público de la Acusación viene mandando a la policía a requisar casas particulares, comedores,

merenderos y sedes de organizaciones sociales.

“Acá para decidir poner 250 pesos cada uno para la organización hacemos una asamblea que puede llevar horas y horas de debate ¿Eso es una asociación ilícita? Lo hacemos porque la comida no alcanza para los comedores y merenderos». Ana Julia Ramos, militante de AJI-20 (Agrupación Joven Independiente 20 de Agosto), se hace esa pregunta al promediar la semana en que la policía de Gerardo Morales desplegó 16 allanamientos en casas, sedes de movimientos sociales y comedores populares y repartió notificaciones del fiscal Diego Funes que no sólo los señala como si fueran bandas criminales sino de extorsión por la administración de los planes Potenciar Trabajo, entre otros. «Estos días juntamos plata para pagar el ataúd de un abuelo del barrio ¿Eso es delito? ¿Es extorsión?», se suma Miguel Ramos, de la misma agrupación.

La persecución judicial-política es ostensible, está exacerbada desde que Alberto Fernández visitó a Milagro Sala cuando estaba internada por una trombosis venosa profunda y advirtió que es ilegal que lleve siete años en prisión preventiva. Ahora la ofensiva aprovecha el debate por el manejo de los planes sociales. Pero en Jujuy es de larga data y es poli-temática, aunque todo converge en intentar debilitar a los

movimientos y sociales evitar que se vea el fruto de sus estrategias de supervivencia –como la Economía popular– y en especial que ganen las calles. El gobernador Morales, como es conocido, armó una estructura judicial a su medida que es clave en su estrategia. El asedio a las organizaciones populares se instrumenta a través de causas penales y de contravenciones que se judicializan y derivan en multas monstruosas, impagables, 15 días de arresto en calabozos inhumanos o en el ofrecimiento de hacer tareas comunitarias, una verdadera burla para los/as militantes.

Contravenciones y aprietes

“Parece que luchar es un crimen», vuelve Miguel, que tiene 53 años. Por debajo de su boina asoma una tupida melena gris y una argolla que pende de su oreja izquierda. Hay una fila de sillas contra la pared de uno de los salones de la sede de Nuestramérica, donde se comparthen bizcochitos. A tres sillas de él habla Silvia Valdiviezo, que lleva una remera con un 22 que se agiganta sobre su panza de ocho meses de embarazo. Es el símbolo del Frente 22 de Agosto. Tiene los pómulos morenos marcados y el pelo lacio negro largo. «El viernes nos llegó una cédula contravencional, por la movilización de los 20 años del asesinato de Maxi Kosteki y Darío Santillán. A notificar vinieron ocho policías en

una camioneta y un patrullero, para que se entere el barrio», dice. Con el hijo por llegar, tendrá cuatro «y tres contravenciones». A su pareja, Diego Bustamante, que trabajaba en el ministerio de Desarrollo Social, lo echaron hace dos años después de ir a ver a Milagro Sala. Ahora hace obras en cooperativas. A su hija, del ministerio de Salud.

Sebastián Copello, del Partido y del Polo Obrero en Jujuy, estuvo detenido una semana con dos compañeros. Lo acusaron de quemar gomas y obstruir el tránsito en una protesta por asistencia para comedores y merenderos. Lleva una campera azul larga y hasta el cuello. Cuenta que tiene dos procedimientos en su contra: “Uno penal, que está cajoneado, y uno contravencional”. “Me pusieron una multa de 400.000 pesos”, precisa.

Miguel Ramos recuerda que después que detuvieron a Milagro Sala “la gente no se animaba a nada”, pero con el tiempo y la pobreza la lucha siguió. Cuenta sus contravenciones con resignación para no dejarse amedrentar. Recuerda un hecho que causó conmoción en 2021, cuando descubrieron que en el Colectivo Radio Pueblo llevaba tres años infiltrado un agente de la Policía de Jujuy, Ezequiel Rodrigo Rosales, que se hacía pasar por periodista. El hallazgo se produjo cuando su esposa

lo denunció por violencia de género. Lo denunciaron, pero nada pasó.

La doble vara es explícita: a Ana Julia Ramos y Marisol Velázquez, ambas de AJI-20, les armaron una causa por supuestas amenazas contra Morales. Les adjudican un grafiti con la cara del gobernador que dice “se lo busca sin vida”. El expediente no tiene ni una prueba que las comprometa. “No prueba más que nuestra militancia en los barrios”, dice Ana Julia, de pelo negro largo y flequillo, labios y sweater rojos. “Hay capturas de nuestras redes sociales y la lista que presentamos para las elecciones legislativas. En una foto de campaña me marcan con un círculo rojo; de Marisol toman un posteo de Instagram y le ponen ‘fan destacada de AJI-20’”, cuenta. “¿Cómo se va a sentir amenazado Morales por un grafiti si los amenazados somos nosotros?”, plantea Ana Julia. El fiscal es Diego Funes, el de los últimos allanamientos masivos.

Los allanamientos

El fiscal Funes es el número dos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que dirige Sergio Lello Sánchez, un leal a Morales, con denuncias de violencia laboral y de género. Los allanamientos de la semana pasada siguieron el fin de semana: Funes mandó a la policía y a asistentes fiscales a requisar casas particulares, comedores, merenderos y sedes de organizaciones, vinculados

con el Movimiento Evita, la Tupac Amaru, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la CTEP, Nuestramérica, el MTR 12 de Abril y el Frente Darío Santillán. Fue una excursión de pesca, para buscar documentos, computadoras, celulares, pen-drives. Quería información de los planes Potenciar Trabajo que reciben y administran las organizaciones. Su primer dictamen hablaba de asociación ilícita —usada para meter gente presa— y extorsión por el supuesto pedido de un porcentual del plan a las/los militantes o la exigencia de asistir a movilizaciones.

Daniel Galián, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), estaba a las 7 de la mañana del miércoles en la casa donde viven su papá, dos sobrinos pequeños y dos tías en Alto Comedero. A él y su padre los encañonaron y los esposaron. “Nos tuvieron así hasta las 12. Pusieron como excusa que no tenían papel carbónico para hacer el acta.» Revolvieron todo. Se llevaron hasta celulares viejos con tapa. A Gonzalo Maurín, de Nuestramérica, le golpeó la puerta temprano “un hombre con una escopeta en la mano”. Además de dispositivos, se llevaron su agenda, una vieja costumbre dictatorial.

“Desde que llegó Morales y se creó el MPA, empezaron con represión en una marcha a la Legislatura, luego órdenes

de allanamiento y detenciones. En 2020 nos llevaron a juicio por un corte a ocho militantes de varias organizaciones. Nos condenaron a pagar 150 mil pesos y la sentencia fue publicada en el diario *El Tribuno*”, cuenta José Surita, del Evita. Ese diario pertenece a Rubén Rivarola, presidente del PJ jujeño, socio político de Morales, con quien diseña la estrategia para 2023. Surita, de 55 años, también fue allanado la semana pasada. No estaba en su casa, en Maimará, porque estaba trabajando en San Salvador de Jujuy. Rompieron un vidrio y la puerta. El broche de oro fue que lo llamó la policía: “¿Anda por Maimará? Pasa que queremos retirar la consigna. ¿Podrá volver?”, le preguntaron. Parecía una broma.

Las y los abogados de los militantes fueron a la fiscalía y les dijeron que, por ahora, no hay imputación para nadie pese a que les incautaron de todo y armaron un show. Están todos con temor de detenciones porque conocen la tradición. El día de los operativos se juntaron en una foto Morales, Rivarola, Facundo Manes y otros dirigentes.

Mensajes y debates

Ivone Aparicio es una suerte de mujer “todoterreno” en el MTE. Entiende que el allanamiento a Daniel Galían fue un mensaje: “El es mi socio comunitario, va a preparar la olla en el espacio, es un aviso de que nos tienen en la mira”, dice, en una época donde apenas les llega alimento. “Yo tengo contravenciones. Mi mamá que tiene 73 años fue la que tuvo que recibir a un operativo de siete

policías que mandaron para notificarme. Se enojó y me dijo: ‘qué vergüenza, ni con tus hermanos paso esto’”, explica. Ivone desearía que su madre y tantos entiendan que “en los barrios estamos evitando un estallido, para esto trabajamos en el territorio”. Ella trabaja “con chicos con consumos problemáticos” en un espacio llamado *Vientos de Libertad*. «La mayoría está en situación de calle», alerta. Otra de sus tareas es acompañar a mujeres víctimas de violencia de género. “Buscamos sustento de distintas formas, vendiendo empanadas o con nuestro polo textil. Para bancar el alquiler hacemos rifas. Pero claro, ahora parece que si recaudás sos una asociación ilícita. Nadie vive con el Potenciar Trabajo y nos encantaría un trabajo formal, mientras creamos nuestra fuente», se enorgullece.

Otra de las formas de hostigamiento en Jujuy es atacar proyectos educativos. En Nuestramérica dan clases en modo taller para gente de 16 años, hasta más de 55. “El plan es crear una cooperativa educativa y bachillerato de educación popular”, cuenta Malka Mercado. Pero no les habilitan títulos oficiales, que quedan reservados para la gestión privada. “No hay legislación de gestión social en la provincia”, dice Malka. “Ahora –suspira– quieren denunciarnos como espacio ilegal educativo”.

Policías y ladrones

Fani Martínez es concejala de Calilegua desde hace seis meses. Milita en la Tupac Amaru y representa al Frente Unidad para la Victoria en un cuerpo de

seis, para un pueblo de 7.500 habitantes donde «no hay correo ni cajero automático, sólo un hospital», dice. Su allanamiento la semana pasada tuvo todas las irregularidades habidas y por haber: se hizo sin testigos, antes del horario de 7 a 20 fijado en la resolución de la fiscalía, violando sus fueros (que impiden entrar a su domicilio sin un procedimiento especial e indagatoria previa) y la policía robó 15.000 pesos de su casa. Lo más insólito es que cuando Fani fue a ver al jefe de la brigada «reconoció lo de la plata y me la devolvió».

«Rompieron las puertas, ventanas, tiraron todo, rompieron sillas, se llevaron dos celulares, anduvieron por el fondo por el techo. Era la brigada de investigaciones, eran dos camionetas llenas y una fiscal de Ledesma. En ese lugar ahora vive mi hijo, pero no estaba.» Cuando le insistió al jefe policial que quería saber qué estaba pasando, la respuesta fue: “Fuimos por orden de la provincia y la fiscal Moreno”. «Yo trabajo en la organización, dicen que les sacamos plata a los compañeros. Yo no les saco nada. Ellos trabajan vendiendo bollos entre otras cosas para la copa de leche. Siempre digo que no nos conformemos con el plan ni con el bolsón con mercadería sino con obras», señala la concejala que aspira en las próximas elecciones a disputarle la intendencia a Elsa Flores, que lleva dos décadas en el cargo y pasó por todas las fuerzas políticas.

En Lozano

Lozano es un pueblito en la montaña lleno de casas sin terminar y con ladrillo gris a la vista. El hambre acecha y hay varios comedores. Uno de ellos pertenece al Movimiento Evita. Es el **único de la zona no alineado con Morales, y por eso es castigado**. La semana pasada merodeaba esa manzana un auto sin patente. Allí vive y se ocupa de la comida y la merienda Jackie Salguero, de 36 años. «Empecé atendiendo a 15 chicos hace ocho años, hoy son 120», cuenta mientras amamanta a su bebé. «El intendente (Santiago Tizón) no nos da mercadería para poder dar de comer y administra más planes que nosotros, que al final somos los acusados.»

La semana pasada la policía se llevó documentos personales de muchas de las personas que asisten allí como parte de la avanzada del fiscal Funes. Jackie no tiene computadora ni otros dispositivos, apenas un celular, que le quitaron. «No estoy asustada, pese a que nos quieren generar miedo, pero sí con bronca. Nos arman investigaciones para ensuciarnos y que no llevemos gentes a las elecciones». Jackie es bajita, tiene una sonrisa amplia y gran carisma frente a todas las personas que van llegando. Son mayoría mujeres. Es una tarde especial, de «repostería».

Las adolescentes prepararon manjares para vender (pasta frola, torta de manzana, otra marmolada, con chocolate también) y poder conseguir la comida para seguir asistiendo a los chicos y chicas que no tienen nada.

La CNCT en Jujuy

Alrededor de todo el país, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) está llevando proyectos de construcción y urbanización. En la Provincia de Jujuy, el cooperativismo también comenzó a apostar al desarrollo para los sectores más vulnerables. El proyecto de reurbanización está liderado por la CNCT y coordinadas por la Federación de Cooperativas Unidas (FECOOTRAUN) Jujuy.

Inés Laura Rodríguez, presidenta de FECOOTRAUN Jujuy, amplió en diálogo con AnSOL: “Comenzamos una obra a través de la SISU (Secretaría de Integración Socio Urbana) de veredas en el barrio San Martín de Monterrico. Es un barrio popular en el cual estamos haciendo las veredas de 6 manzanas”, agregó que el trabajo lo realiza “la Cooperativa San Antonio, que tiene 20 personas trabajando en este proyecto que ha comenzado el 1° de junio de este año.”

Inés también comentó que “el San Martín estaba muy dejado. Tenía muchas aguas servidas en la calle, tiene muchas familias de bajos recursos con carga familiar, hoy tampoco tienen tendido de luz ni red de agua. Entonces, se ha dado prioridad por la situación en la que viven”

FECOOTRAUN también llevó adelante otros proyectos similares hace varios años, como contó su presidenta: “Venimos trabajando desde el año 2013, comenzamos con 10 cooperativas, hoy tenemos 55 cooperativas en toda la provincia y en distintas localidades. Cada una de ellas venía trabajando hasta el año 2015 haciendo vivienda, vereda, cloaca, núcleos húmedos, hicimos un hogar de ancianos que ha quedado a medias en Monterrico” y sumó “también estamos haciendo el tema del reciclado, trabajan las cooperativas haciendo todo, juntando latas, botellas y papel.”

Los proyectos para mejorar los barrios también están presentes en la proyección a futuro de la Federación: “Otro proyecto que queremos finalizar son las viviendas que han quedado a media construcción en el 2015, que son 28 viviendas en Monterrico, estamos viendo el trámite para dar la finalización de la obra. También presentamos a la SISU distintos

proyectos, como veredas en el Barrio Guadalupe, y en el barrio Néstor Kirchner hemos presentado el proyecto de conexiones intradomiciliarias de agua y luz” agregó Inés.

UTEP reclama al Congreso la Ley de Tierra y una Empresa Nacional de Alimentos

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizó este jueves una feria popular frente al Congreso de la Nación para pedir la sanción de la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo y la creación de una Empresa Nacional de Alimentos, con «propuestas concretas» para «mejorar la realidad de los trabajadores y las trabajadoras que más lo necesitan».

Desde la 10 se desarrolló una «una gran feria» con productos y actividades de las diferentes ramas de la Economía popular, informó la UTEP en un comunicado y señaló que el cierre de la actividad estaba previsto para las 15 con un acto en el que «buscará visibilizar el rol de los movimientos sociales y las cooperativas de trabajo del sector».

El referente de la UTEP, Rafael Klejzer, dijo que «dentro de las propuestas urgentes aparece con suma prioridad la necesidad de pensar una nueva forma de producción,

comercialización y distribución de nuestros alimentos».

Asimismo, explicó que «durante la jornada vamos a realizar una reunión de trabajo con el diputado nacional Leonardo Grosso, con quien vamos a avanzar en el proyecto de Ley para la creación de una Empresa Nacional de Alimentos».

«Es necesario apostar a una sociedad entre el Estado, los pequeños productores y la Economía popular, para ponerle freno a la ambición y la especulación de los grandes oligopolios que hoy controlan nuestras góndolas y nuestros precios», sostuvo el dirigente social en el comunicado.

La feria de la UTEP mostró la actividad de la Economía popular y el perfil de sus trabajadores. Lo más novedoso fue todo lo relacionado a la construcción: por ejemplo, a la plaza de Los Dos Congresos fueron bloqueras que están haciendo adoquines para la urbanización de barrios, cooperativas que fabrican ventanas de aluminio y empezaron a venderlas en sus municipios, para viviendas sociales. También mostraron lo suyo cooperativas que hacen obras de conexión del agua potable, otras que hacen techos, de extensión de cloacas, de capacitación para colocar termotanques solares. Son avances que reflejan pasos en

la integración vertical del sector: las obras que urbanizan los asentamientos dan trabajo (en parte) a cooperativas de albañiles y plomeros, que compran (parte) de sus insumos a bloqueras o carpinterías populares. Es frecuente que las cuadrillas encarguen su ropa de trabajo a polos textiles de la Economía popular, e incluso borceguíes de seguridad. Pero claro, la escala de este desarrollo aún es corta: por ahora son ejemplos que muestran lo que es posible hacer. Necesitan de más acompañamiento para multiplicarse.

“Empezamos con la bloquera hace dos años”, contó por ejemplo Gabriel Blanco, de la cooperativa Rompiendo Cadenas, de José C. Paz. Su cuadrilla fabrica bloques y adoquines. Sus compradores son compañeros de la organización y vecinos. Hace seis meses, sin embargo, recibieron un primer encargo grande, de otro MTE, y ahora están haciendo baldosas para el tendido de veredas en su municipio y en el vecino, de Malvinas Argentinas.

La bloquera, como proyecto, funcionó. Sin embargo, están esperando que técnicos del INTI, convocados por la Secretaría de Economía Social, los capaciten para lograr la certificación de los bloques. “La capacitación, el acceso a máquinas mejores, todo

eso es un gasto. Y viene demorado”, apuntó Blanco. Una inversión que tal vez, en el marco de los anuncios de Batakis, no se cumpla.

¿Qué otras producciones había? Muchas textiles, que están con viento a favor por el cierre de las importaciones. También sus trabajadoras están pidiéndole al INTI, desguazado por el gobierno de Mauricio Macri, que les den más capacitación, pero les dicen que no tienen el personal necesario, el macrismo despidió a la mayoría. Con el congelamiento de las designaciones en el Estado, este panorama difícilmente pueda mejorar.

La agricultura familiar llevó puestos de verduras agroecológicas, que ya son bien conocidas entre los consumidores. Había además panificadoras, en gran número. Los pescadores artesanales llevaron para su venta pescado de río y de mar (quieren una ley que los reconozca, para no ser perseguidos, y el acceso a equipos de frío propios, para no quedar presos de los grandes frigoríficos que les pagan poco y a destajo, y destinan el pescado a la exportación).

En los puestos de las herrerías casi todas las consultas fueron sobre el precio de las parrillas para balcón. En el área de desarrollo informático lo más llamativo fue

una cooperativa del Comedor Los Pibes, de La Boca, que recicla computadoras. Fueron también trabajadoras sociocomunitarios, de comedores, espacios de cuidado de niños. Y la rama de vendedores ambulantes.

Para cerrar la feria hubo un acto en reclamo de que sea debatida la ley de Tierra, Techo y Trabajo (a lo que algunas organizaciones sumaron el salario universal). En el escenario, la UTEP recibió a una delegación de la Unidad Piquetera que se acercó al Congreso a mostrar un frente común contra la criminalización de la protesta. Lo mismo habían hecho, más temprano, el titular de la UTEP, Esteban Castro, y el de la CCC, Juan Carlos Alderete, al acercarse a la concentración en la Plaza de Mayo de la Unidad Piquetera.

Castro adelantó que el conjunto de los movimientos sociales va a reunirse este viernes para acordar una movilización en conjunto a Tribunales por la libertad de Milagro Sala.

Para la semana próxima quedó esbozada, así, una movilización de todos los movimientos contra la judicialización de las organizaciones sociales. También está anunciada una movilización, el miércoles 20, por el salario universal.

El acercamiento entre los movimientos de la UTEP y las organizaciones de la izquierda, apoyado en hacer frente a la criminalización y oponerse a los recortes del gasto anunciados por Economía, expresa una lectura común: el rechazo a que la balanza se incline en favor del ajuste.

Alberto Fernández se reunió con las organizaciones sociales afines al Gobierno

Los movimientos sociales, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma anunciaron el miércoles una marcha con cortes en todo el país para el próximo miércoles 20, en el marco de un plan de lucha que se definió en asambleas, en demanda de la creación de un Salario Básico Universal y un «aumento de emergencia para los trabajadores».

La asamblea principal se realizó el mediodía del pasado miércoles en el Hall Central de la Estación Constitución del Ferrocarril Roca, con la participación de referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), como Juan Grabois, el Polo Obrero y la CTA Autónoma.

Por otra parte, Alberto Fernández recibió a la tarde en Casa Rosada a organizaciones sociales afines en el marco de un escenario signado por una crisis económica que se intensificó tras la renuncia de

Martín Guzmán como ministro de Economía.

Fueron parte del encuentro, los referentes de Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, representantes de la Túpac Amaru, otros de los referentes que asistieron esta tarde al encuentro con el Presidente de la Nación fueron: Esteban “Gringo” Castro, Ángel Adolfo Borello, Cristián Javier Romo, Alejandro Garfagnini, Beatriz Fleischman, María Mireyra Esteves, Laura Pugliese, Alejandro Abregú y Luciano Álvarez.

El llamado del Gobierno hacia las agrupaciones sociales también permite una lectura en relación a que en el último tiempo tanto los movimientos afines como los opositores se volcaron a las calles de manera masiva para reclamar ante un marco de crisis económica y creciente inflación.

En relación a las asambleas, la referente del MTE, Dina Sánchez, informó que en el encuentro se convocó a «una enorme movilización con cortes para el próximo 20 de julio», en reclamo de un salario universal y un aguinaldo para programas como el Potenciar Trabajo.

«Somos millones de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular en Asambleas Barriales para luchar por un

#SalarioBasicoUniversal que garantice un plato de comida y para que nadie este por debajo de la línea de la pobreza», publicó Sánchez en su cuenta de Twitter.

Y agregó: «Conformamos el sector de la Economía popular organizada. Nos inventamos nuestros propios trabajos, y gracias a la organización y lucha logramos dotarlos de derechos y mejores condiciones productivas. Pero, hay 7.5 millones de personas que no están organizadas, trabajan por su cuenta y no tienen un piso de ingresos que garantice la subsistencia. Para ellos necesitamos un salario básico universal».

También participó de la asamblea en Constitución el secretario general de ATE y secretario adjunto de la CTA Autónoma, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, quien sostuvo: «Hoy es necesario aumentar el salario de activos y jubilados, aumentar el salario mínimo, e implementar el Salario Básico Universal».

Otro referente que asistió a la convocatoria fue Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, quien realizará una marcha este jueves a la Plaza de Mayo.

«Luego de la marcha de mañana discutiremos si nos sumamos a la movilización del 20, pero seguramente estaremos en las calles porque compartimos con estas

organizaciones la necesidad de luchar en las calles y exigir un paro nacional general a las centrales obreras», indicó el dirigente.

El dirigente del Polo Obrero confirmó que extendió la invitación al MTE para que acompañen la movilización convocada para el jueves por las organizaciones piqueteras de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera, que consistió en una marcha desde del Obelisco a Plaza de Mayo.

En tanto, desde la CTA Autónoma aseguraron que la asamblea servirá para «discutir un piso de ingresos» y para «avanzar en el Salario Básico Universal para todos los trabajadores y trabajadores informales».

Gringo» Castro anticipó que insistirán por el Salario Básico Universal y pidió «organizar una marcha con piqueteros, CGT y CTA contra los aumentos especulativos»

Luego del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner en El Calafate, el secretario General de la UTEP, gremio conformado por las organizaciones sociales, manifestó que «se bajó el tono de la confrontación interna».

El dirigente planteó la necesidad de «construir espacios de discusión» y sostuvo que desde

la Unión de Trabajadores de la Economía Popular van a insistir con el Salario Básico Universal.

Esta semana, el gobierno comunicó que «no está la posibilidad en este momento de avanzar con un Salario Básico Universal». Al respecto, el secretario general de la UTEP Esteban «Gringo» Castro declaró: «Me parece que hay que charlarlo mejor».

Además, aseguró que van a empujar la medida y «también con el resto de los proyectos que tenemos en la ley marco de Tierra, Techo y Trabajo».

Consultado por la discusión interna respecto de «la tercerización de los planes sociales», Castro explicó que para su sector la asistencia estatal representa «un salario social complementario porque transformamos el plan social en trabajo hace muchos años».

El referente de la UTEP opinó que es necesario construir espacios de debate sobre «temas complejos, en los que todos tienen algo para decir» para evitar que la interna se desate en los medios de comunicación y destacó que esta semana «se bajó el tono de la confrontación que había tomado demasiado vuelo».

En ese sentido, desdramatizó la falta de acuerdos al interior del Frente de Todos: «Las tensiones con los trabajadores existieron

hasta con Perón. No hay que tener temor».

Por último, pidió coordinar acciones entre los diferentes sectores para marcar el descontento con la situación inflacionaria: «Hay que organizar una marcha con piqueteros, CGT y CTA contra los aumentos especulativos».

La CTA Autónoma le responde a Cerruti con una convocatoria a asambleas en los barrios y en los espacios de trabajo para discutir el Salario Básico Universal

En los últimos días varios sectores se hicieron eco del reiterado pedido que tanto la CTA Autónoma como otras organizaciones del campo popular vienen exigiendo para garantizar que miles de personas puedan salir de la indigencia y de la pobreza a través de un Salario Básico universal.

Sin embargo, las recientes afirmaciones de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti explicando que “no cierran los números” para avanzar en estas iniciativas y la falta de medidas concretas **intentan aplacar cualquier iniciativa para recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores.**

Mientras tanto no cesa la fuga de capital, el enriquecimiento permanente del sector financiero y la remaración de precios, todas actividades especulativas que

repercuten a diario en los bolsillos de la clase trabajadora.

Persecución judicial a dirigentes cooperativistas en Misiones

La CTA Autónoma de Misiones denunció una maniobra que involucra al gobierno y la Justicia provinciales en el desplazamiento de la conducción de la Cooperativa Eléctrica de Oberá Limitada (CELO). De la misma participan socios de la propia entidad que, según la denuncia, buscan restituir el control de la prestadora energética al partido gobernante Frente Renovador para la Concordia Social.

Las maniobras se dan a desde Energía Misiones Sociedad Anónima (EMSA), una empresa mixta con capital mayoritario del Estado provincial cuyo control político está bajo el oficialismo y que recibe la energía de CAMMESA, la mayorista de energía eléctrica del país. EMSA es la encargada de brindarle la energía a CELO y a las demás cooperativas que operan en territorio misionero.

La situación comenzó con el congelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, lo que originó que la deuda de CELO con EMSA llegara a unos \$ 1.000 millones contando intereses a comienzos de este año.

Esa es la situación de la que se agarró EMSA para intimar a CELO al pago de una deuda de \$ 1.000 millones, de los cuales unos \$ 350 millones correspondían a capital y unos \$ 650 millones a intereses. La particularidad es que es la única de las nueve cooperativas energéticas de Misiones que se encuentran en esta situación. Al resto, que se encuentra en situación similar, le fueron condonados los intereses de sus deudas.

En lo que señalan como el comienzo de la ofensiva contra la dirigencia de la CELO, la presidenta de EMSA Virginia Kluka pidió a la Justicia el embargo de las cajas de recaudación de la cooperativa y dejó abierta la posibilidad de avanzar con el embargo de los bienes de los directivos. A fines de mayo la Justicia hizo lugar al pedido y ordenó el embargo en base a la deuda de los periodos 1 y 2 de 2022. Al mes siguiente, amplió los embargos.

La CELO manifestó voluntad de pagar la deuda, pero pidió una quita de los intereses, por señalarlos como usurarios. La negociación fracasó por falta de voluntad de EMSA de llegar a un acuerdo. En la misma llegó a participar el gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad. En una medida inédita, para principios de junio, EMSA tomó el control de las cajas de recaudadoras de la CELO en la sede central y otros tres puntos de cobro.

Inmediatamente, la ministra de Acción Cooperativa, Liliana Rodríguez, designó a la contadora Midoyi Kariyama como Fiscalizadora Administrativa y Financiera de la CELO, con lo cual intervino la administración de la cooperativa.

Pocos días después, una reunión de Consejo de Administración convocada de manera que se denuncia como irregular por consejeros y socios de la CELO decidió el desplazamiento de sus cargos del presidente y vicepresidente de la misma Pedro Helge Andersson y Jorge Gabriel Duarte sobre el planteo de que habían incurrido en administración irregular. Lo llamativo de la situación es que en el mismo acto fueron nombrados vocales.

Duarte es Secretario General de la CTA Autónoma y ATE provinciales. Esto puso luces de alerta en ambas organizaciones. La central emitió un comunicado en el que, además de poner en conocimiento la trama tras el desplazamiento de las autoridades de la cooperativa expresó que “el gobierno del Frente Renovador avanza peligrosamente en la persecución política de dirigentes sociales y políticos, que en sus ámbitos de actuación han sido coherentes con las defensas de los derechos de los sectores que representan. Es también un claro ataque contra ATE y CTA-A, de las cuales Jorge ‘Koki’ Duarte es el Secretario General y al frente

de las cuales tiene una actuación intachable.”

Además de energía eléctrica, desde que Andersson y Duarte llegaron a su conducción la CELO comenzó a brindar servicios de agua y saneamiento, telefonía, conexión a internet, distribución de gas envasado y sepelios. Hasta entonces, sus directivos eran parte del oficialismo y oficiaban de trampolín para la carrera política.

En el marco de la intervención de la cooperativa, Andersson y Duarte fueron denunciados penalmente y deberán presentarse a declaración indagatoria en el Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Posadas.

En el comunicado de la CTA Autónoma, se advierte que esta situación “no sólo afecta a quienes fueron denunciados, sino que pretende disciplinar a todos los dirigentes que aun hoy se mantienen críticos al Frente Renovador.”

Contra megaproyecto minero en Catamarca

Por Marianela Gamboa-Agencia Tierra Viva

El oeste de Catamarca sigue movilizado en rechazo al megaproyecto minero MARA, impulsado por el gobierno provincial y nacional. A pesar de las represiones y cárcel para assembleístas, se mantiene el acampe en Choya y las marchas de los sábados en la

plaza de Andalgalá. «No es no», reiteran vecinos y vecinas que priorizan el cuidado agua y la salud.

“¡Hay que subir al Aconquija y paralizar las máquinas!”, dice don Raúl Barrionuevo en la plaza principal de Andalgalá, en la caminata que se realiza los sábados en rechazo a la megaminería. Hace dos meses que la Asamblea Aguas Claras del distrito de Choya (en Andalgalá) sostiene un acampe a más de 3.000 metros de altura, cortando el paso a las máquinas y camionetas cargadas de combustible de la empresa MARA (Agua Rica-Alumbrera). El objetivo: evitar que siga con la exploración avanzada del proyecto minero que, denuncian, ya afecta la salud de todo un pueblo.

Esta lucha, como señalan integrantes de las asambleas El Algarrobo y Aguas Claras, tiene más de dos décadas. Se reactualiza y transforma constantemente, como lo hace el Estado y la empresa a manos de la empresa Yamana Gold, en sus intentos de avanzar con la explotación del yacimiento que aún no posee autorización y que ni siquiera presentó el informe de impacto ambiental.

Caminatas por la vida
Hace más de once años que se realiza una acción inigualable a

nivel latinoamericano y global: la «caminata por la vida», cada sábado desde la represión del 15 de febrero de 2010. Caminata que sigue sosteniendo como consiga que Agua Rica-MARA no tiene licencia social en Andalgá, que los pueblos no quieren megaminería.

En la previa de la Caminata 644 (del 4 de junio), vecinas y vecinos de Choya invitaron a la asamblea —su espacio de encuentro— para poder registrar sus voces y comunicar algunas de sus denuncias, entre ellas la violación de derechos humanos y derechos constitucionales a vivir en un ambiente sano. También hablaron del respeto a la autodeterminación de los pueblos, y del resonante «no es no», que los gobiernos nacional y provincial desoyen.

Al llegar a Aguas Claras lo primero que se reconoce es la callecita donde, en medio de la noche y la represión del 3 de mayo, más de siete efectivos varones de la policía de Catamarca se llevaban detenida a Karina Orquera, que se defendió gritando “tengo un escudo más fuerte que el de ustedes”.

Los grupos de choque liberaban el camino a las camionetas mineras hiriendo con palos y balas a más de 20 vecinos (jóvenes, adultos y ancianos), de los cuales

unos pocos se animaron a llegar al hospital para recibir la atención médica. Esos vecinos y vecinas son los mismos que, posteriormente, recibieron citaciones de la Fiscalía.

Mientras se comparte la comida, vecinos y vecinas de distintas generaciones narran cómo viven la avanzada minera, la criminalización y persecución judicial. Algunos integrantes de mayor edad no se cansan de decir que el tiempo es ahora, que van a luchar hasta las últimas consecuencias. Se escucha: “Como los árboles que mueren de pie, nosotros jamás moriremos de rodillas”.

Resistir y no rendirse es un cotidiano. Es parte de la vida del pueblo choyano que sabe muy bien que MARA-Agua Rica es una «sentencia de muerte» para las comunidades. Orgullosos comparten que allí arriba, en el campamento del “globo”, la presencia de cuerpos es transgeneracional. “Hay chicos desde los 13 años que están en el cerro defendiendo nuestra agua”, explican.

Una joven relata que todavía hay vecinos heridos por las balas de goma, que tienen infecciones y dolores en las zonas golpeadas. Otras vecinas señalan que no denuncian porque, de hacerlo, luego las persiguen.

Así suceden las cosas en Andalgá. Las y los vecinos

afirman que la complicidad Estado-empresas opera también desde lugares pequeños y comunes: trabajadores mineros directos o tercerizados que se prestan a realizar falsas denuncias, empleados estatales de un hospital que no atienden a los heridos y detenidos por ser “antimineros”, e incluso filtran sus datos a la Policía y Fiscalía para luego inculparlos de algún delito mientras ejercen su derecho a la protesta. Desde la Asamblea reiteran que exigen un ambiente sano, aguas claras para sus hijos e hijas, para los animales, para la tierra y para la vida de todo el pueblo choyano, para todos los pueblos que el Aconquija abraza.

En el pueblo de Choya viven unas 600 personas, de las cuales unas cinco o seis familias “no están en contra de la minera”, según relatan los vecinos de Aguas Claras. Choya se encuentra a doce kilómetros del centro de Andalgalá, sobre la ruta 47.

Por el futuro de los niños y niñas: el agua no se toca
La asamblea se reúne bajo históricos árboles y en un mástil flamea la bandera argentina. Relatan sobre las niñas y niños enfermos en marzo pasado, muchos con diarrea, vómitos y problemas estomacales por beber el agua que bajaba sucia del cerro, afectada por los derrumbes que provocó MARA.

En el hospital fueron atendidos pero no les quisieron dar certificados ni explicar por qué tenían esos síntomas. Sin embargo, la escuela 217 “Fragata Libertad” suspendió las clases “por la falta de agua” (los filtros que “potabilizan” el agua se taparon por la cantidad de sedimento).

La denuncia llegó al Concejo Deliberante de Andalgalá, que pidió informes al gobierno provincial, responsable de autorizar a MARA para operar en las márgenes del río Choya. Sin embargo, las respuestas son las de siempre: hablan de monitoreos y controles para nada objetivos, realizados por la empresa o por el mismo Ministerio de Minería que —es bien sabido en Catamarca—, tiene sus intereses puestos en que el proyecto minero avance.

La contaminación del agua fue uno de los motivos que impulsó a assembleístas a recorrer las vertientes. Los videos muestran la presencia de material sedimentario blanquecino y algunas piedras como la piritita (con un alto contenido de azufre y hierro) en las vertientes de agua que bajan hacia el pueblo, provenientes de las remociones de las cornisas del cerro con maquinaria pesada.

Esta acción implica un enorme desmonte y produce un talud que cae por las quebradas. Es decir: las acciones del proyecto MARA ya afecta al destruir zonas del cerro por donde antes —relatan los vecinos— se podía andar a caballo para buscar la hacienda, y actualmente es imposible recorrer. Se afecta de forma contundente espacios claves para la retención del elemento por el cual lucha Andalgalá: el agua.

Las aguas no conocen de fronteras estatales ni empresariales. El río Choya y el río Andalgalá son vecinos que comparten una divisoria de aguas común, asociada a la cuenca del río Minas, la misma que la propia empresa en sus informes reconoce será afectada. Desde la Asamblea resumen la situación con una vivencia concreta del lugar: “Cada día más gente de Andalgalá toma agua de bidón. Antes la gente de Choya tomaba agua de la acequia, era agua pura”.

Arrancó el primer taller de RCP en la ex Clínica San Andrés de Tres de Febrero

El 1° de julio, a 18 meses de haberse fugado la patronal heredera y usurera Surachi, va a quedar en la historia del distrito y de las y los trabajadores de la Salud. Un mojón más que marca

el poderío de la clase trabajadora y que habla de su esencialidad. “No fue fácil, pero acá estamos. Abriendo las puertas a la comunidad”, dijeron los presentadores y referentes de las y los trabajadores de “la coope” como cariñosamente le dicen.

Fuentes: Redacción Canal Abierto, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Página 12, La Izquierda Diario, Ansol, Red Eco Alternativo.

16 de julio de 2022

Trabajadoras de La Terre y de Coreme: «Se puede trabajar sin patrones»

En el taller de «Trabajo Sin Patrón y Fábricas Recuperadas», que se realizó en el marco del 35° Encuentro de Mujeres realizado en la provincia de San Luis, estuvieron presentes trabajadoras de la Cooperativa La Terre y de la Cooperativa Coreme.

Las trabajadoras de Coreme llevan años poniendo el cuerpo recuperando y reciclando desde los basurales, donde fueron perseguidas hasta que realizaron la organización que las llevó a tener su espacio, su galpón, recibir premios y conformarse no solo como cooperativa, sino como familia. Contaron su historia y la situación que enfrentan.

Las y los trabajadores de La Terre volvieron a producir en la fábrica recuperando así sus puestos de trabajo, luego que en el 2014 la Ex Industria Matas quebrara quedando todo abandonado y desguazado. Hoy continúan con fábrica de deshidratados, incluso sus productos son de interés legislativo.

También son un ejemplo de solidaridad, donaron más de 50.000 raciones de comida preelaborada con la campaña Racioná en distintos lugares de la provincia a comedores populares en medio de la pandemia y en una situación nacional y provincial, donde creció la pobreza y el desempleo.

Durante la tarde del jueves 22 de setiembre trabajadoras recuperadoras de COREME recorrieron los cursos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y se encontraron con un importante apoyo de cientos que reconocen y se solidarizan con su lucha

La cooperativa COREME, compuesta por más de 45 familias, realiza el trabajo de tratamiento y recuperación de los residuos sólidos de distintos barrios de la Capital mendocina y de todo el campus de la UNCuyo, son quienes tratan los materiales secos del programa «UNCuyo Separa los residuos». Las y los trabajadores garantizan que esos materiales no terminen enterrados y se reutilicen; por todo ese trabajo es que docentes y estudiantes apoyan la pelea que está dando COREME para seguir funcionando como lo viene haciendo hace 7 años.

Pasados más de 21 días sin poder trabajar debido a la injusta clausura de su galpón por parte del Municipio y la policía de Daniel Orozco, las trabajadoras de COREME se mantienen en pie luchando por la reapertura de la planta para recuperar sus puestos de trabajo, creando lazos de solidaridad en la comunidad, campañas en redes, eventos como el festejo de su aniversario y visitando la Universidad Nacional de Cuyo.

Las trabajadoras visitaron la FCPyS acercando los productos que realizan con material reciclado en el taller de mujeres «laboratorio de juguetes» que es impulsado por las trabajadoras de la planta llevando a cabo un rol solidario para merenderos y guarderías, además de tenerlos en venta para el sustento de sus familias. En este momento es su medio de recaudación mientras no pueden poner a trabajar el galpón, también pasaron por las aulas compartiendo su historia y buscando solidaridad.

En los cursos el apoyo fue pleno, los y las jóvenes como también docentes aportaron al fondo de lucha de la cooperativa y se sacaron fotos con la onsigna quieresequitrabajando. Sin dudas, la unión de trabajadores y estudiantes es fundamental para que en COREME sepan que no

están solos. En Mendoza son miles quienes, preocupados por la contaminación y los desastres ambientales, van a defender el trabajo que han realizado durante tantos años. También el apoyo fue enorme debido a la gravedad de que 45 familias trabajadoras se hayan quedado sin sus ingresos diarios por una decisión mezquina y oportunista de parte de quienes manejan el municipio. Tras 7 años funcionando, pasaron distintas gestiones gubernamentales y nadie les regaló nada, sino que los y las trabajadoras construyeron COREME desde abajo, por lo que los ataques de Orozco son inaceptables.

Las empresas recuperadas lanzan su moneda: comprar y vender con soberanía

Mariana Di Mauro

Fuentes: Revista Resistencias
«La cooperación supera a la competencia» es el lema que se imprime en la Moneda de Intercambio Argentina (MIA), lanzada por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER).

Con una gran feria de productos de todo tipo, el pasado sábado (1/10), en el Mercado de Flores, se hizo la presentación oficial de la MIA, una moneda social complementaria pensada para promover una alternativa para el intercambio de bienes y servicios, fortaleciendo y consolidando la autonomía y el trabajo de las empresas recuperadas, PyMEs y cooperativas del sector popular.

Luego de varios meses de prueba dentro de las cooperativas y empresas recuperadas, finalmente se llevó a cabo la presentación oficial. «La estamos presentando a la comunidad para demostrar, primero, los productos que fabricamos; que otra economía es posible; y mostrar, también, que podemos tener una moneda propia que circule entre la Economía popular, las empresas recuperadas y los emprendedores, todos los que en realidad hoy están generando la fluidez de dinero en el país», nos cuenta Edith Garay, de la tornillera recuperada La Matanza e integrante del MNER, desde las puertas del Mercado.

En cuanto a la propuesta y al objetivo de la MIA, Bruno Di Mauro, presidente del laboratorio recuperado Farmacoop y miembro del MNER, nos explica: «Tiene varias funciones, por un lado, fomenta el consumo de los

trabajadores y las trabajadoras de productos de la Economía popular. Se puede utilizar en los mercados populares que hay en las diferentes recuperadas en muchos barrios, como así también en la comercializadora a través de la página monedamia.com.ar. Por otro lado, permite el intercambio directamente entre empresas, por ahora, cooperativas, que a través de RECOOP pueden hacer intercambio de productos, materias primas e insumos, utilizando la moneda MIA».

MIA: de Suiza a la Argentina

En cuanto al surgimiento de la MIA, Edith cuenta: «Como hoy estamos en un gobierno y en una etapa en la que está faltando demasiado la liquidez de billetes-pesos, surgió esta idea, que no es una idea nueva, nosotros la tomamos de Suiza». La referencia es al WIR («nosotros» en alemán), una moneda suiza creada 1934, luego de la crisis del 29, con el objetivo de que pequeñas empresas y productores puedan intercambiar sus productos sin estar atados a la moneda oficial (Franco suizo), y así paliar las consecuencias económicas de la recesión. Hoy, el WIR cuenta con más de 50.000 miembros (17% del total de los negocios de Suiza) y el intercambio en

WIR llega a ser el 1 o 2% del PBI suizo.

Sobre esa base, se pensó la MIA, adaptada al contexto socio-económico argentino. Al valor de 1 MIA = \$1 y con valores de 50, 100, 500 y 1000, los billetes MIA, de variados colores, llevan impresas fotos de trabajadores y trabajadoras, así como el sello del MNER: Ocupar, Resistir, Producir. «Hoy está en formato papel solamente. La idea es ver si para fin de año podemos hacer la moneda digital y que la gente pueda comprar en formato digital». Además de la moneda, se presentó la web oficial de la MIA, «Eso también es una prueba piloto para ver cómo es el intercambio abriéndonos a la comunidad y cómo recepciona nuestro pueblo este tipo de intercambio», nos cuenta la trabajadora de La Matanza.

En cuanto al alcance de la moneda, hoy circula entre las empresas recuperadas y cooperativas que forman parte de la comercializadora RECOOP, pero se prevé ampliarlo. Para esto, desde el MNER, sostienen que es central generar confianza en los productos que venden: «Sabemos que los productos alimenticios de las empresas recuperadas no llegan a las góndolas, entonces hacemos este lanzamiento y este tipo de feria que vamos a seguir

replicando en diferentes puntos del país», adelanta la trabajadora.

En la misma línea, Bruno dice que «la idea es poder ir generando confianza en esta moneda para poder ampliarla a los circuitos de proveedores de estas empresas, que muchas veces necesitan insumos o materias primas que nosotros fabricamos, entonces podrían también hacer girar la rueda y utilizarla».

La cooperación como alternativa

«Nosotros tenemos como eslogan de la moneda MIA y del Movimiento que la cooperación supera la competencia, y sobre ese eslogan venimos trabajando», cuenta Edith, enmarcando la iniciativa. Las empresas recuperadas de todo el país trabajan desde hace años para mostrar que una economía basada en la autogestión y la solidaridad es posible, y hoy lo plasman en una nueva moneda.

«Sabemos que no hay fluidez de pesos, de efectivo, y con esto tratamos de dar alivio a los compañeros de las recuperadas, y podemos conseguir, a precio mayorista y más económicos, productos de primera necesidad y de calidad», reflexiona y agrega: «La moneda la respaldamos con nuestro laburo, con nuestra producción».

Sobre esto mismo, Bruno agrega que la idea fundamental de la

MIA es «tener una herramienta soberana para poder contar con una moneda de emisión propia», y cierra, «para que, en momentos donde haga falta liquidez circulante, tengamos la suficiente soberanía para emitir una moneda propia y poder intercambiar bienes y servicios a través de una moneda que no esté limitada en su emisión por los designios de lo que dicta la política económica que sabemos que mucha veces viene digitada desde los mandatos del FMI».

Frente a la avanzada del capitalismo financiero y cada vez más concentrado, los y las trabajadoras de la Economía popular se siguen organizando para construir un camino alternativo, pensado por y para los más humildes, que reemplace la competencia, la especulación y a las patronales por la cooperación, la autonomía y la autogestión.

Tres ejemplos de empresas recuperadas: madygraf, la litoraleña y textiles pigue

¡Viva MadyGraf bajo gestión obrera!

Mario Hernandez

Un 11 de agosto del 2014, los capitales buitres se fugaban del país. Los gerentes de Donnelley se iban y querían dejar 400 familias en la calle. Sobre la puerta de la gráfica se recibía la peor noticia, un cartel con un 0800: la fábrica quebró llamen a este número. Un 12 de agosto de 2014, el Ministerio dicta la conciliación. La patronal no la cumple. Los trabajadores sí: abren las puertas y comienza una nueva gesta.

Poco tiempo después, arrancan las rotativas. Luego las cosedoras se ponen nuevamente en marcha. Las aguerridas mujeres y sus hijos organizan la solidaridad activa con la gestión obrera.

Luego vendrán las marchas; la pelea por la expropiación; los festivales, campeonatos, la juegoteca y la Comisión de mujeres; la unidad con Zanón y cada lucha que surgiera en el país; los cuadernos

para donar a las escuelas y la solidaridad con las familias sin techo; los encuentros obreros; las asambleas y cientos de historias que ya son parte de las páginas más combativas de la clase trabajadora.

Los pasillos, las escaleras y todos los espacios de Madygraf están atravesados por historias de charlas, lucha, y resistencia. Su historia es pasado, lleva en sí los hilos de continuidad de una generación de luchadoras y luchadores que decidieron hacerle frente a una patronal yanqui y recuperar la fábrica en defensa de sus puestos de trabajo. Es presente por el enorme ejemplo de organización que vienen dando los trabajadores y trabajadoras frente al contexto económico de ajuste y tarifazo, brindando su producción hacia escuelas, reconvirtiéndola en la pandemia, y apoyando las luchas de otros sectores. Y también es una mirada hacia adelante mostrando en pequeño las respuestas que las trabajadoras y trabajadores pueden dar a las necesidades sociales cuando toman en sus manos y deciden qué y cómo producir.

A cargo de Los Decoradores, el sábado 10 de septiembre presentarán su Kermesse Redonda, el ritual ricotero que llegará una vez más a Garín, a la fábrica recuperada Madygraf para que explote el

festejo en sus 8 años de gestión obrera.

El Club Obrero de Madygraf, vuelve a funcionar como un espacio que reúne a trabajadorxs para disfrutar del tiempo libre y poder organizarse junto a otrxs trabajadorxs.

A propósito de un nuevo año para Madygraf, las trabajadoras y trabajadores organizaron el pasado 13/08 un torneo a modo de celebración, y también como parte de la campaña por la expropiación definitiva de Donnelley para Madygraf que vienen desarrollando.

Frente a la pandemia del coronavirus, en 2020 en la fábrica montaron un laboratorio en el que comenzaron a producir sanitizante de alcohol y mascarillas para protegerse toda la cara. Frente a la grave situación que se vivía por el coronavirus, los laburantes de la empresa gráfica recuperada, dieron un ejemplo del rol que pueden jugar los trabajadores.

Empresas recuperadas en Argentina en tiempos de Uber

Facundo Ortiz Núñez

Todo empieza con un vaciamiento. Tras una debacle patronal, el propietario decide llevarse todo lo que puede, empezando a transferir fondos de manera irregular e incurriendo en estafa. Deja de liquidar los impuestos, de pagar los insumos a proveedores, deja de pagar a sus trabajadores. Aldo todavía recuerda ese momento que, en el caso de La Litoraleña, se dio en 2015: «Los primeros días, él no nos dijo nada. El subdelegado nos decía: 'Mañana se deposita. Mañana, mañana, mañana'. Y en ese tiempo, que nos pagaban 40.000 pesos, te depositaba 2.000. ¿Qué hacés con 2.000 pesos? Nos venía envolviendo, envolviendo. Él estaba bien, los que sufríamos éramos nosotros. Y teníamos familias. Fue muy sufrido».

La fábrica de tapas de empanadas y pascualinas en la que trabajaba desde hacía más de dos décadas se dirigía a la quiebra. Para Aldo, y para sus casi cien compañeros, la resignación suponía caer en el desempleo, perder los beneficios por antigüedad, y para los más

veteranos, ver imposibilitada su jubilación. Suponía igualmente una derrota más amplia: a la pérdida de los puestos de trabajo se le sumarían la pérdida de la experiencia acumulada, del saber hacer que los trabajadores habían desarrollado con los años, del rol que la fábrica ocupaba en el vecindario. Perdían ellos, sus familias, los vecinos. Perdían todos. «Hasta que decidimos tomarnos la empresa. Fue duro. Pero no quedaba otra».

El 27 de octubre de 2015, los empleados de esta fábrica del barrio porteño de Chacarita, reunidos en asamblea, tomaron una decisión: ocupar las instalaciones y parar las actividades después de meses de salario caído. Para entonces, la empresa había entrado en concurso de acreedores. El dueño había llegado a emitir 800 cheques sin fondo, la deuda acumulada superaba hasta diez veces el patrimonio de la empresa: le debía plata a todo el mundo. Y cuando supo que los empleados habían ocupado el lugar, puso fin a sus promesas vacías y mandó telegramas a 29 de ellos para avisarles que estaban despedidos. Pero su Sociedad Anónima estaba desapareciendo, y, en términos efectivos, ya no estaba en sus manos. Ante el abandono y la incapacidad de la patronal, sus trabajadores

la estaban convirtiendo en una empresa recuperada.

Ocupar

«Hay tres momentos que son comunes a la mayoría de las empresas recuperadas: el de la ocupación, el de la resistencia o la organización de esa ocupación, que significa abrir las puertas de la fábrica a la comunidad, recibir la solidaridad de otras experiencias, repensarse, buscar financiamiento, fondos de huelga para poder sostener esa ocupación, esa resistencia. Y después hay un tercer momento, que es la producción. Y esa decisión puede durar menos o más, puede ser más traumática o menos traumática. En este caso fue muy rápido», explica Fabián Pierucci, hoy el presidente de la Cooperativa de Trabajo La Litoraleña, que en la actualidad da empleo a 48 personas.

Él no era parte de la empresa antes de que la ocuparan, sino que se incorporó cuando ya estaba en marcha la formación de la cooperativa. Llegó como representante de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) que surgió en 2006 a partir de distintas agrupaciones de empresas recuperadas que proliferaron a comienzos de la década. Su objetivo en La Litoraleña era colaborar

en las tareas de capacitación, transferencia tecnológica y gestión. Y también algo más: con el Grupo Alavío, estaba rodando una serie llamada «Redes de Trabajo y la Autogestión». Filmó todo el proceso de ocupación de La Litoraleña y lo que vino después. Y nunca más se marchó.

La situación de partida era crítica. La palabra «cooperativa» hacía saltar las alarmas. Los proveedores no querían vender. Los clientes no querían comprar. El sindicato pastelero había dicho que los acompañaría en la lucha, pero, cuando formaron la cooperativa, se fueron también: sin un nuevo patrón al mando, perdían su cuota mensual. Los administrativos, gerentes, capataces, los vendedores, gran parte de los choferes, todos aquellos que estaban más cerca de la patronal siguieron el mismo camino. De los 115 empleados originales solo quedaron 70, los trabajadores de planta. Se había esfumado la jerarquía al completo, y con ella todo lo que sabían hacer. Los que mantenían la ocupación solo tenían experiencia de fabricación, ninguna de gestión.

El tejido que les permitiera resistir debía ser otro: los vecinos, que los ayudaron y apoyaron desde el primer momento. Otras cooperativas en situación similar,

que los bancaron a lo largo de la ocupación trayendo alimentos. Las organizaciones sociales, que colaboraron en los momentos de movilización para hacer frente a las amenazas de desalojo, con la policía presente en la puerta todos los días.

«Empezamos a pensar como en una lógica inversa», cuenta Pierucci. «A ver qué entraba, cuántas bolsas de harina, qué producción se hacía por día, qué cosas constituían el costo. Hay como que ir armando un rompecabezas».

Uno se encargaba de recibir la harina, así que sabía cuántas bolsas solían entrar. Otro se encargaba de ser operario, así que sabía cuántas porciones de tapitas y empanadas se hacían al día. Rápidamente, los integrantes de la fábrica tuvieron que aprender a asumir otras responsabilidades, a negociar, pelear precios, a hacerse cargo de la administración del día a día de la empresa con el fin de mantener su fuente de trabajo.

«Estuvimos solamente una semana sin producir. Había en la cámara algo de producto el día del cierre. Y tiene un vencimiento corto. Treinta y pico de días, si no se echa a perder. Eso no lo íbamos a tirar, así que se empezó a vender. Empezamos a recuperar clientes, a explicarles la situación...». En apenas unos días, el 6 de noviembre,

en medio de la ocupación, la producción volvía a arrancar.

Como siguiente paso, pidieron al juzgado que acelerara la quiebra y armaron la cooperativa, que se formó oficialmente en enero de 2016. Pero el mismo juzgado que verbalmente se había mostrado favorable al plan, cuando llegó el momento de decretar la quiebra, y frente al plan de negocio que le propusieron los trabajadores, les negó el permiso de explotación argumentando que la ocupación era ilegal. Comenzaba así un largo proceso judicial que sigue abierto hasta la fecha.

«Sale el (último) fallo en contra en plena pandemia, fin del 2020, que nos tenemos que ir de la fábrica. Otra vez. Y volvimos a apelar. Creo que vamos a ganar la apelación de nuevo, pero es como la historia sin fin. Hace seis años que estamos acá. Hoy estamos legalmente, está la fábrica habilitada como cooperativa. La ocupación, digamos, es un símbolo. Pero apelamos un fallo de desalojo, así que estamos con mucha inestabilidad».

Resistir

La lucha contra el cierre de empresas y por la recuperación de fábricas y otras unidades productivas tiende a asociarse a la crisis iniciada en 2001. Sin embargo,

aunque de manera menos visible, el proceso había comenzado al menos una década atrás, en pleno proceso de desindustrialización, y creció durante la década neoliberal, hasta llegar a un centenar durante el estallido social. Según los estudios que ha ido realizando el programa de Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en Argentina existen hoy día más de 400 empresas recuperadas, con alrededor de 15.000 trabajadores y trabajadoras. La realidad es que hoy, 20 años después, hay más empresas recuperadas que nunca.

Según Andrés Ruggeri, antropólogo social y coordinador de este programa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA desde 2002, esto indica que, para los trabajadores en situaciones de quiebra, la herramienta de la recuperación «tiene mucha proyección y se sigue usando. Sigue habiendo empresas recuperadas ahora, más de 50 de estas empresas recuperadas de las 400 son de los últimos dos o tres años. Y esto lo que indica es que cuando cierra una fábrica, una empresa, no necesariamente se va a convertir en una empresa recuperada, pero la opción de recuperarla está presente, aparece en la discusión».

En esto contribuyen varios factores. Las experiencias pasadas

han permitido ir reforzando redes sociales de apoyo que hoy ofrecen recursos a las nuevas empresas recuperadas, asesoramiento, abogados para el proceso judicial, experiencia acerca de lo que vaya o pueda suceder a continuación. «Cada experiencia evita, por asistencia de las redes, tener que empezar todo de cero, tener que descubrir el proceso como si nunca hubiera existido».

Al mismo tiempo, la relación de este sector con el Estado resulta insoslayable. No es lo mismo tener enfrente un Gobierno que no interviene, que uno que se opone o uno que apoya. Hoy la situación se revela menos conflictiva que en otros momentos, como durante el Gobierno de Mauricio Macri. Se puso en marcha el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y hay referentes históricos de las recuperadas que ocupan puestos en instituciones, lo que facilita el acceso a financiamiento.

«Pero las cuestiones fundamentales, que son cambios de legislación, cambios en lo estructural de la forma en que el Estado trata a las empresas recuperadas, no se ha modificado. Sigue habiendo precariedad, siguen sin tocarse las cuestiones que tienen que ver con la seguridad social, con los derechos laborales. Con el ver que hay un

sujeto trabajador diferente al trabajador asalariado típico, en relación de dependencia, y que tampoco es un empresario ni tampoco un cuentapropista. La empresa recuperada es una entidad distinta, un tipo de organización diferente. Ese tipo de trabajador, que es colectivo, sigue sin ser reconocido».

En 2011, la reforma a la Ley de Quiebras dio prioridad a los trabajadores, en el papel, para recuperar una empresa en procesos concursales si se constituían como cooperativa. Pero la puesta en práctica dista mucho de cumplir la teoría. En la mayoría de los casos, la formación de la cooperativa no es más que el primer paso hacia un laberinto judicial. Los tribunales suelen fallar en contra de los trabajadores, obligándolos a apelar una y otra vez, a vivir bajo continuas amenazas de desalojo y otorgando a lo sumo prórrogas temporales.

En ocasiones, como sucedió en La Litoraleña, los anteriores dueños dejan grandes deudas que los trabajadores deben asumir y resolver. En su caso, lograron comprar la quiebra a partir de los créditos que quedaron de salario caído e indemnizaciones. Pero en el proceso debieron incluso hacer frente a un intento de remate del inmueble de las instalaciones, dictada arbitrariamente por un

juzgado. La actual legislación sigue teniendo las suficientes lagunas como para estar abierta a la interpretación de un poder judicial que opera bajo lógicas de clase y con una visión patronal. De los jueces depende que se acepten o no los planes que propongan los trabajadores.

Este cruce de factores provoca una situación paradójica para las recuperadas. Por un lado, el diálogo con el Estado lleva a que el Ministerio de Desarrollo Productivo esté a punto de ejecutar el programa de financiamiento REDECO, el primero que se realiza con la finalidad específica de apoyar a las empresas recuperadas conformadas como cooperativas. Hasta 1.200 millones de pesos se invertirán en proyectos para compra de maquinarias y otras operaciones. Pero debido a la falta de compromiso con el reconocimiento del modelo autogestionado en sí, no sería imposible que, una vez se reciba un determinado aporte, los tribunales dicten al día siguiente una orden de desalojo.

La falta de reconocimiento institucional coloca a las empresas recuperadas en una zona gris de la economía. Deben pagar impuestos, pero no pueden acceder a créditos. Tampoco a Aseguradoras de riesgo de trabajo, sino que han de contratar seguros por accidente.

Deben aportar a la obra social, pero la jubilación que reciben es mínima. En su camino por el reconocimiento legal, han de cumplir con toda clase de requisitos administrativos —obtener permisos de explotación, municipales, registrar la fábrica, contratar seguros—, pero tienden a ser en buena medida invisibles para el poder hasta que no se produce una crisis.

Esta situación se agravó durante la pandemia y el aislamiento social preventivo obligatorio, que llevó incluso al cierre de casos emblemáticos del mundo de las recuperadas, como sucedió con el Hotel Bauen. Durante la pandemia, el Estado implementó dos herramientas para sostener los empleos. La Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP), que financiaba la mitad de los salarios de los trabajadores de empresas en relación de dependencia, y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a los trabajadores no registrados, los cuentapropistas o integrantes de la Economía popular. Pero los trabajadores de cooperativas de trabajo autogestionadas no eran ni una cosa ni otra. Algunas lograron entrar dentro de la categoría de los sectores esenciales para mantener sus actividades. El resto, hasta que llegaron parches de emergencia, no

podieron beneficiarse de ninguna de las dos políticas.

«¿Y por qué se quedaron afuera? Porque nadie las veía. (...) Fue muy sintomático de hasta qué punto la autogestión es invisible en ciertos sectores del poder, incluso, ‘bienintencionados’. A lo sumo, los ven como un problema. ‘Bueno, qué hacemos con estos tipos’. Eso se lo pueden llegar a preguntar. Lo que no se plantean es: ‘Esto es una alternativa. Esto es una forma económica diferente y nos interesa que se potencie’. Eso de ninguna manera».

En la raíz parece hallarse la falta de voluntad política. Pero hasta la voluntad política necesita una fuerza social que la impulse. Las grandes movilizaciones a comienzos de los 2000 en apoyo de las recuperadas y de lo que representaban en aquel momento, que lograron en ocasiones incluso que se votaran leyes de expropiación, hoy parecen haber quedado atrás. «(En 2001) eran parte de todo un gran proceso de movilización social, de cuestionamiento al sistema político, económico, y las empresas recuperadas eran una caja de resonancia de muchas cosas, mucho más de lo que representaban en números económicos, en la cantidad de gente implicada. Pero ahora están reducidas a lo que son. No les alcanza esa fuerza

como para, por ejemplo, provocar que en el Congreso Nacional se vote una ley de trabajo autogestionado. Se ha convertido en un movimiento que, si bien es más grande que antes, es más débil simbólica y políticamente, porque ahora tiene menos capacidad de impactar en las políticas públicas».

Producir

Hace 20 años, el fenómeno de las empresas recuperadas llegó a ser percibido por el campo popular como la punta de lanza de un proyecto impugnador que aspiraba a cambiar estructuralmente la sociedad, convirtiéndose en un mito para las luchas anticapitalistas dentro y fuera de las fronteras. Para el poder, ya sea con una mirada más o menos benigna, han sido interpretadas a lo sumo como una fórmula de emergencia y contención para sectores vulnerables. Pero a dos décadas de aquel momento, seguir entendiendo la autogestión como una isla al margen de la sociedad en la que transita les hace un flaco favor a las posibilidades reales de desarrollo de este modelo alternativo y a sus trabajadores.

Lo que fundamenta y permite el mantenimiento de una empresa autogestionada sigue siendo su capacidad de salvaguardar las fuentes de trabajo, producir y así

asegurarles ingresos a sus trabajadores. Un pequeño emprendimiento puede quizá sostenerse en un mercado paralelo solidario, pero no hay forma de que una fábrica metalúrgica pueda asegurar decenas o centenares de salarios dignos a espaldas del mundo, menos aún ante crisis sistémicas. Se hace necesario realizar un balance crítico de estas experiencias si lo que se quiere es rearmar un proyecto desde abajo que pueda disputar el modelo económico, la gestión del trabajo y la distribución de la riqueza.

No cabe duda de que las experiencias de autogestión se ven obligadas a vivir remando contra grandes obstáculos. Pero hoy en día, la inestabilidad parece el pan de cada día de los trabajadores de cualquier rubro. Numerosas empresas recuperadas han sobrevivido hasta ahora a cambios de gobierno, aumentos inflacionarios, tarifazos e incluso a una pandemia. Y lo han hecho bajo la dirección de sus propios trabajadores, saltándose intermediarios, manteniendo un funcionamiento interno distinto a las lógicas capitalistas, apostando por un modelo más democrático y horizontal, prescindiendo de ayuda y recursos unas a otras. Todo ello, mientras navegan en medio de un mercado agresivo

que de solidario tiene más bien poco.

Para Andrés Ruggeri, las ventajas concretas de las recuperadas se mantienen, y seguramente expliquen por qué este modelo sigue creciendo: «Muchas han logrado reconstruir esos empleos y su actividad económica, y lo más importante no es que lo hayan logrado, sino cómo lo lograron. La cuestión de la autogestión, en muchos casos, es más cualitativa que cuantitativa. Es un trabajo con menos explotación. Implica también ganar mejores condiciones de trabajo, más libertad, más solidaridad, aunque parezca una palabra demasiado repetida, pero que es real, y en ese sentido, cualitativamente, permite dar otras respuestas. Una empresa autogestionada puede permitirse pensar cosas que a la empresa capitalista no le interesan, que tienen que ver no solamente con el bienestar de sus trabajadores, sino con el bienestar social general. Por ejemplo, plantearse que determinado producto no es bueno para el medio ambiente y buscar una solución. La empresa capitalista va a hacer los números y dice: 'Si un producto más ecológico nos da más ganancia, vamos por ahí. Pero si perdemos plata, no nos interesa, que se hundan».

En una época en la que vivimos una arremetida de renovadas formas de explotación al alero de las nuevas tecnologías, camufladas bajo el eslogan del «emprendimiento personal», que solo fomentan la disgregación, el individualismo y la competitividad entre trabajadores en un contexto de creciente precariedad, las empresas recuperadas abren la puerta también a volver a tejer lazos entre trabajadores en un momento en que parecen haberse perdido.

En la Cooperativa de Trabajo La Litoraleña se asentó desde el inicio la asamblea como órgano de decisión. Tienen un Consejo de administración determinado por la Ley de Cooperativas que, en este caso, se corresponde con la dirección operativa de la fábrica. Sus reuniones responden a un órgano de planificación ampliado: participan los responsables de cada uno de los sectores del organigrama, y cualquier trabajador de la fábrica puede asistir. Todos los cargos, desde los miembros del Consejo a los responsables de cada sector, se van rotando. Desde el primer al último integrante de la fábrica reciben el mismo salario, independientemente de sus responsabilidades; otra decisión que partió de aquella primera asamblea que

llevó a la ocupación y al camino de la autogestión.

«Acá no hay plusvalía», subraya Fabián Pierucci, que pronto completará sus tres años como presidente de la cooperativa, cediendo paso a un nuevo Consejo. «Porque todos tenemos el mismo ingreso. No hay forma de que haya plusvalía en esta fábrica».

En paralelo, la cooperativa mantiene una política de «puertas abiertas». Intenta mantener un estrecho lazo con el barrio, realizando trabajo comunitario, apoyando a otras cooperativas en resistencia y recibiendo regularmente a escuelas para compartir la experiencia entre los más chicos. En mayor o menor medida, todas las empresas recuperadas intentan devolverle algo a la comunidad que las apoyó y alimentar la red que les permitió levantar su proyecto.

«No hay que idealizar estas experiencias. Tampoco infravalorarlas. Pero hay que estar todos los días», añade.

El trabajo prosigue tras los muros de la fábrica de tapas y empanadas de Chacarita. Ataviados con sus redes para el cabello y uniformes blancos, los compañeros de la fábrica preparan la mezcla de harina y margarina, añaden las capas de hojaldre, se lamina, se reduce el espesor, se corta. La

materia prima recorre su ciclo a través de las máquinas, siendo transportada y tratada de una cinta a otra por los trabajadores antes de encarar el envasado, hasta que el producto queda listo para el embalado, atraviesa el montacargas y las tapas ingresan al sector de frío para su posterior distribución.

«Es duro en algún sentido, pero afuera también. Lo que tiene es que la intensidad del trabajo es consensuada. ¿Vieron la película Tiempos Modernos de Chaplin? El forzado que, cada vez que cambia la palanca, anda más rápido la velocidad de la cinta, y Chaplin se enloquece. No puede completar su tarea. Eso no existe acá. No existe. Tenemos nuestro comedor, nos reunimos, hacemos turnos, tenemos tiempos laxos. Nadie le va a molestar a nadie. Eso está buenísimo».

«Textiles Pigüé», del desalojo al desarrollo

Francisco Martínez

Hemos reflexionado ya bastante con nuestra comunidad sobre aquel fatídico 12 de agosto de 2004, cuando ocupando la fábrica en resguardo de los puestos de

trabajo fuimos desalojados injustamente. Lo pudimos hacer más sobre la práctica -a veces equivocándonos y sin experiencia, se debe reconocer- que, desde la teoría, pero los resultados, por fortuna, están a la vista: casi ciento setenta puestos de trabajo -por citar solo los directos-, plena producción, alianzas estratégicas con el mercado, crecimiento sostenido. Todo, con el único objetivo de generar y compartir.

Es que, en estos últimos tiempos, y más precisamente luego de haber escriturado nuestras unidades productivas en 2014, venimos diciendo que lo mejor está por llegar. Y esto no terminó, por suerte: ya iremos comunicando más adelante a qué se dedica una organización social y productiva cuando puede estabilizar sus criterios de trabajo e ir en búsqueda del desarrollo de otras actividades.

Fue con visión, con estrategia, mucha decisión y principalmente no especulando, ofreciéndonos generosos siempre ante nuestros vecinos y conciudadanos, a quienes siempre se resalta. Les agradecemos la infinita paciencia que han tenido para con nosotros y nosotras de esperar los tiempos de maduración de estos procesos que son tan lindos como dificultosos por la precariedad existente en cada una de las fábricas y empresas

recuperadas -más de quinientas en el país- al no tener la titularidad de los predios.

Pasa que, si se demora en el tiempo lo que valientes mujeres y hombres quieren convidar, la mayoría de las veces es por la falta de decisión política y, sobre todo, por el poco conocimiento de las leyes que atienden esta problemática.

Hombres y mujeres sí, pero principalmente ellas, nuestras históricas compañeras, las primeras violentadas, las primeras en ver el humo, después los estruendos, luego los insultos y finalmente los palos. La orden judicial, no. Esa papeleta no, ahora que recuerdo. Porque arteros y bien disciplinados se suelen presentar a hacerse los malos con los laburantes, pero nunca con los evasores.

Y ahí están entonces las compañeras y los pibes de Nueva Generación en Wilde, violentamente reprimidas; que luego de eso consiguieron una Ley de Expropiación pero todavía se encuentran afuera de sus puestos de trabajo, cosa que nadie sabe a ciencia cierta explicar.

En este día, lo que queremos expresar a nuestros compañeros y compañeras que están con la angustia de estar afuera o de estar esperando en qué momento llega la arbitrariedad de los jueces, la

violencia instalada y lo que eso provoca, es que resistan, que peleen, que acusen, que exijan, que se abracen y estén siempre unidas y unidos. Les queremos expresar que se puede volver, porque nos asisten la verdad y el derecho por más que exista en este país un Poder Judicial cada vez más corrupto y alejado de pensar en impartir justicia.

Hoy Pedro me preguntó por teléfono si ya había llegado yo a la fábrica. El tipo, como todos los años, se toma el trabajo de ir viendo uno por uno y una por una a las personas que aquel día estuvimos y nos da un apretón de manos y un beso. Me tocó mi abrazo, nada mejor me sucederá este día. Pedro, como todos nosotros, aprendió que es mejor tragar un poco amargo para después poder escupir dulce. Porque actuando así queda bien claro quiénes son los violentos y a qué tipo de intereses les gusta responder.

Pero que nadie confunda toalla con mondongo. Exigimos la inmediata restitución en manos de los y las trabajadoras de todos los espacios de los que fueron despojados, porque ya quedó demostrado -y vale más en estos tiempos del «sálvese quien pueda»-, lo que son capaces de hacer las obreras y obreros de la autogestión cuando se organizan y pelean.

Lo que pasó, y sigue pasando lamentablemente, tiene que servir para algo. Y para lograr nuestras metas, tenemos que seguir formándonos, escuchar a nuestros sobrevivientes, lograr pensamiento crítico para así poder identificar a los mismos de siempre, que se quieren quedar con el trabajo, ni más ni menos, de millones de argentinas y argentinos.

(*) Francisco Martínez es director de la Cooperativa de Trabajadores «Textiles Pigüé», empresa recuperada que presidió e integra desde su fundación, y uno de los referentes del campo de la autogestión en el país.

Los trabajadores de Cresta Roja proponen soluciones para un prolongado conflicto

A consecuencia de un conflicto que ya lleva varios años sin resolver, otra vez los trabajadores de la empresa Cresta Roja, volvieron a manifestar su protesta. Esta vez, cortando la autopista Cañuelas-Ezeiza durante varias horas y contando con el apoyo del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER).

Desde el 2014 que los trabajadores suspendidos y despedidos de Cresta Roja continúan la lucha por la recuperación de una empresa que en los 4 años de macrismo se desguzó, perdiéndose más de 2.000 puestos de trabajo.

Ahora esperan que los reciban autoridades nacionales y de la Provincia de Buenos Aires para buscar una salida que incluya a todos los trabajadores, con la propuesta de continuidad a través de la Cooperativa La Cresta.

Fuentes: El Salto, APU, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano

Argentina

¡Viva MadyGraf bajo gestión obrera!

Mario Hernandez

Un 11 de agosto del 2014, los capitales buitres se fugaban del país. Los gerentes de Donnelley se iban y querían dejar 400 familias en la calle. Sobre la puerta de la gráfica se recibía la peor noticia, un cartel con un 0800: la fábrica quebró llamen a este número. Un 12 de agosto de 2014, el Ministerio dicta la conciliación. La patronal no la cumple. Los trabajadores sí: abren las puertas y comienza una nueva gesta.

Poco tiempo después, arrancan las rotativas. Luego las coseadoras se ponen nuevamente en marcha. Las aguerridas mujeres y sus hijos organizan la solidaridad activa con la gestión obrera. Luego vendrán las marchas; la pelea por la expropiación; los festivales, campeonatos, la juegoteca y la Comisión de mujeres; la unidad con Zanón y cada lucha que

surgiera en el país; los cuadernos para donar a las escuelas y la solidaridad con las familias sin techo; los encuentros obreros; las asambleas y cientos de historias que ya son parte de las páginas más combativas de la clase trabajadora.

Los pasillos, las escaleras y todos los espacios de Madygraf están atravesados por historias de charlas, lucha, y resistencia. Su historia es pasado, lleva en sí los hilos de continuidad de una generación de luchadoras y luchadores que decidieron hacerle frente a una patronal yanqui y recuperar la fábrica en defensa de sus puestos de trabajo. Es presente por el enorme ejemplo de organización que vienen dando los trabajadores y trabajadoras frente al contexto económico de ajuste y tarifazo, brindando su producción hacia escuelas, reconvirtiéndola en la pandemia, y apoyando las luchas de otros sectores. Y también es una mirada hacia adelante mostrando en pequeño las respuestas que las trabajadoras y trabajadores pueden dar a las necesidades sociales cuando toman en sus manos y deciden qué y cómo producir.

A cargo de Los Decoradores, el sábado 10 de septiembre

presentarán su Kermesse Redonda, el ritual ricotero que llegará una vez más a Garín, a la fábrica recuperada Madygraf para que explote el festejo en sus 8 años de gestión obrera.

El Club Obrero de Madygraf, vuelve a funcionar como un espacio que reúne a trabajadorxs para disfrutar del tiempo libre y poder organizarse junto a otrxs trabajadorxs.

A propósito de un nuevo año para Madygraf, las trabajadoras y trabajadores organizaron el pasado 13/08 un torneo a modo de celebración, y también como parte de la campaña por la expropiación definitiva de Donnelley para Madygraf que vienen desarrollando.

Frente a la pandemia del coronavirus, en 2020 en la fábrica montaron un laboratorio en el que comenzaron a producir sanitizante de alcohol y mascarillas para protegerse toda la cara. Frente a la grave situación que se vivía por el coronavirus, los laburantes de la empresa gráfica recuperada, dieron un ejemplo del rol que pueden jugar los trabajadores.

3 de agosto de 2022

État espagnol : Entreprises récupérées

Gessamí Forner

La nouvelle loi sur l'insolvabilité facilite et privilégie le fait que les travailleurs récupèrent une entreprise avant sa liquidation. Gessamí Forner. Article publié en castillan dans le journal El Salto le

Le projet de loi a été approuvé hier en session plénière du Congrès et va maintenant être soumis au Sénat. Le droit à l'information et à la consultation de la situation financière sera vraisemblablement abordé dans le nouveau statut du travail qui sera rédigé par le ministre dirigé par Yolanda Díaz.

» Ce sont deux pas de géant « , résume Roberto Uriarte, député d'Unidas Podemos, à propos des deux amendements introduits par son parti dans le projet de la nouvelle loi sur l'insolvabilité, voté hier en séance plénière du Congrès et qui est maintenant en cours de traitement au Sénat. Elles facilitent la récupération par les travailleurs d'une entreprise qui entre en procédure d'insolvabilité

par la capitalisation du chômage – sans qu'il soit nécessaire de devenir chômeur – et donnent la priorité à la candidature des travailleurs dans la vente aux enchères de la liquidation afin que la main-d'œuvre puisse former une société coopérative, une société de propriété des travailleurs ou une société de propriété des travailleurs.

La modification de la loi sur l'insolvabilité est une exigence européenne pour transposer une directive de l'UE « qui essaie de rendre justice : proposer des mécanismes efficaces pour sauver le plus grand nombre possible d'entreprises qui traversent une situation d'insolvabilité », explique le député. L'Union européenne a encouragé l'Espagne à réformer ce que l'on appelle la « loi de la deuxième chance », c'est-à-dire les entreprises en difficulté financière mais viables à long terme.

La mise à jour de la loi sur les faillites dépend du ministère de la justice, un portefeuille géré par le Parti socialiste. Le point central des négociations entre les partis parlementaires était le niveau de la dette publique que les organismes publics – la Sécurité sociale et le Trésor public – peuvent

amortir. L'accord final a décuplé les chiffres actuels : de 1 000 à 10 000 euros par corps. En outre, la Justice a ajouté un ensemble de mesures pertinentes qui visent à rationaliser les procédures afin que la loi agisse de manière préventive et que les entreprises en difficulté n'atteignent pas un point de non-retour, avec des dettes et des intérêts élevés qu'il est impossible pour les travailleurs intéressés par la reprise de l'entreprise d'assumer.

Afin de faciliter la reprise d'une entreprise par les travailleurs, le nouveau règlement inclut l'amendement qui donne la priorité à la proposition des travailleurs sur les candidats externes pour reprendre la gestion de l'entreprise. Le maintien des emplois est l'objectif de cet amendement de la coalition de gauche, ainsi que de favoriser l'économie sociale. Afin de pouvoir sauver l'entreprise, les travailleurs pourront capitaliser le temps qu'ils ont accumulé en cotisations de chômage, sans attendre qu'un juge liquide l'entreprise, que les travailleurs s'inscrivent au chômage et, enfin, qu'ils puissent capitaliser leur chômage. Accélérer ce processus empêchera les entreprises de continuer à s'endetter.

Le député et juriste Roberto Uriarte considère que ces deux amendements sont conformes

au mandat de l'article 129.2 de la Constitution, » qui charge les pouvoirs publics de promouvoir les différentes formes de participation dans les entreprises et les sociétés coopératives, comme l'accès des travailleurs à la propriété « . Mais pour cela, souligne Pello Igeregi, responsable des négociations collectives du syndicat basque ELA, il est nécessaire de renforcer le droit à l'information et à la consultation des travailleurs « Nous aurions souhaité que des mesures soient prises pour faciliter une réelle transparence afin que les travailleurs disposent d'éléments de jugement pour aborder une négociation » , ajoute-t-il.

Uriarte met en avant le travail de ce syndicat, en soulignant que la dernière décision obtenue ce mois-ci dans le conflit qui est actuellement considéré comme la plus longue grève d'Europe – les travailleurs en grève illimitée de l'entreprise Novaltia ont maintenant passé 1 073 jours consécutifs sans aller travailler – fait jurisprudence. Et Uriarte prévient que bien que la loi sur la faillite dépende de la Justice, la rédaction du futur statut du travail correspond au ministère de Yolanda Díaz, qui défend publiquement depuis des mois la nécessité de développer juridiquement la promotion de la participation des

travailleurs à la gestion des entreprises. Par conséquent, il n'est pas déraisonnable de s'attendre à ce que la prochaine loi comprenne des arrêts tels que celui de Novaltia, qui oblige les entreprises à partager la situation économique réelle avec les employés lors d'une consultation.

Igeregi salue les avancées du projet de la future loi sur l'insolvabilité, mais souligne que son application sera limitée aux entreprises de services et, tout au plus, à certaines entreprises industrielles, « avec peu de machines et de faible valeur ». Il manque une loi plus audacieuse qui facilite la transformation écologique et fait de l'État un participant à l'entreprise par le biais d'actions ou de participations, au cas où les travailleurs n'auraient pas suffisamment de muscles financiers avec la capitalisation du chômage.

Le syndicat ELA attend depuis des mois le projet de cette loi. Au cours des 40 dernières années, ils ont participé à des dizaines de récupérations, mais ils font l'autocritique des processus réalisés : » Nous avons récupéré des entreprises sans réussir à les faire fonctionner d'une manière différente de la logique capitaliste, c'est pourquoi nous évaluons les mesures à adopter avec Talaios Kooperatiba, pour voir ce que

nous sommes capables de faire dans un avenir proche « . Talaios est une coopérative qui fournit des conseils en économie sociale à d'autres projets.

Le journal Diagonal, précurseur d'El Salto, a interviewé des travailleurs de Muebles Salcedo en Navarre en 2014. Après la crise financière de 2008, l'entreprise a connu des problèmes économiques. En réduisant la taille des effectifs, suivant les directives d'un audit externe, 50 travailleurs ont récupéré l'entreprise en faillite en 2012. Juan Antonio Pascual était l'un d'entre eux, âgé de 58 ans à l'époque et ayant peu de chances de trouver un autre emploi avant la retraite, comme beaucoup de ses collègues, a-t-il confié hier à El Salto. Ils ont réussi à capitaliser 1,1 million d'euros et à coopérer avec l'entreprise. Aujourd'hui, il fabrique toujours des meubles. Pascual a pris sa retraite à l'âge de 61 ans. « Chaque fois qu'un collègue part, un autre arrive », ajoute-t-il.

<https://www.elsaltodiario.com/empresas-recuperadas/nueva-ley-concursal-facilita-prioriza-trabajadores-recuperen-antes-liquidacion>

1^{er} juillet 2022

Traduction de Richard Neuville.

Argentine

Vive MadyGraf sous gestión ouvrière !

Mario Hernandez

Le 11 août 2014, les vautours capitalistes ont fui le pays. Les gérants de Donnelley sont partis, laissant 400 familles à la rue. Sur la porte de l'entreprise a été reçue la pire nouvelle, un panneau avec un numéro 0800 : « l'usine a fait faillite appelez ce numéro ». Le 12 août 2014, le Ministère publie la conciliation. Les employeurs ne s'y conforment pas. Les travailleurs si : ils ouvrent les portes et une nouvelle aventure commence.

Peu de temps après, les presses démarrent. Ensuite, les machines à coudre sont remises en mouvement. Les femmes courageuses et leurs enfants organisent une solidarité active avec la gestion ouvrière.

Suivent alors plusieurs étapes : la lutte pour l'expropriation; les festivals, les championnats, la ludothèque et la Commission

des femmes; l'unité avec Zanon et toutes les luttes qui ont surgi dans le pays; des cahiers à donner aux écoles et de la solidarité avec les familles sans abri; ses réunions de travailleurs et travailleuses; les assemblées et des centaines d'histoires qui font déjà partie des pages les plus combattives de la classe ouvrière.



Les couloirs, les escaliers et tous les espaces de Madygraf sont traversés par des histoires de discussions, de lutte et de résistance. Son histoire vient du passé, elle porte en elle les fils de la continuité d'une génération de combattants et combattantes qui ont décidé d'affronter un employeur yankee et de récupérer l'usine

pour défendre leurs emplois. Son histoire est aussi présente, en raison de l'exceptionnel exemple d'organisation que les travailleurs et travailleuses ont donné face au contexte économique d'austérité et tarifazo¹, offrant leur produc-



tion aux écoles, la reconvertissant dans la pandémie et soutenant les luttes d'autres secteurs. Et c'est aussi un regard vers l'avenir, montrant, modestement, comment les travailleurs et travailleuses peuvent répondre aux besoins sociaux lorsqu'ils/elles prennent leurs affaires en main et décident quoi et comment produire.

[...] Le Club ouvrier de Madygraf fonctionne à nouveau, comme un espace qui rassemble

les travailleurs et travailleuses, pour profiter du temps libre et pouvoir s'organiser avec d'autres travailleurs et travailleuses.

À l'occasion d'une nouvelle année de gestion ouvrière à Madygraf, les travailleurs et travailleuses ont organisé un tournoi le 13 août, aussi dans le cadre de la campagne menée pour l'expropriation définitive de Donnelley.

Face à la pandémie de coronavirus, en 2020, ils et elles ont mis en place un laboratoire dans l'usine, et ont commencé à produire du désinfectant et des masques pour protéger tout le visage. Lors de la crise liée au coronavirus, « les voleurs et voleuses » de l'entreprise graphique récupérée, ont donné un exemple du rôle que les travailleurs et travailleuses peuvent jouer.

¡Viva MadyGraf bajo gestión obrera!

1. Ensemble de mesures gouvernementales concrétisées par de très fortes augmentations des factures d'eau, gaz et électricité.

Ukraine : «La pratique de l'autogestion est généralisée »

À la suite de l'agression impérialiste russe du 24 février 2022, la société ukrainienne s'est mobilisée pour défendre son existence. Le 11 mars l'association Autogestion dans une déclaration publiée sur son site relevait que « La guerre a provoqué... une auto-organisation populaire – tout autant spontanée qu'encouragée par les institutions – combinant initiatives citoyennes et actions administrative, gouvernementale, militaire. À l'initiative des travailleur·uses, la reconversion de la production de nombreuses entreprises pour soutenir l'effort de guerre a été organisée. Une usine de métallurgie fabrique maintenant des barrages anti-chars. « On a eu juste besoin d'une journée, l'ingénieur nous a dessiné le prototype et on l'a mis en production » explique un ouvrier. Le directeur de l'entreprise ajoute « Nous avons arrêté notre production habituelle pour nous consacrer à la fabrication de ces structures métalliques qui serviront de barrages pour arrêter les chars

des occupants. Depuis le début de l'invasion, on est mobilisés pour fabriquer tout ça. Mais nous sommes vite arrivés à court de matière première. Heureusement des bénévoles nous ont apporté plus de métal et on a pu élargir la production de ces barrages. Certaines fabriquent des herses également. » À Lviv des femmes et des enfants se sont organisés pour fabriquer des filets de camouflage pour l'armée. Une brasserie qui dispose d'un stock de bouteilles s'est reconvertie en usine de fabrication de cocktails Molotov. »

Nous sommes allés à la rencontre de ces autogestionnaires ukrainiens. Nous publions l'interview de Ksénia, membre de la coopérative QueerLab qui a pris le temps et a eu l'énergie de répondre à nos questions alors que les drones irano-russe semaient la mort et les destructions en Ukraine. Qu'elle en soit ici remerciée.

Patrick Le Tréhondat

Peux-tu présenter pour nos lecteurs, vos engagements et vos activités ?

Nous sommes QueerLab, installé dans une coopérative de Lviv en Ukraine. Nous essayons de donner aux personnes homosexuelles des possibilités de travail indépendant et aussi de faire des dons pour l'armée ukrainienne.

Parlons de la coopérative avant le 24 février. Peux-tu nous dire quelques mots sur son histoire, ses activités, son fonctionnement ou son organisation ?

Nous n'existions pas avant le 24 février. L'escalade de la guerre a été l'élément déclencheur qui nous a permis de nous réunir.

Et depuis le 24 février, qu'est-ce qui a changé pour la coopérative ? Pour ses activités, ses membres et pour toi ?

Depuis l'escalade de la guerre, nous avons décidé de créer une coopérative pour permettre aux personnes homosexuelles qui ont dû fuir la guerre de gagner un peu d'argent avec ce qu'elles savent faire le mieux. Des personnes de Lviv sont également présentes dans notre coopérative. Nous voulons montrer que les homosexuel·les participent à l'effort de guerre. Dans notre pays, nous luttons toujours pour l'égalité mais certaines personnes n'hésitent pas à lancer de folles accusations selon

lesquelles les homosexuels et les féministes ne font rien pendant cette guerre. Nous sommes un petit exemple qui montre que ce n'est pas vrai. Nous sommes dans le même bateau, nous voulons notre indépendance et la sécurité de nos citoyen·nes. C'est pourquoi nous faisons de notre mieux pour essayer de soutenir notre armée.

Penses-tu que cette coopérative est un outil de transformation sociale de l'Ukraine ou participez-vous à son évolution progressiste ? Et comment ?

Oui. Une évolution progressiste s'exprime précisément dans les transformations sociales que notre coopérative promeut dans la société. Par exemple, une transformation sociale est l'aide à l'emploi pour les groupes vulnérables. Cela est devenu particulièrement important pendant la guerre, lorsque beaucoup de nos membres ont dû quitter leur domicile et leur lieu de travail. En outre, notre coopérative détruit le stéréotype selon lequel la communauté LGBT est un segment inutile de la société, car selon le concept de notre coopérative, nous reversons 50 % des bénéfices aux forces armées ukrainiennes, et nous organisons également des événements visant à collecter des fonds pour l'armée.

Ici, on parle beaucoup d'autogestion (самоуправління ?) Est-ce un sujet qui est abordé en Ukraine, dans les coopératives par exemple ?

Oui, la pratique de l'autogestion est généralisée. En Ukraine, ce sujet est discuté et est pertinent, car tout le monde est impressionné par le phénomène d'auto-organisation de diverses équipes, de volontaires, d'activistes, dont la montée est devenue perceptible avec le début d'une guerre à grande échelle ! Notre équipe est également autogérée, chacun s'engage et coordonne la direction. En outre, adhérant à la structure horizontale, nous n'avons pas de « chefs » ou de patrons.

20 octobre 2022

Qui s'interroge sur les conditions de travail dans les usines ? Qui souhaite connaître l'empreinte environnementale des masques au cours du cycle de vie du produit ? Nous n'en savons jamais que ce que nous en disent les services de communication des entreprises concernant les engagements des entreprises en terme de responsabilité sociale et environnementale.

Un silence complice s'est imposé. Les producteurs français de masques sont en forcés de casser les prix pour tenter de concurrencer les prix de ces masques importés tout en maintenant leur exigence de normes qualité. Il y a trois ans, l'Etat et les entreprises ont investi dans la Coop de Masques mais ensuite, rares furent ceux qui, honorant leurs engagements, lui ont passé commande. Aujourd'hui, elle dépose le bilan faute de commandes.

Or, rappelons-nous, la Coop de Masques a été créée pour réparer l'erreur de la fermeture de l'usine de Plaintel par le groupe Honeywell qui a délocalisé en 2018 dans une période de force majeure où équiper la population de masques était une priorité nationale. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, le coût de l'énergie a-t-ils changé les priorités alors qu'une huitième vague pandémique s'annonce et que nos

approvisionnements sont menacés par l'incertitude sur le commerce mondial?

Avec le dépôt de bilan de la Coop de Masques, un constat s'impose : Dans l'Europe néolibérale, il n'y a pas d'alternative au marché. Des expériences locales, environnementales et coopératives ne sont pas compétitives. Défendre la coopération et de la solidarité dans le secteur du sanitaire et social est devenu un défi.

Pour quelques centimes de plus, c'est l'échec assuré. Mais si demain la Chine ne livre pas ses quelques 1,7 millions de masques à la Préfecture de police de Paris, ses 5 millions de masques aux Armées et au moins autant à la Région des Hauts de France, cela promet de nouveaux pugilats sur les tarmacs.

Alors que les aides publiques à destination des entreprises se chiffrent à au moins 157 milliards d'euros par an, ce qui en fait le premier poste du budget de l'État, les faillites se multiplient et la dette publique grandit. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la Coop de Masques qui est menacée, c'est toute la filière française de production de masques. La Coop de Masques représentait l'espoir d'une réindustrialisation de la France, d'une pluriactivité dans une région comme la Bretagne,

d'une vraie démocratie sanitaire fondée sur la confiance grâce à un marché régulé.

La Coop de Masques n'aurait pas dû mourir. Elle avait une utilité sociale et des structures comme celle-là toujours au principe d'intérêt général.

Les signataires de la tribune :
Salarié-es, membres fondateurs
de la Coop des masques ou
Parlementaires :

David Cocault ; Simon Duteil
; Murielle Guibert ; Patrick
Guilleminot ; Murielle Lepvraud
; Serge Le Quéau ; René Louail
; Tristan Lozach ; Elen Riot ;
Aurore Ruellan ; François Ruffin
; Christophe Winckler.

18 octobre 2022

Colombie : Réforme agraire et rurale globale, économie solidaire

Rafael Enciso Patiño

Nous publions ci-dessous un article de Rafael Enciso Patiño, Économiste et chercheur à l'Université autonome de Colombie, engagé dans les programmes de reconversion des guérilleros des FARC et membre actif du Réseau international de l'économie des travailleuses et des travailleurs, auquel l'association pour l'Autogestion participe. Cet article sur les défis de la « réforme agraire et rurale globale » date de la mi-juillet mais il est plus que jamais d'actualité. Depuis Gustavo Petro a été investi dans ses fonctions de président de la République de Colombie le 7 août et mi-octobre il a lancé son principal projet de mandature, la réforme agraire.

Le gouvernement de Gustavo Petro et le Pacte historique devront faire face à d'énormes défis et problèmes de la société

colombienne, accumulés et aggravés au fil des siècles. Entre autres, apparaissent comme prioritaires : 1. La mise en œuvre des accords de paix entre les FARC et le gouvernement national et la construction d'une paix complète, stable et durable, avec des réparations pour les victimes ; 2. vaincre la faim et la pauvreté, ce qui nécessite la mise en œuvre de la réforme agraire et de la réforme rurale intégrale, envisagées dans le premier point de l'accord de paix ; et 3. vaincre le trafic de drogue, ce qui implique la substitution des cultures illicites par des cultures destinées à produire des aliments agricoles et des matières premières pour l'industrie.

Dans les trois cas, les politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement Duque ont été désastreuses et les accords de paix n'ont pas été appliqués ou l'ont été de manière erratique, dans le cadre de projets décousus et sous-financés, qui n'ont pas été durables pour de nombreuses raisons, y compris l'impossibilité de rivaliser avec succès dans une économie néolibérale monopolisée et qui n'ont pas la capacité de surmonter les dynamiques économiques et

sociales qui ont généré le conflit et la violence dans les territoires.

Avec la mise en œuvre de la proposition présentée ci-dessous, qui est un complément nécessaire à l'accès à la terre productive (un aspect essentiel de la Réforme Agraire qui ne sera pas traité ici), il est possible de commencer à résoudre conjointement, bien que partiellement, ces trois problèmes, en utilisant au mieux les ressources disponibles de toutes sortes, de produire de bons résultats dans un temps relativement court, et de créer un environnement social favorable et un soutien au changement historique et au nouveau gouvernement.

Conformément aux Accords de paix entre le gouvernement national et les FARC-EP, pour leur transition collective et leur incorporation à la vie civile et légale, ils ont créé l'entité coopérative Economías Solidarias del Común - ECOMÚN, pour apporter une réponse et une solution à leurs besoins vitaux : économiques, sociaux et culturels, individuels, collectifs et familiaux.

Le premier point des accords de paix contient l'engagement de l'État à promouvoir et à financer les formes d'économie associative et solidaire parmi la population rurale et paysanne, en premier lieu dans les territoires où le

conflit armé a été le plus intense. Planification stratégique dans les territoires pour réorganiser et/ou construire des chaînes et des réseaux socio-économiques intégrés dans lesquels s'articulent les producteurs ruraux.

Pour la commodité générale de la société, afin de contribuer à générer du travail productif et des revenus parmi la population des secteurs ruraux, et d'augmenter la production et la productivité du travail, principalement pour produire des aliments sains qui contribuent à combattre et à vaincre la faim en Colombie, il est nécessaire et approprié que les institutions publiques et les mouvements sociaux encouragent l'organisation de la population en coopératives et autres formes associatives de l'économie solidaire, en promouvant et en planifiant leur articulation dans des réseaux et des chaînes socio-économiques qui comprennent : financement, production agricole et agro-industrielle, distribution/commercialisation, échange et consommation. Les formes de production et de propriété les plus diverses pourront y participer, grâce à des schémas d'association intelligents et innovants : privés, publics et communaux ; familiaux, communautaires et solidaires ; petites, moyennes et grandes entreprises

privées ; ainsi que des entreprises publiques et mixtes incluant tous les éléments ci-dessus. Il conviendra de promouvoir les alliances public-communauté, en plus des alliances public-privé qui existent déjà. Les orientations stratégiques seront déterminées par l'objectif d'obtenir les plus grands avantages sociaux possibles.

Il est essentiel de promouvoir de nouvelles formes de relations véritablement démocratiques, équitables et complémentaires entre les producteurs et les consommateurs urbains et ruraux.

Ces réseaux et chaînes socio-économiques pourraient également inclure des coopératives ou des entreprises associatives solidaires créées par les anciens combattants des FARC qui font partie de l'ECOMÚN, et plus tard par celles formées par les formes économiques que d'autres mouvements insurgés, comme l'ELN, peuvent choisir pour leur transition vers la vie civile et légale.

Cela permettra de formuler et de mettre en œuvre des programmes et des projets concomitants qui impliquent simultanément différents groupes de population : 1. la société civile organisée (paysans, peuples indigènes et descendants d'Africains) ; 2. les victimes du conflit armé ; 3. les ex-combattants des FARC (et plus tard, des

organisations armées illégales qui rejoignent les nouveaux processus de paix) ; 4. les cultivateurs de coca et d'autres plantes utilisées illicitement ; 5. les institutions qui participent au processus de paix. 6 : Universités et institutions techniques.

Afin de construire des chaînes et des réseaux socio-économiques territoriaux, il est essentiel de tirer parti de la capacité de planification et de financement de l'État à tous les niveaux : Les potentialités et les capacités de travail nationales, régionales, départementales et municipales, en profitant des profils productifs municipaux créés au cours des années précédentes par le ministère du Travail, pour produire des biens, des services et des connaissances qui permettent de vaincre la faim et la pauvreté, de satisfaire les besoins fondamentaux et prioritaires, de promouvoir et de respecter les droits humains, économiques, sociaux, culturels et environnementaux de la population et d'améliorer progressivement sa qualité de vie, ainsi que, dans un avenir proche, de produire des excédents pour d'autres territoires et pour l'exportation, générant des devises pour le pays.

Participation des producteurs ruraux à la propriété des agro-industries par le biais de l'économie solidaire.

Il est essentiel que les producteurs ruraux puissent participer à la propriété des agro-industries et des maillons structurels des chaînes de production et à la commercialisation des produits, car ce sont eux qui permettent la transformation des produits pour satisfaire les différents besoins, les rendre durables et les amener aux consommateurs. Et parce que c'est dans ces processus qu'est générée la plus grande valeur ajoutée, qui jusqu'à présent a été appropriée par les propriétaires des agro-industries auxquelles les producteurs primaires ne participent pas, et qui ne sortiront jamais de la pauvreté tant qu'ils ne pourront pas participer aux conditions d'achat et à la définition des prix de leurs produits et recevoir une part équitable de la valeur ajoutée dans la transformation et la commercialisation agro-industrielles.

Aucun paysan moyen, indigène ou afro-descendant de notre pays n'a aujourd'hui la possibilité de construire et de gérer individuellement une usine de transformation moderne, efficace et durable de produits agricoles, de fruits et de légumes ; ni un abattoir industriel ou une usine d'abattage d'animaux ; ni une usine d'engrais organiques ; ni une usine d'aliments concentrés pour

animaux. Ils ne peuvent pas non plus construire un simple centre de collecte, et encore moins commercialiser leurs produits en les amenant dans les grands centres de consommation. Ils sont donc obligés de vendre aux intermédiaires et aux agro-industriels.

Mais ils pourraient le faire collectivement, avec le soutien de l'État, par le biais de l'économie solidaire et en mettant en commun les ressources que l'État alloue ou a jusqu'à présent alloué à différents groupes sociaux - pour de petits projets productifs, généralement désordonnés et non durables - comme incitation à la production, comme réparation pour les victimes du conflit armé ou comme contribution à la paix et à la lutte contre le trafic de drogue, entre autres.

Il est important de souligner que l'État n'a pas la possibilité de financer, sur un même territoire, une usine de transformation de fruits et légumes pour les paysans, une autre pour les peuples indigènes, une autre pour les victimes du conflit armé, une autre pour les anciens combattants des FARC en voie de réincorporation dans la vie légale, et une autre pour les petits producteurs de coca qui participent à des programmes de substitution de cultures. Et cela vaut pour tous les maillons struc-

turels d'une chaîne de production. Une paix stable et durable se construit dans les territoires avec la participation conjointe des acteurs sociaux à la propriété collective des agro-industries et des chaînes de production.

Le gouvernement national, par l'intermédiaire du Département national de la planification et des ministères de l'agriculture et de l'industrie et du commerce, doit élaborer et appliquer une méthodologie de planification stratégique avec la participation des acteurs sociaux susmentionnés et d'autres, afin de concevoir et de construire des chaînes et des réseaux socioproductifs intégraux dans lesquels chacun peut participer de manière organisée et collective à leur gestion stratégique et en tant que copropriétaires. Cela peut et doit se faire à travers l'économie solidaire et coopérative, en unissant les ressources que l'État a jusqu'à présent allouées à des groupes de population distincts pour planifier et créer des chaînes de production et tous leurs liens structurels (agro-industries, centres de collecte et de commercialisation), afin que tous puissent produire conjointement et vivre dignement de leur travail avec leurs familles.

Les producteurs agricoles pourraient recevoir des ressources de

l'État (incitations, réparations et crédits), à utiliser : une partie pour la production dans leurs exploitations ou parcelles de terre, et une autre partie pour contribuer en tant que fondateurs et copropriétaires des agro-industries dont ils ont besoin pour améliorer leur production.

À titre d'exemple : dans une localité ou une région où l'on produit ou peut produire des fruits et des porcs, des poulets ou des poissons, une partie des ressources qui leur sont destinées sera utilisée pour encourager la production agricole et animale sur leurs parcelles familiales ; Et une autre partie sera utilisée pour qu'ils puissent contribuer au capital d'une usine agro-industrielle de transformation des fruits pour produire des jus, de la pulpe de fruits, des fruits coupés et emballés, parmi de nombreux autres produits dérivés ; ou pour construire une usine d'engrais organiques pour leurs cultures, ce qui les libérera des produits agrochimiques destructeurs de l'environnement et de leurs prix élevés, en tirant parti de tous les déchets de l'usine de jus.

Une partie des ressources pourrait également être utilisée pour promouvoir la production de bétail (porcs, poulets, poissons, etc.) sur leurs parcelles ; et une autre partie pour fournir des apports en capital

pour construire une usine de production d'aliments équilibrés pour animaux (ABA), - en y participant en tant que propriétaires coopératifs -, qui achèterait une partie des intrants nécessaires aux producteurs agricoles de la région (marché assuré), et qui leur vendrait à des prix équitables, les aliments équilibrés de bonne qualité dont ils ont besoin.

Les universités et les institutions techniques devraient participer à la création de ces agro-industries en apportant leurs connaissances et leur expertise technique. Les étudiants et/ou les professeurs qui participent créeront pour eux-mêmes des possibilités de travail décent et équitablement rémunéré.

Tout cela contribuera à générer des aliments pour vaincre la faim en Colombie, des sources de travail et de revenus pour une vie digne, prospère et enrichissante, à vaincre en partie le phénomène du trafic de drogue (substitution durable des cultures illicites) et à construire la paix territoriale.

13 juillet 2022
Cumara, Meta

Ukraine: “The practice of self-management is widespread”

Following the Russian imperialist aggression of February 24, 2022, society mobilized to defend its existence. On March 11, the Autogestion association in a statement published on its website noted that “The war has provoked... popular self-organization – both spontaneous and encouraged by institutions – combining citizen initiatives and administrative, governmental and military action. On the initiative of the workers, the conversion of the production of many companies to support the war effort was organized. A metallurgy factory now manufactures anti-tank booms. “We just needed one day, the engineer drew the prototype for us and we put it into production,” explains a worker. The director of the company adds “We have stopped our usual production to devote ourselves to the manufacture of these metal structures which will serve as dams to stop the tanks of the occupants. Since the beginning of the invasion, we have been mobilized to

manufacture all of this. But we soon ran out of raw materials. Fortunately, volunteers brought us more metal and we were able to expand the production of these dams. We have a group on the Telegram application that brings together about fifteen factories in the region. Some also make harrows. In Lviv, women and children have organized themselves to make camouflage nets for the army. A brewery that has a stock of bottles has been converted into a Molotov cocktail factory. » We went to meet these Ukrainian in favour of the self-management. We are publishing the interview with Ksénia, a member of the QueerLab cooperative who took the time and had the energy to answer our questions as Iranian-Russian drones sowed death and destruction in Ukraine. May she be thanked here.

Patrick Le Trehondat

Can you introduce yourself for our readers, your commitments and your activities?

We are QueerLab, located in Lviv Ukraine cooperative. We try

to give queer people possibilities for self employment and donate money for Ukrainian military

Let's talk about the cooperative before February 24th. Can you tell us a few words about its history, what are its activities, how does it work or organized ?

We didn't exist before 24th of February. The escalation of war became the trigger for us to come together.

And since February 24, what has changed for the cooperative? For its activities, its members and for you?

Since the escalation of war we decided to create cooperative as a platform for queer people who had to flee from war to make some money for themselves with what they are the best at. Also people from Lviv are present in our cooperative. We want to show that queer people help during this war too. We still struggle in our country in the fight for equality and some people are not shy to make wild accusations that queer parole and feminists do nothing during this war. We are one small example that it is not true. We are in the same boat we want our independency and safety for our citizens. That's why we are doing the best we can to try to support our army

Do you think that this cooperative is a tool for the social transformation of Ukraine or take part in its progressive evolution? and how ?

Yes. Progressive evolution is precisely expressed in the social transformations that our cooperative promotes in society. For example, such a transformation is job assistance for vulnerable groups. This became especially important during the war, when many of our staff had to leave their homes and workplaces. Also, our cooperative destroys the stereotype that the LGBT community is a useless segment of society, because according to the concept of our cooperative, we will donate 50% of the profit to the Armed Forces of Ukraine, and we also hold events aimed at raising funds for the army.

Here we talk a lot about self-management (самоуправління?) Is this a topic that is discussed in Ukraine, in cooperatives for example?

Yes, the practice of self-management has become widespread. In Ukraine, this topic is discussed and is relevant, because everyone is impressed by the phenomenon of self-organization of various teams, volunteers, activists, a special wave of which became noticeable with the beginning of a full-scale war! Our team also

has self-management, everyone is engaged and coordinates their direction. Also, adhering to the horizontal structure, we do not have «chiefs» or bosses

20 october 2022

La red de “La Economía de las Trabajadoras y Trabajadores” se creó en 2007. Cada dos años se realizan un Encuentro Internacional y encuentros regionales intercalados. Estos encuentros articulan un espacio de debate entre trabajadores y trabajadoras, militantes sociales y políticos, intelectuales y académicos sobre los problemas y las potencialidades de la “economía de los trabajadores y trabajadoras”, basada en la autogestión en el marco de las actuales condiciones del capitalismo mundializado. La red agrupa empresas recuperadas, experiencias de autogestión del trabajo, cooperativas, sindicatos, campesinos, movimientos sociales, corrientes políticas e intelectuales, entre otros, de más de 35 países.

Le réseau de « l'économie des travailleurs et des travailleuses » a été créé en 2007. Tous les deux ans se tiennent une rencontre internationale et des rencontres régionales intercalées. Elles articulent un espace de débat entre travailleur-se-s, militants sociaux et politiques, intellectuels et universitaires sur les problèmes et potentialités de « l'économie des travailleur-se-s », fondée sur l'autogestion dans le cadre des conditions actuelles du capitalisme. Le réseau regroupe des entreprises récupérées, des expériences d'autogestion du travail, des coopératives, des syndicats, des paysans, des mouvements sociaux, des courants politiques et intellectuels, entre autres, de plus de 35 pays.

The network of “workers 'and workers' economy” was created in 2007. Every two years an international meeting and intercalated regional meetings are held. They articulate a space for debate between workers, social and political activists, intellectuals and academics on the problems and potentialities of the "workers' economy", based on self-management in the context of current conditions. of capitalism. The network brings together recovered companies, experiences of self-management of work, cooperatives, unions, peasants, social movements, political and intellectual currents, among others, from more than 35 countries.

<https://economiatrabajadors.com/>

<https://www.youtube.com/channel/UCYFx2H0YrG10IWzXiP7scfQ/videos>

<https://www.facebook.com/economiatrabajadores>